



Reflexiones sobre la enseñanza y regulación de la ética y la responsabilidad profesional en la abogacía



Reflexiones sobre la enseñanza y regulación de la ética y la responsabilidad profesional en la abogacía

**Beatriz Boza Dibos
Fernando Del Mastro Puccio
Fernando Castañeda Portocarrero
Alex Rueda Borrero**



Primera Edición: Enero - 2020

ANA TERESA REVILLA VERGARA

Ministra de Justicia y Derechos Humanos

FERNANDO RAFAEL CASTAÑEDA PORTOCARRERO

Viceministro de Justicia

ALEX MICHAEL RUEDA BORRERO

Director General de Justicia y Libertad Religiosa

CARLOS ALFREDO VILLAVICENCIO RÍOS

Decano de la Facultad de Derecho
Pontificia Universidad Católica del Perú

FERNANDO DEL MASTRO PUCCIO

Coordinador del Área de Ética
Facultad de Derecho
Pontificia Universidad Católica del Perú

Índice |

Presentación	07
--------------------	----

Introducción	08
--------------------	----

Parte I: Enseñanza del derecho

¿Cómo diseñar y dictar un curso de ética y responsabilidad profesional del abogado en el Perú? Beatriz Boza Dibos	10
--	----

¿Cómo pueden las facultades de derecho impactar en la ética de sus estudiantes? Fernando Del Mastro Puccio	37
---	----

Parte II: Regulación

Una propuesta de reforma de la abogacía frente a la crisis del sistema de justicia Fernando Castañeda Portocarrero	51
---	----

El fortalecimiento de la práctica jurídica en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Alex Rueda Borrero	62
--	----

Presentación

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa y, su unidad orgánica, la Dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica, es el ente encargado de formular políticas y promover mejoras para el fortalecimiento de la práctica jurídica, desde la formación del alumnado hasta el ejercicio profesional, en coordinación con las Escuelas o Facultades de Derecho.

Para nosotros como ente ejecutivo, la contribución de la academia en la elaboración de insumos y materiales de enseñanza relacionados con la ética y la probidad, que sean útiles para la implementación de políticas y medidas normativas que tienen repercusión en nuestra sociedad, constituye un elemento valioso. Como parte de este compromiso, el Minjusdh suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Pontificia Universidad Católica del Perú, a fin de concretar esfuerzos para la publicación y realización de actividades en temas de justicia y derechos humanos, así como aquellas enfocadas en promover e incentivar la probidad e integridad en la enseñanza del derecho y en el ejercicio de la abogacía.

Es así que, en virtud de esta alianza orientada a la consecución de estos fines, presentamos el libro «Reflexiones sobre la enseñanza y regulación de la ética y la responsabilidad profesional en la abogacía», el cual contiene artículos académicos de docentes de la PUCP y de las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Viceministerio de Justicia y la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa.

Confiamos en que esta publicación será un insumo valioso para la administración pública, la academia, y la ciudadanía en general.

Fernando Castañeda Portocarrero
Viceministro de Justicia

Introducción

El quehacer de quienes ejercen la abogacía impacta de modo directo y profundo en el nivel de justicia que existe dentro de una sociedad. De hecho, los y las profesionales del derecho intervienen en todo asunto de relevancia social, desde un contrato entre privados, hasta la elección de las más importantes autoridades, y pueden ser vehículo del respeto y la garantía de los derechos o instrumento de perversión a favor del mejor postor.

Si la abogacía no se ejerce conforme a los valores y deberes éticos que le dan sentido, se pervierten los diversos sistemas que operan en nuestra sociedad y la vigencia del Estado Constitucional de Derecho se torna en una ilusión.

Se hace necesario, entonces, reflexionar y plantear propuestas para mejorar la ética en el ejercicio del derecho. Es una meta compleja, que exige acciones a nivel de formación y regulación.

Respecto a lo primero, advertimos una gran necesidad de tomar acciones a nivel de las facultades de derecho, que den centralidad a la formación en ética y responsabilidad profesional. ¿Se aprenden los valores y deberes propios de nuestra profesión en las facultades de derecho? ¿Se enseña a través del ejemplo? ¿Se comprenden el sentido y los límites de nuestra profesión?

En cuanto a lo segundo, tenemos también retos importantes: ¿la regulación en nuestro país contribuye a la práctica ética del derecho? ¿Se aplican las normas del Código de Ética? ¿Qué rol están jugando los colegios de abogados? ¿Qué papel está cumpliendo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? ¿Qué mejorar regulatorias podrían implementarse?

Esta publicación es un importante esfuerzo que seguimos, desde Derecho PUCP y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por incentivar el conocimiento y las acciones relativas a la ética de los y las profesionales del derecho. Los cuatro artículos que presentamos están agrupados en dos ejes: (i) enseñanza del derecho y (ii) regulación de la responsabilidad profesional.

Respecto a la enseñanza del derecho, Beatriz Boza, que ha liderado múltiples proyectos e innovaciones en la materia, nos comparte un de sus principales legados: cómo diseñar

y dictar un curso de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado en nuestro país. Su artículo nos muestra reflexiones y consejos desde la experiencia, con una claridad y concreción que llaman a la acción. De mi lado, en mi trabajo, planteo una interrogante desde su aproximación psicológica a la materia: ¿pueden las facultades de derecho impactar en la ética de sus estudiantes? Sobre el particular, planteo reflexiones sobre el impacto de nuestras vivencias pasadas en nuestra ética, y exploro las posibilidades que tienen las facultades para promover la maduración ética de sus estudiantes.

En lo relativo a la regulación, Fernando Castañeda describe una historia legislativa reciente, de mucho interés para pensar la historia de la ética profesional en nuestro país. En efecto, el Viceministro Castañeda da cuenta del proceso legislativo relativo al Proyecto de Ley para Incentivar la Probidad en la Abogacía, presentado por el Poder Ejecutivo como parte de las medidas para la reforma del sistema de justicia. En ese contexto, da cuenta de las bondades que tenía la propuesta, al introducir el eje ético en diversos planos, como el de la enseñanza del derecho, el de los concursos para acceder a la judicatura, entre otros. Al mismo tiempo, describe y critica los argumentos del Congreso para rechazar la propuesta.

En segundo lugar, Alex Rueda muestra acciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que buscan contribuir a la mejora ética de la abogacía. Nos presenta, en esa línea, avances del Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional (RNAS). Se trata de una contribución de alto valor, dada la falta de información acerca del actuar de los abogados y abogadas. Nos muestra, asimismo, otras iniciativas de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa que tiene a su cargo y que están enfocadas en el programa Secigra. Estas buscan promover la ética en los estudiantes de derecho que acceden a realizar sus prácticas en el sistema de justicia. Las propuestas y avances, tanto a nivel del RNAS como del Secigra, nos permiten avizorar resultados concretos de alto valor.

Esperamos que estas primeras reflexiones tengan acogida y deriven en nuevos esfuerzos y publicaciones, por el mejoramiento ético de nuestra profesión.

Fernando Del Mastro Puccio

Coordinador del Área de Ética y Responsabilidad Profesional
Facultad de Derecho PUCP

PARTE I

ENSEÑANZA DEL DERECHO

¿CÓMO DISEÑAR Y DICTAR UN CURSO DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO EN EL PERÚ? (*)

Beatriz Boza (**)

Socia Ernst & Young

CONTENIDO: Introducción. I. El perfil de egreso del Curso de Ética y Responsabilidad Profesional en contexto. II. ¿Cómo concibo el proceso de enseñanza-aprendizaje en Ética y Responsabilidad Profesional del abogado? III. Recursos para el aprendizaje. Anexos.

Introducción

“Creo que aprendí que el ser abogado no solo es una profesión u oficio. Sino que al optar por esta profesión estoy asumiendo una responsabilidad. He madurado la idea que el ser abogado no es únicamente mi fuente de dinero o de lo que voy a vivir, sino, sobre todo, al optar por una carrera estoy optando por quién voy a ser. He aprendido de mí mismo que puedo dar más cuando me lo propongo, que puedo ser capaz de aportar ideas, he aprendido a escuchar a otros, entre otras cosas.” (testimonio de un estudiante)

Partiendo de la idea de que la ética se aprende en casa, ¿no bastaría, acaso, que los alumnos leyese antes de graduarse el Código de Ética de los Abogados? ¿Es necesario destinar en la Facultad de Derecho todo un curso a esta materia? En un contexto como el actual, en el que el mercado demanda tecnicismo y especialización, ¿no deberían dedicarse esas horas lectivas a materias de mayor demanda y utilidad en el mercado? Quienes se hacen esas preguntas quizás olvidan considerar, al responderlas, la responsabilidad de una Facultad de Derecho de formar a la persona que ejercerá la profesión de abogado.

Es que la abogacía no es solo destrezas y conocimientos, sino también una forma de ser. El graduado de Derecho debe conocer y haber interiorizado las buenas prácticas de la profesión y comprometerse con el ejercicio responsable del Derecho. Esto pasa por entender en su vida precisamente el aporte de las buenas prácticas en el Derecho vinculadas, por ejemplo, a la relación con el cliente, al deber de guardar el secreto profesional, evitar conflictos de interés, ejercer celo en el patrocinio, cuidado de los bienes del cliente, relación con la autoridad y su responsabilidad con la sociedad. El ejercicio profesional se desarrolla dentro de un marco conceptual que el graduado debe comprender a la par de conocer la estructura propia de análisis de las instituciones de responsabilidad profesional del abogado. Y, más allá de todo ello, debe comprender y sentir la misión de la profesión en su fuero interno, así como su importancia en nuestra sociedad. Este, como esbozo a continuación, es el gran desafío de las facultades de Derecho en nuestra sociedad, sobre todo porque la universidad no funciona en una realidad paralela, sino que están insertas en nuestra cultura y nuestra sociedad.

A continuación, presentaré brevemente el contexto en el que se desarrolla la actividad profesional del abogado, para, luego, pasar a abordar, también de manera breve, la realidad de la enseñanza del Derecho en nuestro medio. En ese marco, plantearé cuál es el Perfil de Egreso del Curso de Ética y Responsabilidad Profesional que diseñé y dicté en la Facultad de Derecho de la PUCP por más de 15 años, y que

* Las reflexiones aquí vertidas son parte de “Vivir la Abogacía. Guía docente en ética y responsabilidad profesional”, obra en la que he venido trabajando, que busca compartir las herramientas, metodología docente y plan semanal de clases que nos han resultado eficaces para capturar la imaginación de los jóvenes y lograr que se animen a profundizar en el tipo de abogado que desean ser con un contenido arraigado en la ética y responsabilidad profesional. Agradezco a Fernando del Mastro por sus siempre generosos y valiosos aportes, a José Luis Carrillo por cuidar la edición de estilo y a la Facultad de Derecho de la PUCP que me permitió durante más de 15 años ir puliendo lo aquí compartido.

** Socia EY, profesora principal en la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica del Perú, donde fue la coordinadora del área Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado desde el 2004 hasta el 2017. Es además Directora Académica del Programa de Gobernanza Corporativa para Directores de Empresas que organizan Pacifico Business School, el I.E. Business School y EY.

continúa dictándose. En segundo lugar, abordaré cómo concibo el proceso de enseñanza-aprendizaje que debe marcar el dictado del Curso en cuestión. Finalmente, me concentro en dos puntos importantes para el dictado del curso: los recursos para el aprendizaje y el sistema de evaluación.

I. El perfil de egreso del Curso de Ética y Responsabilidad Profesional en contexto

1.1. Contexto general: la profesión en cuestión

Solo uno de cada diez peruanos considera que somos iguales ante la ley (Informe Latinobarómetro, 2008, p. 99),¹ y una gran mayoría (más del 70%) parece tolerar la corrupción como algo “normal” a nosotros los peruanos.²

A su vez, la abogacía es una de las profesiones en las que menos confían nuestros compatriotas.³ Estos datos muestran un escenario desalentador para responder a las preguntas antes planteadas, al delinear un contexto donde se asume que las prácticas contrarias a la ética y, sobre todo, a la normativa legal, son normales e incluso necesarias para tener éxito en nuestro medio.

La educación legal no escapa a esta realidad. En mi interacción con los jóvenes durante estos últimos quince años, cuando abordamos los dilemas que no los dejaron dormir, un tercio de los jóvenes estudiantes de Derecho ha tenido como principal preocupación alguna experiencia con actos de corrupción. Al vivir en un contexto donde estas prácticas son normales y recibir una formación enfocada en conocimientos y destrezas, los estudiantes de Derecho incorporan como naturales, en la práctica, conductas contrarias a la ética y responsabilidad profesional. Ello, más aún, cuando la imagen de éxito profesional está asociada precisamente al éxito económico de abogados muy “eficaces” por contar con conocimientos y destrezas y no necesariamente estar vinculados con un ejercicio ético de la profesión.

A nivel universitario, la formación en ética y responsabilidad profesional parece muchas veces haber quedado relegada –aunque hay excepciones notables– a una asignatura electiva. Y, claramente, nuestro sistema de licenciamiento y acreditación universitarios no exigen para ninguno de estos dos trámites la formación en ética y responsabilidad profesional como aspecto vinculado a la malla curricular.⁴

Pretendemos que los estudiantes aprendan los contenidos éticos sin permitirles explorar una herramienta básica para el ejercicio profesional: el Código de Ética del Abogado.⁵ En efecto, tal como lo demuestran Acosta y Tapia en una reciente investigación a una población relevante de 360 estudiantes de últimos ciclos de 12 facultades de Derecho a nivel nacional, solo casi un tercio de los encuestados (31%) manifestó que había leído, por lo menos parcialmente, el Código de Ética. (¡Haberlo leído, empero, no significa que lo hayan hecho suyo!) (Acosta y Tapia, 2016, p. 148).

Como país, no obstante haber experimentado 25 años continuos de crecimiento económico, seguimos teniendo bajos estándares de institucionalidad, lo que claramente impacta en nuestra gobernabilidad. Pese a que continuamos intentando mejorar nuestro nivel de gobernabilidad, nos encontramos muy por debajo de los índices mundiales de Estado de derecho (rule of law), control de la corrupción y efectividad gubernamental (World Bank Institute, s.f.). Tenemos pues ante nosotros el reto de que la mejora económica tenga también un correlato robusto en materia de gobernabilidad y respeto del Estado constitucional de derecho.

En este desafío, la formación en Derecho cumple un papel fundamental. Los problemas de la institucionalidad y del Estado constitucional de derecho guardan una relación directa con el ejercicio de la profesión legal. Las facultades de Derecho, en efecto, somos fuente de profesionales para todas las dependencias estatales y entidades privadas, además de cumplir un papel central en la creación y aplicación de las normas. La administración de justicia depende casi exclusivamente de abogados, sean estos litigantes, fiscales o jueces.

1 Entendemos que esta información no fue actualizada en los dos informes posteriores, que son de 2013 y 2016.

2 Según la Décima Encuesta Nacional sobre percepciones de Corrupción, realizada en 2017 por Proética, el 65% de la población peruana tiene una tolerancia media hacia la corrupción y 7% una tolerancia alta. Es decir, un 72% acepta convivir con este flagelo (Proética, 2017).

3 Encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado y publicada por el diario El Comercio, sección política, en noviembre de 2008.

4 Lo exigen para la investigación, mas no para la formación.

5 Aprobado por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, abril de 2012.

Una encuesta realizada a los principales abogados del país, en un evento del Vance Center en Lima,⁶ mostró que según el 74% de los opinantes, menos de 40% de los abogados actúan conforme a estándares éticos. Así, ante la pregunta “de cada 10 abogados, ¿cuántos considera que actúan conforme a estándares éticos?”, el 11% respondió que solo 1; el 25%, que 2; el 23%, que 3; y el 15%, que 4. Asimismo, opinaron que, pese a que la actuación responsable de los abogados es muy importante, en general, estos le dan poca o muy poca importancia en su práctica diaria.

Esta percepción encuentra, por lo demás, correlato en cobertura periodística diversa que ha tenido como principales protagonistas a abogados, entre ellos Vladimiro Montesinos, Alberto Químper, Rodolfo Orellana, Benedicto Jimenez, Horacio Cánepa, así como otros escándalos mediáticos en los que abogados están involucrados en hechos ilegales.

Frente a esta realidad, los mecanismos para promover un ejercicio ético de la abogacía suelen ser inexistentes o ineficientes. En el Perú no se han difundido los seguros por mala praxis y tampoco existen programas de educación continua, requeridos para los abogados en otros países (conocidos como CLE o Continued Legal Education, en inglés). Los sistemas de autocontrol de la profesión muchas veces están concebidos como mecanismos sancionatorios y no como vehículos para promover buenas prácticas en el ejercicio de la abogacía. Además, en múltiples ocasiones se enfocan en el cobro de las cuotas de membresía al gremio, en vez de constituirse en espacios para impulsar una mejora en el ejercicio de la profesión.

1.2. La realidad de la enseñanza del Derecho en nuestro medio

La realidad descrita encuentra uno de sus orígenes en las facultades de Derecho. En efecto, en un análisis de perfiles, planes de estudio y sílabos (Acosta y Tapia, 2016, pp. 172-181; Del Mastro, 2011), autores como Tapia y Acosta, y Del Mastro, determinaron que, en general, los perfiles no contaban con un conjunto de competencias referidas a los valores y a la responsabilidad profesional. A su vez, en cuanto a las medidas adoptadas por las facultades de Derecho para promover la formación en valores, Acosta y Tapia identificaron que dicha formación es asignada a un curso denominado, por lo general, “Deontología Jurídica” o “Ética”, de bajo creditaje, ofrecido al final de la carrera, en el que se aborda básicamente el procedimiento disciplinario, sin profundizar en la comprensión de las instituciones de la responsabilidad profesional contenidas en el Código de Ética de los Abogados (Acosta y Tapia, 2016, pp. 172-175). Es más: no conozco otros cursos en la carrera de Derecho en los que se desarrolle el marco conceptual y la estructura de análisis propia de la responsabilidad profesional del abogado.⁷ A esto se suma, muchas veces, la ausencia de transversalidad de los contenidos de responsabilidad profesional en la malla curricular, así como otras metodologías y actividades extracurriculares enfocadas en el ser del estudiante de Derecho como futuro abogado.

Debemos tener presente, al mismo tiempo, que las facultades de Derecho no funcionan en una realidad paralela. Por el contrario, están insertas en una sociedad con características como las mencionadas en el acápite previo. Siendo así, el autoritarismo, la falta de justicia y honestidad, la arbitrariedad, la impunidad, los frecuentes conflictos de intereses, entre otras características culturales propias de nuestra sociedad, no son necesariamente ajenos a la experiencia dentro de un aula de Derecho. Existe entonces una especie de “currículo oculto” que enseña a los estudiantes el verdadero valor de las normas, así como las formas en que actúa, en los hechos y a lo largo de la carrera universitaria, una figura de autoridad como la del profesor.

Como consecuencia de estos factores, y aunado al poco respeto general por las normas y a la exigencia utilitarista del mercado, con frecuencia el contexto impide que las facultades de Derecho logren que sus estudiantes reflexionen sobre su conducta y valores. Más aún: pueden reforzar pautas inconscientes (culturales y personales), lo que genera conductas reñidas con la responsabilidad profesional. Este contexto se hace aún más complejo cuando el estudiante debe ingresar en un centro de prácticas preprofesionales en los que la competencia, la relación con los jefes y con las entidades del Estado pueden influir de modo trascendente en su conducta, creando o reforzando diversas respuestas frente a la presión y a la imagen general de los abogados.

⁶ Encuesta realizada con ocasión del I Seminario Internacional de Ética y Responsabilidad Profesional, organizado por el Vance Center del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la Pontificia Universidad Católica del Perú y CAD Ciudadanos al Día, en noviembre de 2009.

⁷ En esta guía uso el término arquitectura de análisis para referirme precisamente a ese marco conceptual y estructura para analizar la conducta del abogado a la luz de las instituciones de la ética y responsabilidad profesional del abogado.

Las facultades de Derecho, por lo general, no suelen acompañar a los alumnos en su proceso de realizar prácticas preprofesionales e inserción posterior en el mercado laboral, pese a que se exige a los jóvenes el cumplimiento de uno o dos años de este tipo de prácticas como requisito para graduarse. En la mayoría de facultades de nuestro país no se han implementado programas que acompañen al alumno brindándole un espacio de reflexión respecto a la experiencia y los dilemas que enfrenta en su contacto con la realidad del ejercicio de la profesión legal.⁸ Esta ausencia aumenta la vulnerabilidad del alumno y reduce su capacidad para imaginarse y sentirse como un elemento de transformación de su entorno.

1.3. El rol de las facultades de Derecho en la formación en valores⁹

El estudiante de Derecho es un joven que se encuentra en un momento importante de su vida, en el que está definiendo su vocación en una profesión diversa, compleja y en la que, como hemos visto, la ética no suele estar asociada como elemento necesario para el éxito. Este contexto no resta importancia a la etapa de socialización en la familia, que es sin duda central, pero sí permite comprender esta etapa como un momento de reflexión personal, de autoconocimiento y de definición vocacional y profesional. Se trata, además, de un momento en el que los jóvenes estudiantes buscan reconocimiento de sus pares, los profesores y los jefes en los centros de prácticas, lo que hace posible que esa búsqueda termine por marcar el camino que deciden tomar en la carrera. Las facultades de Derecho, en las que los estudiantes viven al menos cuatro años, son entonces el espacio donde estos procesos se despliegan, y ellas se convierten en lugares de la más alta importancia para la formación de una vocación no desligada de la misión de la profesión que se estudia. La idea de la formación que proponemos se sustenta en comprender al alumno como un ser humano, sujeto a condicionamientos, a una determinada cultura y a presiones que tiene que conocer y, sobre esa base, actuar libre y responsablemente, conforme a las normas éticas de conducta propias de la profesión que ejercerá. Así entendida, la formación en valores es una de las principales responsabilidades de una facultad de Derecho, que no solo tiene a su cargo la capacitación en una técnica sino, primordialmente, la enseñanza de una profesión.

Para lograr estos objetivos, existe una diversidad de medidas que se han de seguir, que se enmarcan en la teoría de la socialización en la formación en valores, la cual parte de entender que el aprendizaje no puede darse solo en un curso, sino que debe ser integral. En efecto, de acuerdo con esta teoría, los valores y las reglas éticas que se derivan de ellos deben ser parte del espíritu de la organización y de sus miembros. Por ello, tres medidas merecen particular atención: un curso obligatorio, la transversalidad y el currículo oculto.

- i) Un curso obligatorio específico, dictado en cuarto semestre de Facultad, destinado a abordar la “Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado”, que permita que el estudiante comprenda hacia el inicio de su formación en Derecho en qué consisten las buenas prácticas en el ejercicio de la abogacía. Este ensayo aborda los contenidos y enfoque pedagógico de este curso.
- ii) La transversalidad supone que todos los profesores incorporen a la temática de sus cursos por lo menos una reflexión en torno a temas de responsabilidad profesional y los dilemas éticos que se presentan en el ejercicio profesional en cada área del Derecho, con el fin de consolidar los conocimientos y la aplicación de estos por los alumnos y, sobre todo, reforzar la importancia de la ética y la responsabilidad profesional en el ejercicio de un abogado en el Perú.
- iii) El currículo oculto busca que la facultad, como organización, sea un ejemplo de actuación conforme a valores. Se trata de que, independientemente de los contenidos explícitos en el Plan de Estudios y los sílabos, las autoridades, los profesores, el personal administrativo y los alumnos actúen conforme a los valores que se busca inculcar.

La transversalidad y el currículo oculto contribuyen sin duda de modo central a que los valores y las normas de conducta sean parte del espíritu de la organización y, en esa medida, también de cada uno de sus participantes, incluyendo por supuesto a los jóvenes. Si no priorizamos y trabajamos adecuadamente la transversalidad y el currículo oculto, es altamente probable que, como centro de estudios superiores, no estemos cumpliendo con el mandato constitucional de aportar una formación integral en valores.

⁸ Esta realidad ha sido advertida dentro de la Facultad de Derecho de la PUCP, en la que el Plan de Estudios vigente desde 2015 contempla una actividad hacia el final de la carrera, aún por implementarse, en la que los estudiantes puedan reflexionar sobre dichos dilemas.

⁹ Las reflexiones presentadas en este acápite han sido tomadas textualmente en su mayoría de Boza y Del Mastro (2009, pp. 191-216).

Soy una convencida de que una facultad de Derecho debe formar profesionales y no meros técnicos en Derecho. Ello supone brindar especial importancia a la formación en valores. En ese sentido, se debe buscar que la formación del estudiante de Derecho trascienda el conocimiento (saber) y el aprender a hacer (saber hacer) para permitir que pueda desenvolverse como ser humano libre y responsable (saber ser). Este enfoque es aún más relevante en un contexto como el peruano, descrito líneas arriba, donde debemos preguntarnos: ¿la ley empodera a todos o limita a algunos frente a otros?, ¿el derecho en el Perú es un privilegio de algunos o una garantía para todo ciudadano?, ¿la abogacía sirve a la justicia o debe favorecer al cliente?, ¿la justicia se siente o se piensa?, ¿ejercer autoridad supone prerrogativa o servicio a los demás?, ¿cómo ejercer autoridad para lograr justicia?, ¿qué significa ser un abogado exitoso?, entre otras interrogantes propias de la interface justicia-ejercicio profesional-realidad.

Buscar respuestas a estas preguntas supone dar prioridad a la formación sobre la instrucción y otorgar a los valores un papel central a lo largo de la carrera, como eje transversal del currículo universitario. ¿Qué objetivos tiene, en términos generales, una formación enfocada en valores? Entre otros factores, con Del Mastro (2009) destacamos los siguientes tres:

- i) Claridad de pensamiento. El alumno debe conocerse a sí mismo, ser consciente de los dilemas que enfrenta, de las presiones e influencias que condicionan su conducta, así como de sus propias categorías mentales. La claridad de pensamiento respecto de sí mismo y de su entorno son elementos esenciales para que el alumno pueda libremente optar por una actuación ética e íntegra en el ejercicio profesional.
- ii) Visión de que es posible. El alumno debe, además, desarrollar el coraje necesario para enfrentar un entorno poco ético, reconocer que puede ser un agente de cambio y de que es posible alcanzar el éxito siendo ético y actuando conforme a estándares de responsabilidad profesional. Se trata, en efecto, de saber qué hacer, y hacerlo.
- iii) Sentir la ética. La ética se siente. Los valores en gran medida se cumplen por una sensación de lo que es lo bueno, lo correcto. Uno de los objetivos de la formación moral es que los alumnos se conecten con dichos sentimientos, de modo tal que esa sensación se complemente con el conocimiento de sí mismos y de su entorno.

Pero la mejor formación en valores quedaría trunca si no se dota al joven de la arquitectura de análisis propia para abordar y analizar las instituciones de la responsabilidad profesional del abogado. La ética y responsabilidad profesional del abogado, materia que nos ocupa, cuenta con un marco conceptual y una estructura propia orientada a analizar la conducta del abogado. Como he indicado, en mi experiencia estos contenidos suelen estar ausentes a lo largo de la carrera, con lo cual la formación de nuestros futuros abogados queda al margen del conocimiento y vocación por la misión profesional. Es responsabilidad de una facultad de Derecho enseñar esas instituciones y arquitectura de análisis, promoverlas, ponerlas de moda y, sobre todo, exigir las en su seno. Por ello, resulta necesario, como he indicado, contar con una asignatura obligatoria hacia el inicio de la carrera (proponemos que sea en cuarto ciclo de Facultad) denominado “Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado”, cuyo perfil de egreso pasamos a desarrollar.

1.4. ¿Cuál es el Perfil del egresado del curso y sus resultados de aprendizaje?

Con el objeto de permitir que otros docentes universitarios y facultades de Derecho puedan hacer suyo aquello que consideren apropiado a su realidad, compartimos a continuación el Perfil del Egresado del curso que hemos desarrollado sobre la base de microrresultados de aprendizaje.¹⁰ Al hacerlo busco presentar lo que hemos aprendido en esta travesía de manera tal que un tercero, no necesariamente familiarizado con el quehacer y lineamientos pedagógicos de la PUCP, pueda fácilmente aprehenderlo y adecuarlo a su realidad.

¹⁰ Gracias al valioso aporte de Gabriela Carrillo, entiendo que, en términos pedagógicos estrictos, lo que he denominado RDA micro podría confundirse con lo que vendrían a ser propiamente los contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales que contribuyen a alcanzar los “macro” RDA. Considero que no es el caso, pero acepto que hablar de micro RDA puede generar cierta confusión. Sin embargo, dada la relevancia de estos micro RDA en la formación del ADN del abogado y, sobre todo, tomando en cuenta que no se suelen abordar en otras asignaturas, por las razones que expongo en este capítulo, en mi experiencia resulta de vital importancia en nuestro medio tratarlos como micro RDA.

Partimos de la premisa de que el papel primordial del docente es motivar, facilitar y promover el aprendizaje de los estudiantes como parte de su proceso de formación universitaria. Especialmente en un curso como el nuestro, con un componente actitudinal tan fuerte, la clave está en buscar que los alumnos aprendan en libertad, antes que imponer una forma de pensar, de ser o de hacer las cosas. Estos contenidos actitudinales requieren tiempo para ser asimilados, razón por la cual su aprendizaje se va construyendo a lo largo del semestre, buscando –como hemos indicado respecto de la importancia de la transversalidad– que sean reforzados a lo largo de la carrera. Sobre el particular, en el Anexo A presento algunos testimonios de estudiantes sobre lo que aprendieron en el curso, tanto a nivel de la responsabilidad profesional como personal que pueden brindar luces y –ojalá– animar a otros docentes a adoptar el enfoque que hemos venido liderando.

En línea con lo anterior, resulta conveniente advertir que los contenidos del curso Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado son de tres tipos, resultando los terceros los más complejos de lograr:

- (i) en primer lugar, los que abordan el conocimiento del marco normativo, de las instituciones y de los estándares de la responsabilidad profesional del abogado plasmadas en el Código de Ética del Abogado;
- (ii) en segundo lugar, aquellos que desarrollan la destreza de aplicar la arquitectura de análisis propia de la materia, así como la habilidad de administrar y resolver dilemas éticos en el ejercicio profesional; y,
- (iii) en tercer lugar, a nivel actitudinal, que es lo central y más difícil de lograr, los que buscan generar empatía en los jóvenes para involucrarlos anímicamente en un ejercicio responsable de la misión del abogado, especialmente en un país como el nuestro.

Los tres contenidos mencionados entretienen saberes complejos y contenidos actitudinales propios del Perfil del Egresado del curso, compuesto por seis resultados de aprendizaje (RDA), siendo los tres primeros exclusivos del curso y los otros tres a los que el curso contribuye sustancialmente.

Perfil del Egresado del curso

La culminación satisfactoria del curso le asegura al estudiante las siguientes capacidades:

En el ámbito de los conocimientos (contenidos conceptuales)

1. Conoce las instituciones y los estándares de responsabilidad profesional del abogado consagrados en el Código de Ética del Abogado.
2. Comprende las diferentes regulaciones que abordan la responsabilidad profesional del abogado.

En el ámbito de las destrezas (contenidos procedimentales)

1. Aplica la arquitectura de análisis para resolver situaciones referidas a la responsabilidad profesional del abogado.
2. Identifica y analiza dilemas éticos que se presentan en el ejercicio profesional y cuenta con las herramientas necesarias para resolverlos.

En el ámbito de los valores (contenidos actitudinales)

1. Valora la importancia del cumplimiento de la misión del abogado para la consolidación del Estado constitucional de derecho en el Perú.
2. Cuenta con la motivación necesaria para desarrollar introspección respecto de sí mismo y su papel como estudiante y futuro profesional del Derecho.

Los resultados de aprendizaje están “anclados” en el desarrollo del proceso de aprendizaje que es particular a cada alumno y reflejan, como enseña Duncan Kennedy, “lo que se espera que los estudiantes puedan hacer al término de un periodo de aprendizaje” (2007, p. 16).

Como hemos indicado, estos seis logros de aprendizaje constituyen el ADN del ejercicio profesional del abogado en tanto están presentes cualquiera sea la modalidad de la actividad profesional del abogado (asesoría legal interna a una organización, pública o privada, asesoría externa, labor académica, de investigación o de otra índole), e independientemente del área del Derecho en la que se desenvuelva el abogado.

No solo eso: los contenidos de los primeros tres logros de aprendizaje del Perfil del egresado del curso –referidos a las instituciones, arquitectura de análisis y marco legal de la responsabilidad profesional del abogado– son exclusivos del curso Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, en tanto no se elaboran ni desarrollan en otras asignaturas. El resto de materias y actividades de la malla curricular de una facultad de Derecho harían bien –y deben, en nuestra experiencia– en contribuir a consolidar, profundizar y actualizar, en cada área del Derecho, los contenidos del curso que nos ocupa. Lograr que los estudiantes hagan suyo el ADN del ejercicio responsable del abogado es el cimiento básico que este curso dota a la carrera. De ahí, en mi opinión, la trascendencia del Perfil del egresado del curso para una Facultad de Derecho en la actualidad.

Con el fin de permitir un trabajo más acotado y detallado, y para que se puedan ir construyendo progresivamente saberes más complejos y contenidos actitudinales propios del curso, los seis logros de aprendizaje del Perfil del egresado del curso, en mi experiencia, pueden ser subdivididos en microrresultados de aprendizaje (RDA),¹¹ que con mayor detalle y concreción esbozan los aprendizajes concretos que el estudiante debe ir haciendo suyos en cada periodo semanal de aprendizaje, y que en tanto tales son observables y verificables.¹² Suelo trabajar 58 micro RDA, los mismos que se detallan en el Anexo B.¹³

Los seis resultados de aprendizaje del Perfil del egresado del curso se desglosan de la siguiente manera, siendo el conocimiento de las instituciones de la responsabilidad del abogado el que concentra la mayor cantidad de micro RDA:

RDA del Perfil del egresado del curso	N.º de micro RDA*
1. Conoce las instituciones y los estándares de responsabilidad profesional del abogado consagrados en el Código de Ética del Abogado.	25
2. Aplica la arquitectura de análisis para resolver situaciones referidas a la responsabilidad profesional del abogado.	7
3. Comprende las diferentes regulaciones que abordan la responsabilidad profesional del abogado.	4
4. Identifica y analiza dilemas éticos que se presentan en el ejercicio profesional y cuenta con las herramientas necesarias para resolverlos.	10
5. Valora la importancia del cumplimiento de la misión del abogado para la consolidación del Estado constitucional de derecho.	9
6. Cuenta con la motivación necesaria para desarrollar introspección respecto de sí mismo y su papel como estudiante y futuro profesional del Derecho.	4

* Nota: un micro RDA se duplica pues se aplica a más de un RDA del Perfil del egresado.

A su vez, los 58 micro RDA son de diferente naturaleza,¹⁴ y los conceptuales constituyen la mayoría. Dicho esto, debe destacarse el fuerte componente de micro RDA actitudinales, propios de este curso. Así, 39 micro RDA son de naturaleza conceptual y 9 procedimental, que el estudiante debe haber hecho suyos al culminar satisfactoriamente el curso. Y 10 son de naturaleza actitudinal, en tanto suponen un proceso de transformación de actitudes y, muchas veces, de creencias y hasta emociones, proceso este que toma tiempo y que se inicia durante el curso pero que requiere refuerzo a lo largo de la carrera.

11 Utilizo la terminología de resultados de aprendizaje (RDA) en dos niveles para referirme, por un lado, a los “macro” RDA del Perfil del Egresado del curso (que son 6) y, a un nivel más concreto y detallado, como los “micro” RDA de cada unidad semanal del curso (que son 58).

12 Si bien en cada unidad semanal se aborda un grupo de micro RDA, estos también se van reforzando de manera progresiva durante el semestre.

13 Manejamos obligatoriamente los 58 micro RDA, además de otros dos micro RDA adicionales, necesarios para la adecuada gestión del curso, referidos estos a temas administrativos, como son que los alumnos conozcan el Perfil del Egresado del curso y la metodología de evaluación. Dependiendo del sistema de evaluación que va a utilizarse (por ejemplo, si se privilegia un trabajo de investigación o si se busca incidir con mayor detalle sobre temas referidos a la naturaleza de la colegiación y papel del gremio), pueden desarrollarse micro RDA adicionales.

14 Por naturaleza de los resultados de aprendizaje nos referimos a los siguientes tres tipos:

La naturaleza conceptual de los aprendizajes está referida al saber del alumno, esto es, a la adquisición de información que el estudiante debe convertir en conocimiento como parte del proceso de aprendizaje en el curso.

La naturaleza procedimental de los aprendizajes está referida al saber hacer y al saber cómo hacer del estudiante, esto es, a la destreza en la aplicación de los conocimientos conceptuales aprendidos.

La naturaleza actitudinal de los aprendizajes está referida al ser del alumno, esto es, a los valores, creencias y actitudes que deben guiar al alumno cuando aplique el saber y el saber hacer adquiridos (ver PUCP – Facultad de Derecho, 2017, p. 18).

En función de su temática, a su turno, los 58 micro RDA se clasifican de la siguiente manera, resultando que el tema de las instituciones de la responsabilidad profesional del abogado es el que concentra mayor número de micro RDA:

- i) 8 están referidos a la misión, los valores y normativa propia de la responsabilidad profesional del abogado.
- ii) 39 abordan las instituciones de la responsabilidad profesional del abogado.
- iii) 12 se avocan al proceso de autoconocimiento e introspección del estudiante, incluyendo la gestión de dilemas y el ejercicio de su libertad.
- iv) Y, como hemos indicado, incluimos 2 adicionales referidos a temas administrativos del curso.

Asimismo, en función de su organización, los contenidos del curso están estructurados en 14 unidades semanales temáticas detalladas a continuación, en una secuencia determinada, que a lo largo del semestre va construyendo progresivamente los saberes más complejos y contenidos actitudinales propios del curso. Cada unidad desarrolla un tema que se desglosa y traduce en bloques más pequeños y acotados de microaprendizajes específicos. A ello nos hemos referido como “microrresultados de aprendizaje”. Estos microaprendizajes específicos pueden estar referidos a un conocimiento acotado, a una destreza específica que el estudiante debe hacer suya al culminar esa unidad, o a una actitud determinada que se espera que el estudiante pueda haber comenzado a tomar para sí durante esa unidad y que se irá consolidando en el semestre y reforzando a lo largo de la carrera. En ese sentido, hay micro RDA específicos de cada unidad, otros que se abordan con detalle en más de una unidad, y otros 12 que se construyen a lo largo del curso en tanto son transversales.

Unidades del curso	N.º de micro RDA
I. Desafíos para el ejercicio profesional del abogado. Presentación del curso.	4
II. Esferas del accionar humano y la ética como práctica de la libertad.	5
III. La ética del abogado y la amistad. Opcional, derechos del practicante.	4
IV. A quién se debe el abogado y la relación con el cliente.	5
V. El secreto profesional y el valor de comunicar la verdad.	4
VI. Publicidad y referencias. Competencia desleal. Alianzas estratégicas con otras profesiones.	4
VII. El conflicto de intereses y la independencia de criterio	5
VIII. La libertad de patrocinio y el encargo injusto	5
IX. Patrocinio debido y relación con la autoridad	2
X. Aspectos económicos de la relación abogado cliente y conclusión el patrocinio.	5
XI. Diligencia, información y competencia del abogado. ¿Por qué tener un código de ética?	5
XII. Verdad y apariencia debida.	1
XIII. Regulación de la profesión y procedimiento disciplinario.	3
XIV. Responsabilidad social y ambiental. Misión de la abogacía. Revisión final del curso	1
Micro RDA transversales	12

El Anexo C brinda una visión en conjunto de las unidades semanales, los temas y micro RDA (resumidos, por cierto). En el cuadro he distinguido aquellos resultados transversales referidos a la misión del abogado, por un lado, y a la libertad del estudiante para resolver dilemas éticos, por el otro.

Finalmente, un enfoque basado en el microaprendizaje del alumno como un resultado que debe ser conseguido cada semana tiene, en mi experiencia, cuatro grandes ventajas:

- a. **Empodera al alumno**, al permitirle evaluarse a sí mismo a lo largo del curso, en la medida en que puede identificar cómo va logrando efectivamente los microrresultados específicos esperados en cada unidad semanal.
- b. **Centra de manera continua** la atención del profesor en concretar los aprendizajes específicos requeridos por los alumnos, aportándole un criterio que permite dejar de lado material interesante pero no prioritario para ese fin.

- c. **Permite organizar** el material del curso de manera modular, pudiendo el docente modificar en gran parte la secuencia de dictado de los contenidos del curso.
- d. **Garantiza la libertad de cátedra** cumpliendo con los contenidos mínimos necesarios que todo estudiante debe adquirir sobre la materia.



En mi experiencia, trabajar con microrresultados de aprendizaje permite, además, ubicar al alumno como protagonista y piloto de la travesía de su aprendizaje en el curso. En esta guía compartimos tres momentos clave que se le ofrecen al alumno como oportunidades para evaluar y monitorear el cumplimiento de los micro RDA, empoderándolo para que sea quien dirija su proceso de aprendizaje. Estos tres momentos son:

- a. **El primer día de clases** se le presenta el Perfil del Egresado del curso y se llama su atención sobre los micro RDA listados para cada semana en el Plan de Clases. Esta viene a ser la lista de “entregables” específicos que el curso le ofrece, presentada a manera de “pago en armadas”.¹⁵
- b. **En cada clase** se enuncian microrresultados de aprendizaje por lograr y se resumen al concluir la unidad. Se anuncian además los micro RDA específicos de la clase siguiente.
- c. **Antes de la siguiente unidad**, se ofrece una autoevaluación anónima y voluntaria, a través de la cual el alumno puede medir la efectividad en su grado de aprendizaje. A su vez, a la luz de los resultados de dicha encuesta, el profesor puede, en la clase siguiente, complementar los temas específicos que, en opinión de los alumnos, les quedaban menos claros.

De esta manera, buscamos empoderar al estudiante y permitir que sea quien esté en condiciones de controlar y dirigir su aprendizaje. Aun así, no siempre hemos logrado que todos los alumnos lo hagan.

En estos últimos quince años de enseñanza he ido reformulando y mejorando continuamente los contenidos y metodología de dictado del curso con el fin de maximizar las condiciones para que los 58 microrresultados de aprendizaje puedan ser alcanzados. Si bien estoy segura de que los seguiremos perfeccionando y otros docentes contribuirán con lo suyo haciendo de este material uno más completo y útil, puedo sostener, con mucha satisfacción y con base en mi experiencia, que esta guía cumple su cometido.

¹⁵ Por naturaleza de los resultados de aprendizaje nos referimos a los siguientes tres tipos:

La naturaleza conceptual de los aprendizajes está referida al saber del alumno, esto es, a la adquisición de información que el estudiante debe convertir en conocimiento como parte del proceso de aprendizaje en el curso.

La naturaleza procedimental de los aprendizajes está referida al saber hacer y al saber cómo hacer del estudiante, esto es, a la destreza en la aplicación de los conocimientos conceptuales aprendidos.

La naturaleza actitudinal de los aprendizajes está referida al ser del alumno, esto es, a los valores, creencias y actitudes que deben guiar al alumno cuando aplique el saber y el saber hacer adquiridos (ver PUCP – Facultad de Derecho, 2017, p. 18).

II. ¿Cómo concibo el proceso de enseñanza-aprendizaje en Ética y Responsabilidad Profesional del abogado?

Concibo la formación en Derecho como una que, además de enfocarse en la generación de conocimientos y destrezas en los jóvenes, antes y, sobre todo, logra involucrarlos como protagonistas en un proceso de formación en valores y principios, tanto éticos como profesionales, que les permitan actuar con responsabilidad ante un contexto determinado. Desde esta perspectiva, la formación en valores complementa y potencia los conocimientos y las destrezas típicas del abogado al poner al ser humano –a la persona del alumno– como centro y destinatario del proceso de formación. Habiendo probado a lo largo de estos últimos quince años diferentes enfoques para aproximarme a la formación universitaria en esta materia, comparto aquí el método que, en mi experiencia de todos estos años a cargo y como coordinadora del curso en la Facultad de Derecho de la PUCP, ha dado buenos resultados al permitir cautivar el interés de los jóvenes estudiantes.

En este capítulo abordaré primero el desafío docente; luego, la necesidad de involucrar personalmente al alumno como clave para el aprendizaje para pasar seguidamente a compartir qué recursos me han resultado eficaces para promover el aprendizaje. Concluyo abordando el sistema de evaluación.

2.1. El desafío docente

En mi experiencia, formar en valores supone un triple desafío para el docente. Implica, como es natural, dominar la materia objeto de estudio y contar con las herramientas pedagógicas para poder facilitar el aprendizaje de los conocimientos y destrezas propias del curso por parte de los estudiantes. Forjar en los jóvenes este binomio conocimientos y destrezas es de por sí demandante en las distintas áreas del Derecho, y el curso de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado no es una excepción.

En un país como el nuestro, el verdadero desafío radica, sin embargo, en un tercer aspecto, aquel referido a motivar a los jóvenes a profundizar respecto de una forma de ser, desde la cual, en libertad, puedan concebir su ejercicio profesional como uno responsable que les permita su desarrollo y bienestar. Ello involucra la esencia misma del estudiante en tanto persona y ser humano único e irrepetible que vive en sociedad, en una sociedad como la nuestra, tan ajena, muchas veces, a la integridad e institucionalidad. Por eso, buscamos que los estudiantes tengan empatía con la esencia de su profesión, de modo que se sientan parte de algo que va más allá de ellos mismos, que los vincula a la justicia y a los fines mismos del Derecho, que trasciende lo estrictamente individual y, a la vez, es fuente de plenitud y bienestar. Poder llegar al joven estudiante para motivarlo a involucrarse en ese proceso de introspección y reflexión sobre sí mismo y su profesión, además de comprometerse con un ejercicio responsable del Derecho, ha sido para mí –y lo es aún– una prioridad y el gran desafío de nuestras universidades en la actualidad.

Este desafío atañe directamente a quienes nos desempeñamos como docentes, pues nos exige altas dosis de empatía, apertura y didáctica pertinente para vincularnos con los jóvenes, hoy millenials y pronto siguientes generaciones que tienen códigos, preferencias y maneras de concebir el mundo, muchas veces, muy diferentes a las nuestras. Y muy distintas también entre ellos mismos, pues se aproximan a la carrera con vocaciones diferentes, por razones diversas y desde realidades disímiles.

Como si lo anterior no fuera poco, se requiere, además, convicción sincera de que, en el Perú de hoy, es posible salir adelante a través del ejercicio responsable de nuestra profesión. El entorno descrito en el capítulo precedente, las frecuentes noticias de corrupción que presentan a un abogado como su protagonista, el tímido compromiso de nuestras organizaciones por mejorar el ejercicio de nuestra profesión y la debilidad de nuestro marco institucional, no solo ponen permanentemente en jaque esa convicción, sino que pueden hacernos sentir que hablamos de preceptos propios de otras realidades, no aplicables al Perú –como, de hecho, me han comentado varias veces–. Y allí se anida, para mí, el mayor desafío para el docente: practicar absoluta coherencia entre lo que predicamos y hacemos en todo nivel, pues en mi experiencia los jóvenes aprenden más de cómo nos vinculamos con ellos que de lo que les decimos o les encargamos leer. No podemos soslayar la importancia del currículo oculto en la formación que impartimos. Nuestros aciertos y nuestros errores en clase, así como nuestra capacidad de entrega, convicción, profesionalismo y humanidad, son insumos fundamentales en su formación. Y no solo en el aula, sino también fuera de ella y más allá del campus, ya que la manera como ejercemos la profesión también da un poderoso mensaje a los jóvenes. Se educa con el ejemplo más que con sermones. En

mi caso, soy consciente de que hago esfuerzos por practicar los valores que buscamos inscribir en los jóvenes y de que, con frecuencia, disto de representar, como anhelaría, esos valores en mi quehacer cotidiano, con lo cual para mí el desafío es uno complejo, demandante y permanente.

2.2. Involucrar al estudiante como clave para el aprendizaje

Como profesora universitaria deseo que nuestros egresados sean reconocidos por ser profesionales competentes orientados al bien común. Aspiro a formar profesionales responsables, íntegros, comprometidos con hacer lo correcto, especialmente en una profesión como la nuestra, y que sean felices de lograrlo. Hacer lo correcto supone tener discernimiento y lucidez para decidir por el bien, además de coraje y voluntad para querer el bien. Pero si la materia no despierta en los estudiantes curiosidad ni interés, y si se acercan al curso con resistencias significativas propias de una obligación, es poco lo que podemos lograr. De ahí la importancia, en nuestro medio, como he indicado, de tratar de involucrar al estudiante en los postulados y, sobre todo, en la construcción de los significados que el curso busca aportarles. En lo personal, no siempre me ha resultado sencillo llegar a despertar en los jóvenes interés por profundizar en nuestra materia. Como docentes, debemos ser conscientes de esa realidad que representa un desafío permanente.

En mi experiencia, con un marco institucional tan débil como el nuestro, la presión que, percibo, experimentan los jóvenes, les impide muchas veces –curiosamente– pensar en ellos mismos. Así, la tentación de “seguir la corriente” y tomar la salida “normal” o “eficaz” es muy alta. La cultura del éxito material –que, observo, prima en nuestro medio– fuerza a los estudiantes a inclinarse por alternativas “fáciles” que refuerzan el statu quo, de modo que, sin que ellos se den cuenta, hipoteca su libertad. En ese sentido, el principal desafío que tenemos los docentes es lograr que los jóvenes, en libertad, se conecten con los significados del curso y consigo mismos. Ello se relaciona con nuestro rol docente de autoridad en el curso y, sobre todo, con la manera en que logramos gestar un papel protagónico de los alumnos como corresponsables de su aprendizaje. Esta no es una tarea sencilla de cumplir y requiere brindarles atención continua, como lo demuestra mi experiencia.

Toda vez que el curso aborda estándares de conducta personal de quien se prepara para fungir como abogado, considero que la participación activa del alumno facilita el aprendizaje. En esa línea, comparto una manera –entre muchas otras posibles– de abordar esta temática enfocada en motivar a los alumnos a reflexionar sobre sí mismos y su profesión, además de comprender, valorar y conectarse anímicamente con los estándares de ética y responsabilidad profesional del abogado. En suma, de lo que se trata es de la creación de significados sobre su profesión a partir de su propia vivencia durante el curso.

Como diría mi colega Fernando Del Mastro, la clave radica en compartir con los estudiantes “qué anima nuestra profesión”, buscando así trascender los conceptos abstractos para concebir y sentir las fuerzas que inspiran, animan y motivan nuestra conducta profesional y la vida misma. De ahí que el foco del curso esté puesto en interpelar a los jóvenes estudiantes respecto de quiénes son y cómo van a encauzar sus vidas a través del ejercicio del Derecho para ser felices. Con tal fin, a lo largo de estos años hemos ido incorporando y perfeccionando ciertas herramientas y enfoques que paso a compartir, pues siento que me han permitido conducir un proceso orientado a incidir sobre la vocación de los jóvenes por hacer el bien desde su propia realidad.

Tal como se ilustra a continuación, he observado que los jóvenes inician el semestre académico con altas dosis de indiferencia o ignorancia, e incluso hasta resistencias, al contenido del curso. Poco a poco, en un proceso que no es lineal y mucho menos homogéneo, van generándose dudas y atisbos de interés, que les permiten, luego, comenzar a conectarse consigo mismos. En ese sentido, la parte inicial del curso, que equivale a un 20% del total, la dedicamos a permitir esa conexión personal del joven sin la cual, en mi experiencia, no es posible lograr esos aprendizajes sustantivos. Después buscamos que vaya descubriendo en sí mismo el querer el bien, para pasar a equiparlo con herramientas que, en el ejercicio profesional, le permitan decidir por el bien, de manera que sea consciente de poder hacer el bien. Todo esto es parte de un proceso interno propio de cada alumno y requiere ser reforzado a lo largo de la carrera. Por lo que he vivido en esta última década y media, tengo claro que, si no se abordan los primeros eslabones de este proceso, resulta muy difícil avanzar en esta secuencia.

Situación del alumno durante el proceso formativo en ética y responsabilidad profesional



A continuación, abordaré el análisis situacional, algunas herramientas que me han ayudado a involucrar a los jóvenes y la manera en que he ido, a lo largo de estos quince años, avanzando en el proceso formativo descrito.

2.3. Foco en la libertad del estudiante

Buscar involucrar a los jóvenes con el material del curso ha sido para mí –y es– un proceso desafiante que implica trascender las resistencias, prejuicios y, en muchos casos, indiferencia de los jóvenes, para ir generándoles curiosidad e incluso dudas que les permitan conectarse consigo mismos. Se trata de un proceso complejo, que por definición toma tiempo; no es lineal ni automático y, menos aún, igual para todos; es propio de cada estudiante. La clave, en mi experiencia, es anidarlos en la libertad de los estudiantes y gestarlo precisamente apelando a ella.

Lo anterior requiere del docente la capacidad de contener el proceso de aprendizaje y gestionar las resistencias –y hasta frustración– que estos contenidos pueden suscitar, tanto en los jóvenes como en el propio profesor. Constatar la desidia e incluso desinterés con que los estudiantes muchas veces llegan al curso o abordan las lecturas y tareas me ha generado frustración. Reconozco que no me resulta fácil aceptar cómo, cada vez más, los jóvenes no tienen tiempo ni interés para preparar la clase y cómo suelen dejar todo para última hora pese a que cuentan, desde el primer día, con el plan detallado de trabajo semanal.

He observado que hay dos factores que deben ser tomados en cuenta: uno personal y otro de contenidos pedagógicos. En lo personal, constituye un reto para mí contener la frustración del aprendizaje, tanto de los alumnos como la mía propia. Y, paradójicamente, es precisamente de esa frustración desde la cual he podido gestar aprendizajes profundamente transformadores, tanto para mí como para los jóvenes, utilizando la experiencia compartida. En el acápite II.9 desarrollo con mayor detalle el concepto de aprendizaje desde la experiencia.

En el ámbito pedagógico, me ha resultado vital para el aprendizaje abordar en las primeras unidades del curso un concepto de libertad que involucre –desde diferentes ángulos– al propio alumno en tanto persona. A lo largo de los años hemos ido trabajando la forma de generar en los estudiantes ese interés, contribuir a hacerlos dudar, así como a ir desmitificando en qué consiste la ética y responsabilidad profesional del abogado, con el fin de que nos den el beneficio de la duda. En ese sentido, destinamos las tres primeras unidades del curso a dotarlos de un marco que, a manera de framing, les genere curiosidad, los interpele, los involucre y aterrice los contenidos de la materia en su realidad emocional.¹⁶ En los siguientes acápites desarrollo esto con mayor detalle.

2.4. Acercar la temática a la realidad emocional de los jóvenes

Considero que es clave para el aprendizaje acercar los contenidos del curso a la realidad emocional de los jóvenes. ¿A qué me refiero? Una cosa es, por ejemplo, aportarles conocimientos referidos al secreto profesional, incluyendo la destreza de identificar, en la práctica, cuándo nace la obligación de guardar reserva y cuáles son las excepciones y condiciones para la revelación; y otra, muy diferente, es lograr que, en los hechos, los estudiantes valoren, aquilaten emocionalmente y hagan suya, en la era de las redes sociales y la posverdad y en un medio como el nuestro, que privilegia el “contarlo todo”, la impor-

¹⁶ En facultades de Derecho en las que los alumnos hayan cubierto este material en cursos previos, el profesor podría resumir considerablemente estas tres unidades semanales para poder profundizar en las instituciones de la responsabilidad profesional. Como he indicado, esa no ha sido mi experiencia.

tancia de guardar el secreto profesional. Algo similar ocurre con los conflictos de interés, el patrocinio debido o las demás instituciones de la responsabilidad profesional del abogado. Más que el “qué” y el “cómo”, observo que nuestros jóvenes están ávidos por comprender el “por qué”, esto es, el propósito, para que, una vez entendido, lo puedan hacer suyo, sentir y darle forma a partir de sus propias vivencias y así puedan llegar a animar esos contenidos, dotándolos de significados relevantes y, por tanto, “queribles” para ellos mismos.

He observado que todos los conocimientos y destrezas que se les puedan impartir devienen “huecos” y carentes de sentido si el joven no se vincula emocionalmente con esos contenidos. He visto que los jóvenes tienen una suerte de callosidad cuando se trata de evaluar sus conductas, sentir o pensar sobre lo que hacen y desean de verdad para sí mismos en libertad. A una gran mayoría le cuesta hacerlo y ni siquiera pueden imaginarse cómo lo que hacen o dicen los impacta como personas. He ahí el gran desafío pedagógico de este curso. Mi travesía como docente me ha llevado a una permanente evolución, y uno de los aspectos en los que siento que he tenido más avances y retrocesos, aprendizajes y desaciertos, es precisamente este. Aquí comparto lo que, percibo, ha funcionado.

A lo largo de estos años hemos ido incluyendo, al inicio de la sesión de clase y en diferentes unidades del curso, espacios para la reflexión personal referida a la realidad cotidiana de los jóvenes. Así, presentamos al principio de cada unidad una breve referencia a cómo acercar y permitir que los estudiantes, desde su realidad, puedan percibir, sentir y hacer suyos los contenidos de la unidad. Sugerimos cerrar la clase regresando a esto, poniendo el foco en la realidad emocional de los jóvenes. Esto es altamente recomendable. Y si el espacio de reflexión inicial requiere prolongarse, considero que es la mejor inversión de tiempo que podemos hacer para facilitar el aprendizaje.

2.5. Las tres preguntas básicas del curso

Con frecuencia, al inicio del semestre, pese a lo descrito en el sílabo, los estudiantes imaginan que los contenidos del curso están referidos a preceptos morales sobre el bien y el mal que buscaríamos inculcarles. Es como si esperasen una suerte de sermones sobre “el portarse bien” y sobre la formación de su conciencia o algo por el estilo, que mayoritariamente anticipan con resignación y, muchas veces, con desidia, pues son aspectos que no están “de moda” y “no pagan” en el mercado.

Así, he observado ciertas resistencias y hasta prejuicios instalados de manera espontánea e inconsciente en la mente de los jóvenes referidos al rol de la ética, la moral e, incluso, su propia libertad. No solo en Lima. Es como si “tuviesen” que tomar el curso porque es una obligación “con la que hay que cumplir”, un requisito formal para graduarse, carente de contenidos significativos para ellos, que toca salir de “eso” lo más rápido posible para poder dedicarse a lo que realmente hace el oficio del buen abogado. Siento que en un entorno social que privilegia el éxito económico, en un medio donde impera la impunidad, la ley del más fuerte y hasta la cultura del “sálvese quien pueda”, el papel de la ética en la vida de los jóvenes queda relegado a un plano de cuasi inutilidad. Al inicio del ciclo académico, hablar de ética o responsabilidad profesional viene a representar, en mi experiencia, un lenguaje foráneo que no solo no se comprende ex ante sino cuyo tono, ritmo y cadencia no conecta espontáneamente con nuestra juventud.

Con la intención de concitar su atención y poder trascender ese paradigma mental preinstalado en los alumnos en nuestro medio, me ha resultado muy eficaz plantear el contenido del curso como uno referido a ellos mismos. Suelo resaltar este enfoque indicándoles, desde el primer día, que el aprendizaje que el curso busca facilitar en ellos no será objeto de una calificación o evaluación por parte del docente, sino que serán ellos mismos quienes decidirán si les es útil o no, y en qué medida. Esta aproximación, lo he percibido, suele desconcertarlos, y a partir de ahí se despierta cierta curiosidad y se comienzan a abrir en ellos mismos rutas de exploración que les van permitiendo otorgarnos el beneficio de la duda en tanto facilitadores de su aprendizaje.

Por eso, suelo plantearles –como se desarrolla con mayor detalle en la primera unidad del curso– que el verdadero valor de la asignatura radica en permitir que ellos mismos respondan a tres preguntas clave: ¿quién eres?, ¿en qué crees? y ¿qué vas a hacer de tu vida a través del Derecho para ser feliz? Esto sirve de ancla y marco a la impartición del curso durante todo el ciclo académico. Retomaremos esta reflexión en la última unidad del curso.

2.6. Trabajo con el dilema personal¹⁷

Una herramienta muy poderosa para vincular a los jóvenes con su individualidad es el trabajo con dilemas. A lo largo de todos estos años, he sido testigo de cómo este enfoque permite a los estudiantes profundizar en cuán importante es para ellos reflexionar sobre su conducta en general y, más específicamente, sobre lo que les sucede a ellos mismos. El trabajo con dilemas me ha permitido lograr que los estudiantes puedan conectarse con su intimidad y ello, a su vez, abre un espacio psicológico personal a través del cual, a lo largo del curso, irán elaborando experiencias y reflexiones personales que les permitan crear –y, en su caso, transformar– significados a partir de esa experiencia.

Así, con el fin de animarlos a profundizar en su autoconocimiento, desarrollo en la segunda unidad del curso el ADN del dilema personal. Lo importante de este ejercicio es lograr que los alumnos se conecten con un pequeño espacio psicológico personal. Para ello, se promueve que, antes de la clase, el estudiante evoque un momento emocionalmente intenso y desafiante para él/ella que recuerde, y describa qué sintió en ese momento. Luego, y ya en el aula, se trabajarán las implicancias del dilema humano desde esa experiencia. He observado que esta es una poderosa manera de plantear a los estudiantes que la ética y la responsabilidad profesional del abogado están íntimamente ligadas a su ser como personas. Recomendando con entusiasmo y convicción este enfoque, al que dedicamos la segunda unidad del curso.

2.7. Enfoque no prescriptivo

Por las resistencias y prejuicios que he percibido a lo largo de estos años, instalados previamente en nuestros estudiantes, y porque el mayor desafío que tenemos como docentes en un curso como este radica en involucrar a los jóvenes personalmente en su proceso de aprendizaje, he observado que la manera en que enfocamos el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental. Ello incluye, entre otros aspectos, cómo nos conducimos en el salón; cuán puntuales, preparados, predecibles y justos somos; si cumplimos el plan de clases, entre otros aspectos, pero, sobre todo, desde dónde nos dirigimos a ellos. Me explico.

Tengo claro que, si como docentes no promovemos, en los hechos, el ejercicio de la libertad de los jóvenes y si no los motivamos a hacer suya esa libertad, es muy difícil transformar o, en su caso, reducir los prejuicios y resistencias a los contenidos del curso. Lo anterior significa para mí, más allá de fungir como profesora, tener claro cómo concibo mi papel. No me refiero al “qué” de lo que hacemos como docentes, esto es, a la función docente, tarea pedagógica o términos de referencia del profesor, sino al “cómo” desplegamos esa función, es decir, a cómo abordamos nuestra tarea docente. En este sentido, parto de la premisa de que más allá de lo que pueda yo saber y todo lo que me falta aún por aprender, la función que me toca cumplir es facilitar y promover el aprendizaje de los jóvenes, especialmente en un curso como el nuestro. Ello implica comprender que somos motivadores de un proceso interno en los estudiantes y que es a ellos a quienes les toca querer hacerlo suyo, en libertad. Son ellos a quienes debemos persuadir y a quienes nos debemos como profesores. Ser capaces de llegar a ellos es crucial, y para lograrlo es vital la forma en que nos vinculamos con los estudiantes, es decir, el modo en que asumimos nuestra función y tarea de facilitación.

Confieso que inicialmente no me resultó sencillo mantener el foco del aprendizaje en la persona del joven estudiante. Con frecuencia sentí la tentación de impartir conocimientos, recurrir a la doctrina o adelantarme a exponer conceptos desde la teoría, antes que partir de lo planteado por los estudiantes. De ahí que comparta aquí cuán importante es para la enseñanza-aprendizaje poner el foco en el estudiante.

Ahora bien, nada de lo anterior es posible si el docente no se prepara bien para cada sesión de clase en función de una adecuada planificación de todo el curso. Cometer pequeñas fallas referidas a la logística, no tener presente lo planteado por algún alumno la clase anterior o confiar en nuestra frágil memoria y no poder articular bien un aspecto de las lecturas obligatorias, he observado, no contribuye a revertir las resistencias de los jóvenes, y va minando –incluso de manera inadvertida y hasta inconsciente– la confianza de los alumnos en los contenidos del curso.

¹⁷ Debo a mi querida maestra, Erika Stern, de Group Relations Netherlands, el insight y motivación para desarrollar esta poderosa herramienta de enseñanza-aprendizaje.

Formar en libertad exige colocarnos en una posición de facilitadores y, sobre todo, motivadores del aprendizaje. En mi caso, tener una actitud abierta, de escucha y observación activa, contribuye a este cometido. Esta actitud de apertura pasa por estar genuinamente convencidos de que los estudiantes son valiosos y tienen una experiencia y vivencia previas (saberes previos) que pueden aportar a la construcción misma del curso y al desarrollo de sus contenidos. Reconozco que las exigencias del sílabo, especialmente para cubrir las distintas instituciones de la responsabilidad profesional plasmadas en el Código de Ética del Abogado, a veces frustran un poco la posibilidad de conceder en clase un papel más protagónico a los alumnos. Lograr el balance adecuado entre co-creación y cumplimiento del cronograma semanal es un desafío permanente.

Formar en libertad, asimismo, requiere –como he anotado– poder contener la frustración del proceso de aprendizaje y hasta la desidia de los jóvenes sin, por ello, dejar de ser firmes y ejercer con justicia la autoridad propia del profesor.

Lo anterior se concreta, por ejemplo, desde el primer momento, en tratarlos como adultos que están en capacidad de decidir qué les conviene y qué no. En ese sentido, habiendo consensuado con ellos al inicio del semestre las reglas de convivencia y sistema de evaluación que usaremos en el curso, no suelo tomar controles de lectura ni asistencia diaria a clase. Con detalles como estos buscamos predicar en los hechos el ejercicio de la libertad, de su libertad. Reconozco que esto genera, con frecuencia, mucha frustración, pues los estudiantes, acostumbrados a la exigencia externa y focalizados en tener una buena nota, suelen privilegiar el cumplir con otros cursos “más exigentes” antes que con el nuestro. Tomo esto como el costo colateral de este enfoque de aprendizaje en libertad.

Algunos elementos adicionales que detallamos en esta guía ponen el foco en la libertad del estudiante y en su función como protagonista de su proceso de aprendizaje. Tal es el caso, por ejemplo, de las preguntas que dejamos cada semana para la reflexión personal, así como el abordaje de temas como la amistad o casos vinculados a ellos mismos (como uno de los primeros casos del curso, en el que “la pareja de tu mejor amigo le está sacando la vuelta; ¿se lo dices?”). Así también, les aportamos una herramienta semanal de autoevaluación para que identifiquen cómo creen ellos que van logrando los microrresultados de aprendizaje esperados (para mayor detalle, ver el acápite III.4, Autoevaluación del aprendizaje).

En igual sentido, por ejemplo, el hecho de enfatizar que son los propios estudiantes quienes tendrán que decidir cómo responder las tres preguntas básicas del curso –no el docente, ni sus padres, parejas o amigos, sino ellos mismos– los suele sorprender y permite reducir algunas de sus resistencias inconscientes a entregarse al aprendizaje. Asimismo, ir sembrando preguntas a lo largo del semestre y durante cada clase me ha resultado un medio eficaz en el proceso de captar, poco a poco, la atención de los alumnos. He desarrollado una serie de preguntas que en estos quince años hemos percibido como más eficaces para ese fin.

En suma, para motivar a los estudiantes a embarcarse en ese complejo y fascinante proceso de introspección personal, no podemos –me lo dice mi experiencia– tener un enfoque prescriptivo o de dueños de la verdad, sino todo lo contrario: uno convocante, motivador, que linde con la seducción, pero abierto y que acepte a priori la frustración que nos pueda ocasionar ver y sentir que no hacen lo que consideramos correcto o queremos. No abogo por el relativismo moral, sino por una actitud de apertura que permita a los jóvenes ser los protagonistas de los descubrimientos en su camino. Así, si bien formar en ética y responsabilidad profesional del abogado implica trascender la teoría y conocimientos del impacto que estos tienen en el quehacer diario del estudiante, como personas y como futuros abogados en tanto seres humanos únicos e irrepetibles, es un camino no exento de desafíos. (Para mí, es a la vez fascinante.)

2.8. Involucramiento personal del docente

Otro de los aspectos que –he observado– facilita de manera significativa el aprendizaje de los contenidos del curso por parte de los jóvenes es la participación planificada, activa y personal del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto significa compartir en el aula experiencias personales y profesionales, aciertos y errores, desde la humildad y complejidad humanas, donde con frecuencia nada es blanco o negro ni hay héroes ni villanos. A través de sus miradas y silencios he observado que

compartir mi reflexión personal cala hondo. Y tiene el beneficio adicional de proyectar al docente como ser humano y no solo como autoridad competente en la materia.

2.9. Aprendizaje por la experiencia

A través del curso, como he mencionado, buscamos que el estudiante comprenda el papel que juegan los valores para abordar situaciones profesionales y que forje en libertad su identidad profesional. Es una tarea desafiante y compleja, pues involucra no solo al alumno sino también al propio profesor en tanto persona. Supone ingresar en un espacio lleno de emociones (algunas fuertes) de los alumnos, que requieren de la docente capacidad de contención y coraje para sostener la propuesta de aprendizaje.

Estos años he observado tres espacios en que se inyecta una energía especial para el aprendizaje por la experiencia, siendo uno de ellos el que denomino espontáneo y no planificado, esto es, el aprendizaje que se gesta de manera imprevista y no programada, a la luz de ciertos acontecimientos compartidos durante el semestre en los que los estudiantes son los protagonistas. Mayoritariamente, en mi caso, eso ha ocurrido cuando percibo que ninguno ha leído las lecturas o preparado los casos, lo que me dificulta significativamente adoptar el método activo de enseñanza. Ante esta realidad, que me genera frustración, suelo hacer un alto para evidenciar uno por uno si ha cumplido con su parte para hacer de la clase un espacio productivo. Siempre hay una alumna que ha hecho la tarea frente a la gran mayoría que destaca por su apatía. Ante esta evidencia, busco con toda mi autoridad y convicción involucrarlos emocionalmente en la solución. Con tal fin, paso a interpelarlos, preguntándoles con firmeza qué debo hacer como profesora. El silencio en el aula es absoluto en ese momento. Les cuesta hablar. Paso a anotar en la pizarra lo que van diciendo. Típicamente –y tímidamente– mencionan una de tres medidas: darles un nuevo plazo, tomar controles de lectura intempestivos para “exigirles”, y una minoría habla de restarles parte de la nota. La idea de la autoridad todopoderosa que sanciona, o benevolente que da una amnistía o una prórroga, suele aflorar con nitidez y sirve de insumo para la reflexión posterior, interpelándolos a través de sus silencios.

Ante esa evidencia construida con y desde los propios alumnos, paso a reflexionar sobre cómo conciben ellos el papel de la autoridad y/o sobre el marco legal (en este caso, las reglas de convivencia y evaluación consensuadas al inicio del ciclo). Dado que el intercambio ha tomado a estas alturas un buen rato, los motivo a pensar qué estoy haciendo yo con ellos en ese momento, por qué destino tiempo valioso a la reflexión y, finalmente, si estoy actuando como autoridad. Esta última pregunta suele sorprenderlos, y solo entonces siento que se abre para ellos la posibilidad de imaginar un papel diferente para la autoridad, uno en que, además de firmeza y rectitud, contribuya a empoderar y crear significados compartidos. El tiempo destinado en el aula no programado inicialmente, aunque interfiere con el previsto, contribuye a un aprendizaje desde la experiencia compartida y es muy poderoso pues permite dotar de un significado diferente la función de la autoridad. He observado que los jóvenes no sienten que ellos también ejercen autoridad, toda vez que ellos son la autoridad de su propio aprendizaje.

Dependiendo de la gravedad del acontecimiento, también he optado por evacuar el salón con voz de mando, indicándoles que salgan inmediatamente y permitiendo que regresen solo a aquellos que, cuando yo los convoque, decidan comprometerse con el aprendizaje colectivo. Se paran desconcertados. Siempre hay alguno que no quiere salir; por eso, los instruyo a evacuar el salón. Luego de unos minutos, invito a regresar “a aquellos que hayan decidido comprometerse”. Ya de regreso en el salón, les pido escribir en su cuaderno su compromiso. Les doy un ratito para ello. Luego les solicito que cada uno lo declare ante los demás, uno por uno. Sobre esa base construimos la reflexión sobre el papel de cada uno en el aprendizaje de los demás. Es sintomático que una abrumadora mayoría declare su compromiso personal con su aprendizaje, mientras que solo unos pocos lo hacen también respecto del profesor y muchos menos respecto de los demás, lo que me permite reflexionar en clase sobre ello: cómo no ven cuál es su papel y aporte al aprendizaje de los demás. Esta es una medida extrema, que en todos estos quince años debo haber usado solo en pocas ocasiones y que requiere de convicción y fortaleza para contener la situación.

Estos espacios espontáneos de aprendizaje por la experiencia también se han dado cuando los alumnos colectivamente han buscado extender los plazos de entrega de trabajos o, de alguna otra manera, modificar las reglas de evaluación establecidas de común acuerdo al inicio del semestre. También se han

referido a situaciones en las que como docente he sido la protagonista, especialmente ante un error o equivocación.

Dada la naturaleza imprevista y no programada de estos espacios espontáneos de aprendizaje por la experiencia, estos suelen tomar una buena parte de la clase, en algunos casos hasta más de una hora, con lo cual afectan el desarrollo del contenido que tenía planificado. No obstante, recomiendo entusiastamente aprovechar los acontecimientos compartidos con los alumnos para impulsar este tipo de aprendizaje por la experiencia basado en la reflexión compartida y sobre el impacto y responsabilidad de cada uno en esa circunstancia.

III. Recursos para el aprendizaje

Al egresar del curso los estudiantes deben contar con los conocimientos y la arquitectura conceptual necesaria para analizar temas referidos a la ética y responsabilidad profesional del abogado, así como comprender el porqué de cada institución de la materia y los valores que subyacen; además de estar equipados para resolver dilemas en el ejercicio de la profesión en un contexto determinado. A continuación, comparto algunos recursos e insights de lo que percibo nos ha dado buenos resultados para lograr estos postulados.

3.1. Estudios de casos

El estudio de casos facilita interiorizar aprendizajes, pues su desarrollo permite la participación activa de los estudiantes. Aun si se trata de casos acotados, la riqueza de los hechos en un caso de estudio permite que los estudiantes se pongan en los zapatos del abogado en cuestión y que, desde allí, analicen las alternativas de acción posibles y comprendan el porqué de la regulación en materia de ética y responsabilidad profesional del abogado. Por ello basamos el curso en breves casos de estudio que hemos ido identificando y creando a lo largo de todos estos años. Para elaborar los casos tomo como base principal las noticias, pues en nuestro medio varios abogados son protagonistas de las noticias. Entendemos que, dependiendo de la realidad de cada facultad, pueda resultar necesario utilizar casos referidos a determinadas problemáticas y/o áreas del Derecho.

Inicialmente, solía incluir un abordaje conceptual al inicio de cada unidad, pues sentía que me permitía verificar cuántos alumnos habían preparado las lecturas a la par de ir profundizado en la materia. Hace ya varios años, sin embargo, que veo que tiene más impacto dejar el abordaje teórico para el final de la unidad. Así, suelo comenzar con los hechos concretos de los casos para, sobre esa base, ir construyendo el concepto y significado de cada institución del curso (v.gr., secreto profesional, conflictos de interés, patrocinio debido, honorarios, entre otros).

Los casos obligan a evaluar la conducta del abogado. Con frecuencia, al inicio los estudiantes suelen enfocarse en aquello a lo que están acostumbrados, esto es, en los temas sustantivos y/o procesales del caso. Por eso, una manera eficaz de poner el foco en el quehacer del letrado es asignar a los alumnos los papeles del abogado, del acusador y del defensor. Se busca que logren construir los alegatos acusando la conducta del abogado desde el punto de vista de responsabilidad profesional, a la par de defender al abogado desde esa misma perspectiva.

A lo largo de estos quince años he ido variando la manera de trabajar los casos en clase. Algunas veces trabajé los hechos y la acusación con toda la clase; otras, organicé todo el salón en grupos pequeños de alumnos para que, antes de analizar los casos entre todos, discutan entre ellos, profundamente, uno o todos los casos; y en otras ocasiones, asigné como tarea papeles de acusador, defensor y tribunal, y les pedí que entreguen por escrito su posición y pasen a exponerla ante el salón, a manera de juego de roles. Todas estas modalidades funcionan y tienen sus pros y sus contras, ya sea en materia de tiempo o de involucramiento de los alumnos. Cada docente deberá identificar qué le funciona mejor.

Independientemente del método de abordaje del caso por ser usado, algo que he notado en las distintas facultades del país en las que he tenido el gusto de impartir el curso es que los alumnos suelen tener dificultad para acusar, pues recurren a detalladas exposiciones, hacen un resumen cronológico de los

hechos, para solo luego presentar algunos aspectos de la acusación. Tratándose de los primeros ciclos de la carrera y no estando los alumnos acostumbrados a acusar al abogado en función de los hechos, suelo dejar que narren los acontecimientos y voy invitándolos a que se esfuercen por tomar el papel que les toca (acusar o defender).¹⁸

El trabajo en clase gira en torno a fomentar la discusión y el debate entre los alumnos, por lo que resulta importante tomar siempre en cuenta las intervenciones que sostengan puntos de vistas contrapuestos, con el fin de profundizar en el análisis. Usar preguntas, contribuir a cuestionarlos, hacerlos dudar, forzarlos a discrepar y, solo al terminar el caso o incluso la unidad, preocuparse por clarificar los conceptos es, en mi experiencia, una buena ruta pedagógica.

Una vez expuesto el caso y realizado el debate, el profesor puede ayudar a que los alumnos, a la luz de las lecturas, profundicen en la materia. La metodología de casos supone ir hilvanando los contenidos en función de los comentarios y respuestas de los alumnos, de manera que al concluir la unidad esos contenidos hayan sido contruidos con los alumnos.

3.2. Arquitectura de análisis

Existe un marco conceptual específico y una estructura propia para analizar supuestos de ética y responsabilidad profesional del abogado que todo estudiante de Derecho debe aprender. Nos referimos a ello como la “arquitectura de análisis” de las instituciones de la responsabilidad profesional del abogado. Este contenido no se aborda en ningún otro curso de la carrera: de ahí su importancia.

El pilar de la arquitectura de análisis es la relación abogado-cliente, pues por lo general el ejercicio de la abogacía supone trabajar para un cliente (sea este una persona o una organización). Sugerimos graficar la relación abogado-cliente a lo largo del curso siempre de la misma manera. Ello contribuye a que los estudiantes tengan una estructura gráfica fácil de recordar. Puede haber diferentes formas de graficar esa relación; en esta guía indico la manera que me ha dado buenos resultados, pues permite ir aumentando instituciones de la responsabilidad profesional del abogado durante el curso, sin modificar la columna vertebral que de manera gráfica van captando los alumnos.

Para graficar este pilar de la arquitectura de análisis solemos poner en la parte superior de una columna al abogado y en la parte inferior al cliente. Y al centro se van indicando los deberes o derechos que están en juego en cada caso. Hacia la izquierda, también en una columna, se grafica la esfera personal del abogado, y en una columna hacia la derecha, la esfera pública en la que se ventila la justicia. El uso recurrente y homologado de graficar esa relación en la pizarra no solo ayuda a visualizar la arquitectura de análisis, sino que se convierte en una manera de reforzar aprendizajes, toda vez que aporta a los alumnos cierto orden y una estructura mental de análisis.

3.3. Uso de la pizarra

La representación gráfica de conceptos ayuda a organizar el material y a sintetizar las ideas. En ese sentido, la pizarra me ha servido como una poderosa herramienta conducente al aprendizaje, pues me ha permitido ir construyendo, a lo largo de la clase, la estructura de análisis de las instituciones de la responsabilidad profesional del abogado e ir graficándola. Además, puede resultar útil listar las ideas propuestas por los estudiantes en la pizarra o incluir, cuando sea pertinente, la línea de tiempo del caso. Recomiendo usar la pizarra activamente y de manera instrumental al quehacer docente. Con frecuencia he visto a los estudiantes tomar fotos de la pizarra.

¹⁸ Invitarlos a observar la audiencia pública de “Abogados al Banquillo” suele ser también aleccionador para ellos.

3.4. Autoevaluación del aprendizaje

Conscientes de que el rol que nosotros, profesores universitarios, tenemos es motivar y facilitar el aprendizaje de los alumnos, buscamos –como ya he indicado– que ellos sean los protagonistas de dicho proceso. Para ello, incluimos al final de cada unidad una herramienta de autoevaluación que les permita identificar cómo van logrando los microrresultados de aprendizaje específicos esperados en esa unidad. En ese sentido, tal como expliqué en el capítulo anterior, referido al enfoque metodológico, el material de clase está organizado en función de estos microrresultados de aprendizaje, específicos al contenido desarrollado exclusivamente en esa semana.

La autoevaluación está organizada en forma de una encuesta anónima y voluntaria. Está compuesta por una serie de preguntas sencillas sobre los microrresultados de aprendizaje que la unidad busca lograr. Incluye la pregunta seguida de una escala de cinco niveles; por ejemplo: ¿identificas las diversas motivaciones que tienen las personas para cumplir las normas? A) Sí, y puedo explicárselo a otro. B) Sí, pero no puedo explicárselo a otro. C) Más o menos. D) Muy poco. E) No sé de qué se trata.

Suelo pedir a los estudiantes que la llenen para ser los pilotos de su formación y permitirme a la vez tener un registro para poder identificar qué conceptos requiero reforzar al inicio de la siguiente clase. Existen en Internet varios sistemas gratuitos que se pueden utilizar con este fin. En la PUCP lo hacemos a través de la plataforma digital de aprendizaje. Suelen, sin embargo, ser un grupo reducido de alumnos quienes contestan la encuesta.

3.5. Noticias y actualidad

La coyuntura siempre es una poderosa herramienta de aprendizaje. Su actualidad y novedad suelen cautivar a la juventud. En nuestro medio, en el día a día, es frecuente ver noticias referidas a abogados o a la profesión. A lo largo de estos años he recurrido a las noticias como insumos para muchos de los casos de estudio que hoy usamos en el curso. Claramente, las noticias locales despiertan más interés en los estudiantes que las foráneas, salvo que se trate de casos notorios. Una de las virtudes de trabajar con las noticias es que conectan al alumno con la realidad, con su realidad. En ese sentido, suelo llevar cada semana las noticias que he identificado y comentarlas. A la par, incentivo a los estudiantes a que durante el ciclo identifiquen una noticia vinculada a los contenidos del curso y la analicen brevemente en clase.

Este recurso me ha dado buenos resultados: no solo muestra la vigencia y actualidad de los contenidos del curso, sino que además desarrolla competencias en el estudiante que identifica información pertinente y en los demás que analizan la noticia en clase. Para involucrar al resto del grupo, se puede requerir que el interesado circule previamente entre sus compañeros la noticia y su análisis de ella, y luego la exponga en clase brevemente. Recomiendo promover este recurso por ser conducente al aprendizaje.¹⁹

3.6. Diario profesional

Acompañar el proceso de introspección, la reflexión personal del alumno y la construcción de significados es una parte esencial del curso Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, que supone un reto diferente a lo que propone un curso regular de cualquier otra materia. Esta mirada no solo se aprecia en el método de enseñanza y evaluación, sino también en espacios propuestos en el curso donde se guíe al alumno a terminar la carrera siendo un mejor abogado en más aspectos que el meramente técnico.

Aprendiendo de María Gual y Antoni Font, profesores de la Universidad de Barcelona que nos visitaron, adapté e incorporé en el curso un espacio, libre y opcional, en el que los alumnos puedan llevar lo que aprenden a un plano personal de introspección a través de un Diario Profesional. Lo que se busca con este diario reflexivo es promover que los estudiantes cuenten con un registro de reflexiones personales en las que puedan documentar para sí mismos las vivencias y experiencias que tengan durante la introspección y reflexión per-

¹⁹ En la sección IV.3, literal a, que sigue, menciono la noticia como un incentivo en la calificación final del curso.

sonal que promueve el curso. El animar a los jóvenes a documentar sus vivencias los ayuda a trascender del mero pensamiento a la introspección, pues una cosa es pensar y otra es describir y explicar lo que se piensa. Así, el Diario Profesional representa un espacio de encuentro para reflexionar sobre uno mismo.

Lo ideal sería poder acompañar activamente a los alumnos revisando lo escrito y reflexionando con ellos por lo menos a través de una reunión personal con cada uno una vez al mes durante el semestre. Recuerdo que en Barcelona lo hacían con una frecuencia intensa –por supuesto, con clases de grupos bastante reducidos–. Eso es posible si el número de alumnos es pequeño, pero con aulas de 40 estudiantes y las crecientes demandas que experimento sobre mi tiempo, no he podido hacerlo. Soy consciente de que ese acompañamiento puede potenciar el aprendizaje y, por eso, lo recomiendo.

3.7. Plan de Clases

Así como para nuestra profesión la seguridad jurídica es un valor, resulta conveniente que el desarrollo del curso ponga en valor la predictibilidad. Hacerlo es una manera concreta de demostrar, en los hechos, las virtudes de un marco legal predecible. Con tal fin, además del sílabo del curso y la preparación de la clase, hemos desarrollado el Plan de Clases como una herramienta de planificación que indica para cada semana del semestre académico cuáles son los microrresultados de aprendizaje de esa semana, las tareas, casos y lecturas, así como la normativa aplicable que será desarrollada. Su finalidad es permitir que el estudiante sepa a qué atenerse y pueda planificar, en libertad, el trabajo para el curso (aprender a aprender). Entregarles el Plan de Clases el primer día de clase contribuye a dar este mensaje.

En lo personal, elaborar el Plan de Clases antes del inicio del ciclo académico me ha servido para programar mejor los tiempos y, sobre todo, planificar cómo conducir el semestre. Te fuerza a tener una idea clara de qué hacer, cuándo y cómo a la luz del calendario académico y de los feriados no laborables. Recomiendo entusiastamente usar este recurso.

Referencias

Boza, B. & Del Mastro Puccio, F. (2009). Formación en valores: ¿responsabilidad de la Facultad de Derecho? Derecho PUCP, 62, 191-216. Recuperado de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3165>

Corporación Latinobarómetro (2008). Informe 2008. Santiago de Chile. Recuperado de: http://www.latinobarometro.org/docs/INFORME_LATINOBAROMETRO_2008.pdf

Del Mastro Puccio, F. (2011). Acreditación de Facultades de Derecho en el Perú (tesis para obtención del título de abogado). Pontificia Universidad Católica del Perú.

Proética. (2017). Encuesta nacional sobre percepciones de corrupción. Lima: Proética.

Tapia, A. & Acosta, O. (2016). La enseñanza de la ética en las facultades de derecho del Perú (tesis de licenciatura en Derecho). Pontificia Universidad Católica del Perú.

World Bank Institute, Country Data Report for Peru, 1996-2014.

<http://documentos.bancomundial.org/curated/es/984951467992821643/pdf/105546-WP-PUBLIC-Peru.pdf>

PUCP, Facultad de Derecho. (2017). Formación por competencias. Lima: PUCP.

Anexo A. Testimonio de los estudiantes

Escuchar a los estudiantes es una poderosa manera de aprender pues nos acerca a sus vivencias y necesidades. Al concluir el semestre, suelo pedirles a los jóvenes que así lo deseen que compartan conmigo qué les aportó el curso y qué aprendieron de ellos mismos. Guardando la debida confidencialidad sobre la autoría de los mismos, a continuación, una breve selección de algunos de esos testimonios que me llenan de esperanza, pues reflejan el rol transformador, necesario e indelegable de una facultad de Derecho para que los estudiantes puedan vivir la abogacía.

1. Lo que les aportó el curso

“He aprendido muchas cosas que otros cursos no me han brindado (...) Ahora sé cómo actuar en algunas circunstancias difíciles en la vida. Si alguien me dice para realizar cosas incorrectas debo seguirme por mis principios y no realizarlas. Si es alguien como un jefe me dice para hacerlo debo de ser asertiva con él e influenciarlo con todo el conocimiento y habilidad que pueda para que lo pueda realizar de la manera correcta.”

“El curso fue muy práctico, lo que hizo que pudiera entender las cosas de una forma más simple y clara, sobre todo mediante la discusión de casos planteados en el curso que nos hace ver la realidad de más cerca.”

“Creo que éste curso me ha ayudado a darme cuenta de que ser una persona ética no es incompatible con el ejercicio de la profesión de abogado. (...) Ya antes había tenido la oportunidad de tomar cursos de ética, pero éste curso me ha enseñado de una forma muy directa cómo se deben analizar los problemas que se plantean y que hay circunstancias en las cuales, pese a encontrarnos en un escenario de incertidumbre, es posible encontrar una salida que nos permita actuar éticamente, respetando a los demás y a nosotros mismos como profesionales.”

“El curso me sirvió para entender lo vital que es para el correcto funcionamiento de la justicia en este país que se aplique una normativa ética adecuada para los abogados. Además, que en nuestra carrera si bien las normas siempre serán un arma de doble filo, son precisamente un arma, una herramienta que con un correcto contenido de valores éticos puede contribuir al ejercicio de la justicia y al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.”

“Cuando vi que se dictaba el curso de ética, sinceramente me pareció absurdo, porque consideraba que la ética no podemos adquirirla en un semestre o unas cuantas clases considero que eso ya forma parte de cada individuo. Sin embargo, lo primero que se me aporta son conocimientos académicos, por ejemplo: relación cliente-abogado, secreto profesional, etc.; pero yendo más allá yo vi a este curso más que un curso en sí, unas clases de reflexión donde particularmente por momentos existía un conflicto interno entre lo que era y lo que debía ser.”

“En la primera clase, no sabía mucho sobre la dinámica del curso, es decir, en qué iba a consistir el curso, creía que nos iban a dar ciertos parámetros o normas sobre como deberíamos actuar en nuestra vida profesional, y si bien el curso tiene algo de eso, lo que pude aprender, es que la ética depende de cada uno de nosotros, que se basa en quienes somos, en las personas y profesionales que queremos ser, y que no puede desvincularse una cosa de otra, es decir, que no se puede decir que se es una buena persona fuera de lo profesional y hacer cosas opuestas respecto a lo profesional o viceversa, una perso-

na debe ser integra y ética en todos los aspectos de su vida, como un todo, y que eso sale desde dentro de nosotros.”

“Creo que el curso me ha ayudado a buscar una nueva motivación en lo que hago, porque si bien siento que la carrera que he escogido es la que quiero desarrollar en mi vida, pues hay momentos en los que pierdes perspectiva y dejas que las cosas pasen y vives tu vida en una suerte de piloto automático. Con el análisis que desarrollamos de la libertad de elección y con la búsqueda que realizamos para ser un poco más libres creo que pude encontrar nuevas perspectivas para encontrarle una motivación a lo que hago, aun cuando por momento no me sienta del todo cómodo o no me guste, hoy sé que en el panorama general lo que hago me gusta y me siento bien respecto a eso.”

“Escogí este horario porque era el que mejor se acomodaba a mí día a día. Pero, en el transcurso del año, me di cuenta que el curso en verdad era muy interesante, los temas tratados eran en verdad problemas que se plantean constantemente. La metodología que se utilizaba es muy buena, se nota que la profesora y todo su equipo en realidad preparan las clases y no están improvisando como pasa en algunos cursos. En verdad muchas personas piensan que este curso no es necesario, pero ahora después de todas las clases estoy más convencido que es de suma importancia, los temas abarcados son importantísimos.”

“El curso me aportó muchas cosas positivas, aprendí que la ética en el abogado es fundamental para que este se desenvuelva con valores y de manera correcta en todos los ámbitos de su vida laboral. Gracias a los casos que analizamos en clase pude darme cuenta que el abogado en cualquier momento puede caer en una situación de encrucijada en la que deberá decidir entre diferentes actos y es en ese momento en que la ética profesional debe estar presente para guiar al abogado a actuar de manera correcta y acorde a los principios de la moral y la ética del abogado.”

“El curso aportó mucho en mi formación universitaria, ya que conocer acerca de cómo un abogado debe comportarse, no solo cuando exista un cliente, sino en su vida como abogado que es, es algo que me gustó mucho, el saber que existen reglas y actitudes que un abogado debe tomar para no perjudicar la imagen de los demás colegas. Este curso ha sido muy enriquecedor para mí porque no es como todos los demás cursos donde todo va como lo dice la doctrina o jurisprudencia, sino que este curso nos enseña como uno mismo, como futuro abogado, decide ser, porque ya está en uno, ser un ejemplo a seguir o ser uno más del montón que velando por sus intereses actúa en perjuicio de otros.”

“He aprendido mucho en el curso, desde conocimiento teórico hasta a conocerme un poco más. Ha sido uno de los que me ha gustado más y creo que es porque indaga más allá de lo que dejamos ver las personas; las distintas posturas y los debates han sacado lo interno de cada uno, la forma de ver a la sociedad y ello me ha hecho saber cosas de mi misma que no sabía que tenía y además me permitió conocer a las personas de quienes algún día trabajaran conmigo. Asimismo, las experiencias de la profesora, Alexis y José Carlos me han servido de motivación, me ha gustado encontrar coincidencia de pensamientos, objetivos y revivir la esperanza de un cambio de la profesión para con la sociedad. En conclusión, me ha servido para recuperar viejos objetivos, fe en las nuevas generaciones y antiguos ideales que, aunque cambie el mundo, seguirán dentro de nosotros, al menos cuestionando cada avance que hagamos.”

“Me dio una visión diferente del abogado. Inicialmente pensé que el abogado era un autómatas que respondía a las órdenes de su cliente (lo cual me causaba mucha incertidumbre por la elección de mi carrera) pero descubrí que el abogado para entregarse plenamente a una causa debe saber elegir; ante alguna duda que no lo deje desarrollarse en algún caso debe negarse a ella.”

“Al matricularme al curso de ética pensé que éste era uno de esos cursos que uno lo podía llevar a la ligera, que no te debía de causar ninguna preocupación y pensé que se relacionaba a la filosofía asemejándose a la ética que se lleva en Estudios Generales Letras; el primer día de clases cuando plantearon la realidad del curso me di cuenta que había estado en un error de apreciación; a la medida que el curso avanzaba me fue dando una luz, había estado 3 ciclos en Derecho y había llevado puros cursos donde importaba el ser técnico, el manejo de normas, pero no importaba el porqué de cada actuación y si mi actuación era lo que realmente quería y debía ser, este curso me permitió hacerme una introspección y cuestionarme no solo si debía continuar estudiando en esta facultad sino el cómo, cómo debía hacerlo, y más aún intentar que todo lo que haga deje de ser por mera obligación e intentar que sea por una satisfacción personal, además que me cuestiono también que tipo de abogado quiero ser y cual definitivamente no seré.”

“Este curso, sinceramente, me mostró una arista nueva de la carrera, me llevó a cuestionarme sobre los valores en los que me manejo y en los que me puedo ver envuelta en el transcurso de la profesión. Incluso me cuestioné sobre mi decisión en la carrera de derecho, si es que tengo la personalidad necesaria para ello, porque no se trata sólo de saber leer y/o escribir, y poder aprender cosas memorísticamente, y que no es suficiente la intención de querer salir adelante o las ganas de querer hacer bien las cosas. Comprendí que es cuestión de vocación.”

“El curso ha sido el corolario de 5 años de universidad, desde que llevé introducción a la vida universitaria, en los cuales el mensaje ha sido el mismo. Se tú mismo, se feliz con lo que haces, la carrera que elijas no debe ser una carga, debe ser aquello que te lleve a la realización personal. Si bien el mensaje ha sido el mismo, en el curso ese mensaje se ha convertido en energía pura. Es decir, la Dra. Boza ha logrado transmitir en mí la necesidad de avanzar, de pensar, de ver el derecho, mi vida, mis dilemas, desde otra perspectiva, en el sentido de que somos seres humanos, y que, si hemos avanzado, por un lado, podemos parar, pensar las cosas e ir por otro y probar y encontrar al final nuestro camino.”

“El curso ha sido de los mejores que he llevado en la universidad, (...) me aportó muchísimas cosas importantes, que si las nombrara individualmente excedería de la página pedida para responder esta pregunta; pero considero, que todo lo que me aportó éste se podría resumir en una idea: el curso me hizo tener pasión por lo que estudio, lo cual lo vengo haciendo de una manera correcta; pero sin sentimiento alguno. Por esto, cada lunes significaba, para mí, encontrar una razón para estudiar Derecho, y una razón para esforzarme en ser mejor profesional y, sobretudo, una mejor persona.”

2. Lo que aprendieron de ellos mismos

“Este curso me ayudó a generar más confianza en mí misma”

“He aprendido que (...) si bien somos seres individuales somos guardianes de un valor supremo y ese es el estado constitucional de derecho. Nuestra misión es hacer que nuestra sociedad mejore desde la trinchera que nos toque, y que todo ello lo podemos lograr sin descuidar nuestra realización personal a través del derecho, ya que ambos se complementan.”

“He aprendido un punto súper importante: para qué me sirve el derecho y por qué quiero estudiarlo, no en el sentido “técnico” de la palabra ... sino el fondo ..., el por qué hacerlo y el por qué no hacerlo. Al terminar el curso, definitivamente voy a extrañar las clases en que todo era nuevo, temas que siempre habían estado rondando entre las noticias de los periódicos, pero que nunca los había aterrizado (...) También le he perdido el miedo, aun no del todo, a participar en clase y dar a conocer mi opinión, la dinámica del curso permitía que todos participemos y que diéramos a conocer nuestra posición más que lo que dice el artículo tal de la ley tal...”

“Me he dado cuenta que hay muchos temas que están relacionados a la abogacía que ni siquiera conocía, me he dado cuenta que estos son de suma importancia, porque hay situaciones que vamos a tener que afrontar una vez que empecemos a trabajar. Al mismo tiempo hay que claro que la ética no solo te sirve para el trabajo, sino para la vida en sociedad.”

“He aprendido que es importante no sólo pensar en uno mismo, sino también en los demás ya que el abogado en particular tiene una labor de servicio, de vocación en ayuda de los intereses de los demás.”

“Lo que he podido aprender de mí es a conocerme, a analizar lo que soy capaz de hacer en determinadas situaciones, a pensar en el futuro y en la persona que me gustaría ser y convertirme de acá a unos años. Aprendí que quiero ser una persona orgullosa de su profesión, exitosa, pero que ese éxito se base en realizaciones internas, es decir no basadas en el éxito económico o de prestigio, sino cuan satisfecha y feliz me sienta al hacer lo que haga, al ver los resultados y darme cuenta de que tanto tiempo de estudios, se ve reflejado al poder ayudar y servir a los demás, tratando de mejorar un poco el mundo y habiéndolo hecho comenzando por mí.”

“Aprendí que tengo muchas virtudes para ejercer el derecho; pero también, conocí ciertos defectos, que tengo que mejorarlos, como es el caso de trabajar con plazos, la síntesis expositiva y saber emplear distintos métodos de trabajo, dependiendo del contexto, tema, requisitos, etc. Por tanto, creo que aprendí a aprender de mí, tanto enfatizando lo positivo como corrigiendo lo negativo.”

“He aprendido, aunque pueda parecer un poco tonto, que puedo ser una persona ética sin necesidad de ser una “mártir del derecho”, porque como abogada tengo deberes, pero también derechos que ayudan a concretizar y salvaguardar mis intereses sin perjudicar los de los demás.”

“Que debo de prestar más atención en los detalles y tratar de analizar los problemas desde múltiples perspectivas y no cerrarme en una simple perspectiva o visión del problema. Además, siempre se debe preferir la conciliación antes de iniciar un conflicto.”

Anexo B. RDA del Perfil del Egresado del Curso y micro RDA

RDA del Perfil	Micro RDA. El estudiante:
1	<p>01. Comprende en qué consiste el ejercicio profesional del abogado, su misión, y regulación en el ámbito de la responsabilidad profesional del abogado. (*)</p> <p>02. Describe cuáles son los valores de la profesión y cuál es su vínculo con la misión del abogado.</p> <p>03. Conoce la importancia de identificar al cliente en una relación abogado cliente.</p> <p>04. Conoce qué implicancias profesionales se derivan de la relación abogado cliente.</p> <p>05. Comprende en que consiste el secreto profesional del abogado y su regulación.</p> <p>06. Comprende los valores que subyacen al secreto profesional.</p> <p>07. Comprende en que consiste el conflicto de intereses, sus diversas clasificaciones y su regulación.</p> <p>08. Comprende qué valores sustentan la regulación de conflictos de intereses y a quién se protege con dicha regulación.</p> <p>09. Comprende en qué consiste el patrocinio debido y su regulación.</p> <p>10. Comprende el concepto y regulación de la adquisición de pruebas.</p> <p>11. Comprende en que consiste la publicidad de los abogados y su regulación.</p> <p>12. Conoce las particularidades organizacionales del ejercicio profesional (nombre, forma de persona jurídica y alianzas)</p> <p>13. Comprende en qué consiste la libertad de patrocinio.</p> <p>14. Describe los pasos a seguir antes de aceptar un patrocinio.</p> <p>15. Conoce los aspectos a tomar en consideración al momento de renunciar a un patrocinio legal.</p> <p>16. Conoce el concepto, las modalidades y la regulación de los honorarios profesionales.</p> <p>17. Conoce el concepto y la regulación de los bienes objeto del patrocinio.</p> <p>18. Conoce los tipos de bienes del patrocinio y las obligaciones del abogado con relación a ellos.</p> <p>19. Conoce el concepto y la regulación de la renuncia al patrocinio.</p> <p>20. Comprende el concepto del deber de diligencia del abogado y su regulación.</p> <p>21. Comprende el concepto de competencia profesional del abogado y su regulación.</p> <p>22. Comprende el concepto y regulación del deber de información del abogado.</p> <p>23. Comprende en qué consiste el deber de veracidad en el ámbito profesional.</p> <p>24. Comprende en qué consiste la apariencia debida y su regulación.</p> <p>25. Comprende en qué consiste la responsabilidad social del abogado y cuál es su regulación.</p> <p>26. Distingue, en los hechos, la responsabilidad profesional de otros tipos de responsabilidades.</p>
2	<p>27. Identifica, en la práctica, quién es el cliente en una relación profesional.</p> <p>28. Identifica, en la práctica, en qué momento se constituye la relación abogado cliente.</p> <p>29. Identifica, en la práctica, en qué momento nace la obligación de guardar secreto profesional, cuál es su vigencia y excepciones.</p> <p>30. Identifica, en la práctica, las condiciones que debe respetar el abogado en caso de revelar el secreto profesional.</p> <p>31. Identifica, en la práctica, los conflictos de intereses en el ejercicio profesional.</p> <p>32. Identifica, en la práctica, las maneras de gestionar la captación de la clientela bajo un enfoque de responsabilidad profesional.</p>
3	<p>1. Comprende en qué consiste el ejercicio profesional del abogado, su misión, y regulación en el ámbito de la responsabilidad profesional del abogado. (*)</p> <p>33. Conoce cuáles son las normas aplicables a la ética y responsabilidad profesional del abogado y comprende su finalidad.</p> <p>34. Comprende la finalidad y principios del proceso disciplinario.</p> <p>35. Comprende los roles de las diversas instituciones que participan en la formación y regulación del ejercicio profesional del abogado.</p>

Anexo B. RDA del Perfil del Egresado del Curso y micro RDA

RDA del Perfil	Micro RDA. El estudiante:
<p>4</p> <p>Identifica y analiza dilemas éticos que se presentan en el ejercicio profesional y cuenta con las herramientas necesarias para resolverlos.</p>	<p>36. Comprende el concepto de criterio propio.</p> <p>37. Interioriza la importancia de la independencia de criterio del abogado.</p> <p>38. Comprende la importancia de reconocer las esferas del accionar humano para el ejercicio ético de la profesión.</p> <p>39. Describe qué es un dilema ético y cuáles son los pasos para resolverlo.</p> <p>40. Sabe identificar, en la práctica, dilemas éticos.</p> <p>41. Aplica los pasos para resolver dilemas en el ejercicio profesional.</p> <p>42. Interioriza la importancia de prevenir y, en su caso, resolver los dilemas como práctica de la libertad y parte del ejercicio ético de la profesión.</p> <p>43. Distingue entre juicios prácticos y valores o principios.</p> <p>44. Comprende cómo identificar y gestionar un encargo injusto.</p> <p>45. Describe qué posibles definiciones de amistad existen y sus implicancias para el ejercicio profesional.</p> <p>46. Advierte el impacto del ejercicio profesional en la vida social y política del país.</p>
<p>5</p> <p>Valora la importancia del cumplimiento de la misión del abogado para la consolidación del Estado Constitucional de Derecho.</p>	<p>47. Interioriza su responsabilidad en promover el cumplimiento de la misión del abogado.</p> <p>48. Valora la importancia de identificar y atender al cliente en una relación abogado-cliente.</p> <p>49. Valora la importancia de guardar el secreto profesional.</p> <p>50. Valora la importancia de evitar conflictos de interés.</p> <p>51. Valora la importancia del patrocinio debido para la consolidación del Estado Constitucional de Derecho.</p> <p>52. Valora la importancia de actuar con diligencia en el ejercicio profesional.</p> <p>53. Interioriza la importancia del deber de veracidad para el cumplimiento de la misión del abogado.</p> <p>54. Interioriza la responsabilidad social del abogado para disminuir la brecha de acceso a la justicia en el Perú.</p>
<p>6</p> <p>Cuenta con la motivación necesaria para desarrollar introspección respecto de sí mismo y su papel como estudiante y futuro profesional del derecho.</p>	<p>55. Comprende en qué consiste el ejercicio de su libertad.</p> <p>56. Comprende el concepto de responsabilidad moral y por omisión.</p> <p>57. Reconoce qué concepto de amistad maneja y cuál escoge para su vida.</p> <p>58. Advierte cómo su accionar profesional puede incidir en su bienestar como persona.</p>

(*) Micro RDA que tributan a más de un RDA del Perfil del Egresado del Curso.

Anexo C. Visión en conjunto de las unidades semanales, los temas y micro RDA

Visión de conjunto de las unidades semanales, temas y micro RDA (resumidos)															
Unidades semanales	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	Transversal
Resumen de temas y micro RDA		Interioriza el prevenir y resolver dilemas éticos	Describe amistad	Valora conocer al cliente	Valora el guardar secreto	Comprende la publicidad	Comprende conflicto de intereses	Comprende libertad de patrocinio	Valora importancia del patrocinio debido	Conoce renuncia y cómo llevarla a cabo	Comprende el deber de diligencia	Interioriza el decir la verdad	Comprende el proceso disciplinario	Comprende responsabilidad social	Comprende la misión del abogado e interioriza su cumplimiento. Describe los valores de la profesión y su vínculo con la misión del abogado.
		Describe un dilema ético y cómo resolverlo													
		Sabe identificar dilemas éticos													
	Conoce el perfil del egresado del curso	Aplica los pasos para resolver dilemas	Distingue entre juicios prácticos y valores o principios	Identifica al cliente	Comprende en qué consiste el secreto	Identifica captación de la clientela	Identifica conflictos y sabe resolverlos.	Describe cómo aceptar un patrocinio	Comprende adquisición de pruebas	Conoce honorarios	Comprende la competencia profesional	Comprende el deber de verdad	Identifica instituciones en la regulación del abogado	Interioriza su responsabilidad social	Advierte cómo su accionar profesional puede incidir en su bienestar.
		Comprende las esferas del accionar humano	Identifica cuando es cliente	Comprende los valores que subyacen	Identifica captación de la clientela	Comprende valores de conflictos de intereses	Comprende responsabilidad moral y por omisión	Comprende cómo gestionar encargo injusto	Conoce bienes objeto del patrocinio	Conoce obligaciones con respecto de bienes	Valora actuar con diligencia	Comprende el deber de informar	Comprende apariencia debida	Interioriza su responsabilidad social	
	Conoce la metodología de dictado y evaluación del curso	Comprende en qué consiste el ejercicio de su libertad.	Conoce consecuencias relación abogado cliente	Identifica vigencia, alcance y excepciones.	Conoce modalidades de organización profesional	Comprende valores de conflictos de intereses	Comprende responsabilidad moral y por omisión	Comprende cómo gestionar encargo injusto	Conoce bienes objeto del patrocinio	Conoce obligaciones con respecto de bienes	Valora actuar con diligencia	Comprende el deber de informar	Comprende apariencia debida	Interioriza su responsabilidad social	
							Interioriza importancia independencia de criterio	Comprende cómo gestionar encargo injusto	Conoce bienes objeto del patrocinio	Conoce obligaciones con respecto de bienes	Valora actuar con diligencia	Comprende el deber de informar	Comprende apariencia debida	Interioriza su responsabilidad social	Advierte cómo su accionar profesional puede incidir en su bienestar.
							Interioriza importancia independencia de criterio	Comprende cómo gestionar encargo injusto	Conoce bienes objeto del patrocinio	Conoce obligaciones con respecto de bienes	Valora actuar con diligencia	Comprende el deber de informar	Comprende apariencia debida	Interioriza su responsabilidad social	
							Interioriza importancia independencia de criterio	Comprende cómo gestionar encargo injusto	Conoce bienes objeto del patrocinio	Conoce obligaciones con respecto de bienes	Valora actuar con diligencia	Comprende el deber de informar	Comprende apariencia debida	Interioriza su responsabilidad social	
				Distingue la responsabilidad profesional de otros tipos de responsabilidad				Valora el evitar conflictos							
			Conoce las normas aplicables a la ética y responsabilidad profesional												
Leyenda: micro RDA que se abordan de manera transversal a lo largo del curso figuran sombreados															

¿PUEDEN LAS FACULTADES DE DERECHO IMPACTAR EN LA ÉTICA DE SUS ESTUDIANTES?

Fernando Del Mastro Puccio(*)

Pontificia Universidad Católica del Perú

CONTENIDO: Introducción. I. La ética dentro de los sistemas regulatorios. II. La huella de nuestro pasado en nuestra ética. III. Tres caminos para dejar una buena huella ética en estudiantes de derecho. IV. ¿Cuán lejos estamos? V. Dos experiencias para el inicio de la carrera.

Introducción

Nunca antes en nuestra historia hemos tenido una oportunidad tan buena para repensar la enseñanza ética del derecho. A propósito de los recientes casos de corrupción, hemos podido notar muy de cerca la decadencia ética de la abogacía en nuestro país. Hemos visto a abogados con mucho poder cometer actos impensables, criminales, que lesionan de la peor manera la esencia de nuestra profesión. Los hemos visto en el sector público y privado: defendiendo lo impensable, coludiéndose, ocultando, mintiendo, sosteniendo aquello que le conviene a quien les paga sin preocupación por lo correcto, y un largo etcétera. Los hemos visto en arbitrajes, en estudios jurídicos, en empresas, en la academia, en el Poder Judicial y el Ministerio Público, en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la defensa poco ética de corruptos y violadores, en el litigio con los jubilados, en la política y en la gestión pública, y en muchos otros asuntos.

Estos hechos llevaron al Poder Ejecutivo a presentar, de cara a la reforma del sistema de justicia, un Proyecto de Ley para Incentivar la Probidad en la Abogacía. Entre sus disposiciones, se establecía la obligatoriedad de enseñanza ética en facultades de derecho. Lamentablemente, sin mayor debate, el Congreso eliminó la obligatoriedad en cuestión, en una autógrafa aprobada el 29 de enero del año en curso.

Esta aprobación llevó a que diversas facultades de derecho, en conjunto con las principales asociaciones de jueces y juezas de nuestro país, pidiéramos al Presidente de la República observar la ley. Entre otras afirmaciones, indicamos:

“Existen diversas investigaciones y declaraciones (...) que muestran que las facultades de derecho en nuestro país no están formando a sus estudiantes en ética y responsabilidad profesional. Por el contrario, en muchos casos, existen prácticas que forman en antivalores y proyectan una imagen del éxito profesional que no incluye a la ética como elemento central” (Pronunciamiento 2019).

* Profesor asociado e investigador en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde ocupa el cargo de coordinador del Área de Ética y Responsabilidad Profesional y del curso Derecho y Psicología. También en la Facultad de Derecho de la PUCP, es responsable de la Oficina de Plan de Carrera y Bienestar. Máster en Derecho por la Universidad de Duke como becario Fulbright. Máster en Estudios Teóricos en Psicoanálisis en la PUCP, donde actualmente es estudiante del Doctorado en Estudios Psicoanalíticos. Certificado por la American Management Association para aplicar el Myers & Briggs Type Indicator. Abogado por la PUCP.

Frente a este pedido, el presidente decidió observar la autógrafa el 20 de febrero, recordando lo dicho por la Ceriajus en el 2004: "... se ha olvidado el rol ético y social que debe ser inherente a la formación profesional, con mayor énfasis en el caso de las facultades de derecho" (p. 244) y afirmando que "la ética en el ejercicio de la abogacía en un pilar fundamental para la reforma del sistema de justicia" (2019, p. 2).

A la fecha de publicación del presente artículo, la Comisión de Justicia debía resolver sobre la materia y emitir, de ser el caso, un nuevo dictamen. Dos consideraciones parecieran estar pesando para mantener su postura.

La primera, sostenida por el Colegio de Abogados de Lima, es que no estamos ante un problema de abogados sino de todos los profesionales del sistema de justicia. Desde nuestro punto de vista, este es un prejuicio que los pone de espaldas a la realidad: en el sistema de justicia no hay profesión más importante que la abogacía, al ser abogados quienes lo dirigen y operan en sus diversas instancias e instituciones, y los problemas éticos centrales que vemos son problemas de profesionales del Derecho.

La segunda, que justifica el presente artículo y lleva a dejar fuera del problema a las facultades de derecho, es la idea de que la ética se forma en casa y la universidad ya no puede hacer nada al respecto. En este trabajo me enfoco en esto último, para sostener que la universidad sí impacta en la ética de quienes en el futuro ejercerán la profesión. Sostengo, además, que dicho impacto podría ser positivo y que, en esa medida, es posible emprender un cambio en la abogacía desde las aulas.

Afirmar que la ética se forma en casa y que, por tanto, la experiencia universitaria no tiene impacto en ella, significaría adoptar una postura determinista que niega la capacidad del ser humano para madurar en su propia ética, así como el impacto de experiencias vitales de mucha importancia en nuestras vidas, como aquellas que tenemos durante nuestra formación profesional. Por lo demás, el determinismo en la formación de la propia ética es una postura superada. Tanto desde el psicoanálisis, como desde la educación moral constructivista o la psicología del sentido, se reconoce que el ser humano tiene agencia sobre su propia ética y que los diversos entornos en los que habita a lo largo de su vida tienen un impacto.

Lo dicho no niega la gran relevancia que tienen las vivencias en la familia y la escuela en la propia ética. Sobre el particular, un objetivo clave en este trabajo será comprender cómo dichas vivencias del pasado marcan nuestra ética, puesto que esto nos permite tener verdadera consciencia de la magnitud del reto que enfrentan las facultades de derecho hoy en día.

En una sociedad, como muchas otras, donde la autoridad y las normas no están legitimadas, donde hay mucho incumplimiento, manipulación y corrupción, donde la lógica de valores cede a la lógica de evitar sanciones, donde las reglas no se aplican con igualdad y se leen según lo que nos conviene, las facultades deben preocuparse. De un lado, los estudiantes llegan con esa socialización previa y, sobre la base de esas vivencias, pueden haber construido aprendizajes respecto a las normas y a su profesión, que bien puede ser muy contrario a los valores que busca establecer un régimen constitucional democrática y justo. De otro lado, las facultades mismas son parte de esta sociedad y su cultura organizacional, muy probablemente, repite y refuerza aspectos negativos en relación a la regulación. Esta repetición puede que no tenga lugar "de la boca para afuera", pero sí en las vivencias que tienen lugar entre estudiantes, docentes y autoridades de las facultades de derecho.

Esperamos que este artículo sea leído con espíritu autocrítico por quienes se dedican a la enseñanza del derecho, con la convicción de que siempre es posible madurar más en la propia ética y formar a través del ejemplo.

Nuestro objetivo es, entonces, mostrar que las facultades de derecho sí pueden impactar positivamente en la ética de sus estudiantes, pero que dicha meta presenta muchos retos en nuestra sociedad, así como en cualquier sociedad donde la vivencia dentro de los sistemas regulatorios no sea una sostenida en valores.

Pese a dicho panorama, existe voluntad en muchas facultades para cambiar esta realidad. Dentro de la profesión, solo las facultades de derecho se han pronunciado con claridad sobre la crisis ética de la abogacía, de modo autocrítico y asumido su responsabilidad. En ese sentido, han dicho:

“Son las facultades de derecho las que tienen a su cargo el preparar a quienes luego ejercerán la profesión. En esa medida, deben asegurar que sus egresados sientan la misión de la profesión, asociada a la justicia, así como que conozcan y respeten los principios y deberes establecidos en el Código de Ética y desarrollen el coraje y la convicción necesaria para enfrentar un entorno profesional corrompido” (Declaración 2018).

El reconocimiento de esta responsabilidad parte, por lo demás, de la toma de consciencia de la situación actual de la formación ética en las facultades de derecho:

“... en la mayoría de casos, la ética es un rubro inexistente en la formación o puesta en su totalidad a cargo de un único curso de poca relevancia ... En contraste, existe un currículo oculto, que fomenta la práctica implícita de antivalores, a través de mensajes, actitudes y conductas que los alumnos pueden observar ...” (Declaración 2018)

Reconociendo nuestro papel en esta crisis, actualmente un grupo de facultades de derecho del país nos hemos juntado para realizar acciones colectivas en favor de un cambio en la abogacía desde las aulas. La voluntad existe. Sin embargo, existen también muchas interrogantes respecto a cómo formar en ética. Esperamos que este artículo ayude a reflexionar sobre el asunto, con miras a adoptar medidas para que la meta sea cada vez más realidad.

I. Nuestra ética dentro en los sistemas regulatorios

Quisiera comenzar por delimitar brevemente qué entendemos por ética en el presente artículo.

Por un lado, entendemos que la ética refiere al ethos de la persona, esto es, “... a las disposiciones, valores, motivaciones, creencias, maneras de ser ... inclinaciones, sentidos y razones que generan conductas, prácticas y acciones” (Montero 2011, p. 7). Más precisamente, apuntamos a aquello que, desde el plano de lo psicológico, motiva nuestros modos de pensar y actuar. En esa medida, por ejemplo, podemos tener un ethos marcado por el deseo de ser reconocido y el miedo al rechazo, que guían nuestros modos de pensar y actuar, o uno en que estos sean motivados por el coraje de la propia verdad y la rectitud. En similar línea, podríamos tener un ethos marcado por la arrogancia y el narcisismo u otro por la humildad y la empatía.

Esta mirada, por supuesto no implica negar la relevancia del plano intelectual relativo al pensar, que toca a nuestras reflexiones y concepciones acerca de lo correcto, pero sí comprender que este pensar hace parte de una filosofía viva (Focault 2014), esto es, de un pensamiento que debería estar ligado y ser coherente con el plano anímico y con la acción.

De otro lado, me refiero a la ética situada en sistemas regulatorios, es decir, a aquello que anima nuestro modo de actuar y pensar dentro de estos sistemas. En un sistema regulatorio existen normas formales y oficiales que regulan conductas, fijan valores, establecen procedimientos y funciones, entre otros, y que son creadas, comunicadas, aplicadas, modificadas, cumplidas e incumplidas por sujetos que adoptan roles de reguladores y regulados y que se relacionan en el marco de instituciones. En esa línea, tenemos sistemas regulatorios en la familia, la escuela, la universidad, el plano estatal, entre otros.

La ética a que nos referimos en el presente trabajo tendrá que ver, entonces, con aquello que motiva nuestro modo de actuar y pensar dentro de dichos sistemas.

II. La huella de nuestro pasado en nuestra ética

Comprender cómo impacta la vivencia en la familia y la escuela en nuestra propia ética es crucial si queremos tomar en serio el reto de formar en ética en el ámbito universitario. Lograr esta comprensión es difícil porque cuando decimos que la ética se forma en casa y sentimos, al decirlo, que uno mismo ha sido formado en valores, tendemos a simplificar e idealizar el pasado. Al hacerlo, evitamos mirarlo en su complejidad y su dimensión sombría (Jung 2001).

Un ejemplo claro de esto está en quienes han sufrido de violencia durante su infancia. Al repetir esos patrones de conducta en su adultez, tienden a justificarlo diciendo “así son las cosas”, “así me enseñaron a mí”, “así debe ser”, “era necesario y lo sigue siendo” (Miller 1985). Con ello, evitan ver lo negativo de las experiencias pasadas y sentir –nuevamente o quizá por vez primera– el dolor asociado a ellas. Repetir, entonces, es una especie de mecanismo de defensa que afirma que lo que vivimos en nuestro pasado es como deben ser o como son las cosas. Así, nos aleja de lo malo del pasado. Además de los supuestos de violencia, podemos repetir modos de actuar y dinámicas de relacionamiento autoritarias, así como patrones de conducta negativos, pero que no cambiamos por la tendencia, muchas veces inconsciente, a ocultar lo doloroso y negativo de nuestro propio pasado, a validarlo con la repetición.

Al mismo tiempo, la idealización de nuestra “formación en valores” en el pasado nos permite concebirnos como sujetos éticos, lo que puede ser muy autocomplaciente. Usualmente, esta idealización se da porque nos centramos en aquello que nos dijeron en la familia y la escuela –por ejemplo: “no se debe mentir”–, pero no en las vivencias que tuvimos y lo que aprendimos implícitamente de ellas –por ejemplo: quién puede mentir y quién no, qué pasa cuando uno dice la verdad, para qué y cuándo se miente, sobre qué cosas se miente, entre otros.

Hay que reconocer, entonces, que las vivencias en la familia y la escuela son diversas, complejas, y muchas veces discordantes con “lo dicho”. Algunas vivencias dejan buenos aprendizajes, pero muchas otras nos dejan aprendizajes negativos e inadvertidos.

Si nos centramos en las vivencias dentro del sistema regulatorio de la familia y la escuela, es muy común adquirir muy malos aprendizajes en diversos aspectos. Veamos a continuación algunos aprendizajes y las vivencias con las que los adquirimos:

1. Que las normas se cumplen por miedo a la sanción y no porque estén asociadas a valores; por ende: se puede incumplir cuando hay poco riesgo de ser castigado, cuando la sanción se puede eludir o cuando el beneficio es mayor al castigo.
 - a. Vivencias de justificación autoritaria. Muchas veces, ante la pregunta de un hijo o estudiante respecto a la razón de ser de una regla, es decir, a por qué debe ser cumplida, la respuesta es: “porque yo lo digo”, “porque está en el reglamento”, “porque siempre ha sido así”, “no me molestes y cumple”, entre otras. La razón de ser de las normas, así, no se justifica en un sentido asociado a valores, sino a la posición de poder de quien busca su cumplimiento. Se cumple, entonces, porque se exige desde el poder.
 - b. Vivencias de reforzamiento centradas en la sanción. Cuando se busca que una norma sea cumplida, se hace enfatizando que, de no hacerlo, habrá una sanción. De hecho, la formulación misma de la norma está centrada en la sanción, lo que puede verse en reglamentos escolares, que articulan sus normas en función a las sanciones. Así, las normas se comunican no es sus razones y su sentido, sino en su potencial para generar una sanción. Cuando un niño o adolescente se pregunta, entonces, por qué cumplir la norma, la respuesta es porque si no se cumple: “te quedas sin recreo”, “te quedas sin ver televisión”, “no sales a la fiesta”, “no comes postre”. Podemos oír padres y madres decir: “si lo vuelves a hacer voy a ...”. La sanción se muestra entonces como la razón y, en esa medida, si se puede evitar la sanción, se puede incumplir la norma. Ello puede generar un aprendizaje sofisticado para incumplir las normas: manipular para que no se cumpla la sanción, evitar ser descubierto, culpar a otro, justificar el propio incumplimiento, saber ante quién cumplir y ante quien no se tiene que cumplir, entre otros.

Podemos sospechar que, muchas veces, este modo de justificar las normas deriva de que, en realidad, quienes tienen un rol regulador no conocen el sentido profundo de su existencia. En diversas ocasiones, las normas parten de la costumbre, de que “siempre ha sido así”, pero no se conoce realmente su justificación. En otras ocasiones, podría ser que la razón de las normas no se pueda confesar, porque quizá están únicamente para beneficiar a quien las crea y aplica. Puede también que las razones tengan una dimensión anímica compleja e inconsciente, como por ejemplo la vergüenza, el temor o el asco (Nussbaum 2006).

2. Que las normas no se aplican a todos por igual, sino que, quienes tienen cierto poder, o le “caen bien” a quien lo tiene, pueden incumplirlas sin mayor problema; en esa misma línea, se aprende que no tiene caso cuestionar a la autoridad que incumple.

- a. Vivencias de incongruencia. En diversas experiencias, tenemos a figuras de autoridad (padre, madre, docente) que exige el cumplimiento de una norma que él o ella no cumple. Se puede decir, por ejemplo, “no se grita” y gritar en el marco de un conflicto marital. Se puede decir, “no se usa el celular en clase”, mientras que el docente lo usa y responde mensajes. Se puede decir, “no se miente” y, ante la pregunta de un hijo o hija, responder cualquier cosa, sin decir la verdad. De otro lado, cuando una figura de autoridad incumple con una norma, no suele tener sanción. De hecho, muchas veces quien regula no está sujeto a las normas, en parte porque no hay quien pueda o quiera sancionarlos. Con ello, se refuerza la idea de que las normas tienen casi una identidad con las sanciones; son estas su punto de referencia y su condición de existencia. Cuando se cuestiona a una autoridad, por incumplir una norma, puede que la respuesta de esta sea hostil o que diga cualquier cosa como justificación. Si el cuestionamiento se hace frente a otra autoridad (por ejemplo: una queja contra un docente ante una autoridad de la escuela) es probable que la cercanía entre docentes y autoridades ponga el camino de quien reclama como una cuesta empinada. Con ello, se refuerza la idea de desequilibrio entre regulador y regulado. Si el primero incumple, nadie le dirá nada, nadie lo sancionará y, de ser cuestionado, podrá decir cualquier cosa y salir bien librado.
- b. Vivencias de desequilibrio. Las normas pueden no aplicarse a todos por igual: quien tiene más cercanía, quién le cae mejor a quien tiene poder, quien sabe mejor cómo “llegar” al docente, tiene un mejor trato que quien le cae mal o quien no tiene ese nexo. La vivencia entre hermanos puede también dejar estos aprendizajes. El desequilibrio puede notarse también en los modos en que se resuelven conflictos. Es usual que las decisiones de las autoridades en el marco de conflictos no sean motivadas, no partan de un diálogo ni un esclarecimiento de los hechos y motivaciones, sino que se den de modo rápido y arbitrario. Notemos, además, que existen estereotipos que marcan también un trato desigual, por ejemplo, entre regulados hombres y mujeres. Puede que las mujeres tengan un conjunto de normas referidas a quehaceres domésticos que limiten su libertad y supongan un trato desigual indebidamente justificado.

Podemos notar que, en diversas ocasiones, se justifica el trato diferenciado con una “motivación aparente”. Por ejemplo, se puede decir que uno puede incumplir porque es mayor. Esto tendría sentido si, por ejemplo, la norma prohíbe manipular alguna herramienta que representa un peligro para un niño, pero no si hablamos de normas como “no gritar”, “no mentir”, “no usar el celular en clase”, “respetar al otro”, “cumplir con lo que uno promete”, entre otras. En general, esta misma reflexión nos permite ver cómo se entienden las normas desde lo conductual y no en el sentido de valores. Si hablásemos de “respeto”, “justicia”, “verdad”, “lealtad con la propia palabra”, podríamos ver con mayor claridad la incongruencia del regulador. Un hijo o estudiante debe cumplir con lo que ha prometido, o será sancionado, pero un padre o docente puede no cumplir con lo que ha prometido, y nada ocurre.

3. Que uno mismo tiene un rol pasivo respecto a la creación y aplicación de las normas, que no son algo nuestro sino algo impuesto. En ese sentido, que nuestras necesidades e intereses no son considerados para la creación de las normas, que responden al interés del regulador.
 - a. Vivencia como receptor. Por lo general, las normas vienen de otro lugar, no participamos en su creación ni en las reflexiones sobre su sentido. En una escuela, las normas se dan a conocer a sus estudiantes y, en diversas ocasiones, puede que no se conozcan. Las normas se nos dan y se nos aplican, nuestro rol es de receptores, que deben lidiar con los modos de aplicación, para evitar sanciones. Si a esto sumamos lo visto antes sobre el modo en que se justifican las normas, el rol de receptor se debilita aún más ya que se quita la posibilidad de cuestionar o indagar válidamente por las razones.
 - b. Vivencias de egocentrismo del regulador. Quien regula, muchas veces, lo hace desde su propio punto de vista y para su propio beneficio. Esta vivencia está ligada a lo recién dicho, en la medida en que la posición de receptor aleja la normatividad de nuestra perspectiva e intereses, pero no se deriva de ello. Quien ejerce un rol de regulador podría tomar en cuenta la necesidad e interés del otro al establecer las normas, pero muchas veces eso no es así. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la regulación del tiempo, fijada en función a la conveniencia e interés de quien regula. En el ámbito escolar, la posibilidad de los estudiantes de dar a conocer sus intereses y necesidades, de cara a impactar en las normas, es escasa.

La capacidad del regulador para comprender al regulado muchas veces no es fácil de desarrollar (Bettleheim 2011). Desde la adultez, comprender la infancia o la adolescencia puede ser muy complejo y frustrante. Sin vías de comunicación sincera, tenderá a primar el egocentrismo del regulador o la capacidad de manipulación del regulado. Frente a la falta de comunicación, lo que puede primar es la sensación de que uno sabe, casi de modo automático, qué es lo que el otro necesita. En cualquier caso, la regulación no será un producto colectivo sino uno unilateral. La falta de comprensión puede estar también marcada por una incapacidad que tiene su propia historia, es decir, por un propio pasado en el que nuestras necesidades no tenían voz ni oído que las oiga.

Desde una perspectiva psicológica, quisiera ahora plantear que los aprendizajes recién vistos fluyen de una ética autoritaria y narcisista, que concibe la realidad desde una perspectiva conductista e inconsciente, y que razona conforme a un esquema de moral pre-convencional.

Desde una perspectiva de desarrollo, a partir de la teoría de Lawrence Kohlberg, se reconocen diversos niveles o estadios de razonamiento moral por los que pasa el ser humano. Se trata de una mirada evolutiva, que estima la existencia de una estructura de pensamiento que puede variar e ir madurando en el tiempo.

El primero de estos niveles es el preconvencional, que, en su etapa primera, de moral heterónoma, en la que las razones para hacer lo correcto son "... evitar el castigo y el poder superior de las autoridades" (Reimer 2008, p. 22) y en la etapa segunda, de individualismo, en la que las razones son "servir los propios intereses y necesidades" (ídem). El segundo nivel es el "convencional" en el que dentro de la etapa 3, las razones para hacer lo correcto se enfocan en "la necesidad de ser una buena persona a los propios ojos y a los de los demás", y en la etapa 4, de sistema social y consciencia, están enfocadas en "mantener la institución en funcionamiento en su conjunto, evitando el colapso del sistema" (et, al., p. 25). Finalmente, el tercer nivel es el "posconvencional o de principios". En este, la etapa 5 lleva a hacer lo correcto por "un sentido de obligación hacia la ley debido al contrato social" y la etapa 6, de principios éticos universales, se sostiene en "la creencia como persona racional en la validez de principios morales universales, y un sentido de compromiso personal con ellos" (ídem).

Las vivencias y aprendizajes que hemos descrito líneas arriba parecen situarnos en el nivel pre-convencional: prima la conveniencia y la búsqueda del propio beneficio, siendo la sanción la principal justificación para cumplir. En este nivel se ubicarían no solo los niños y niñas, sino también los adultos que adoptan frecuentemente el rol de regulador.

La lógica psicológica en este nivel, que impera tanto en reguladores como en regulados, es una propia del conductismo: se hace y se deja de hacer en función a refuerzos y castigos (Schunk 1997). En esta lógica, la realidad de la regulación se torna exterior (Del Mastro 2018), es decir: quienes adoptan roles de regulador y regulado se conciben, a sí mismos y al otro, como sujetos que "hacen o dejan de hacer" y pierden de vista aquello que los anima a actuar de un modo determinado. Aquello que motiva sus decisiones y actos pasa a ser desconocido. Al mismo tiempo, aquello que se regula son las conductas y no aquello que las motiva. De ese modo, el objeto de regulación es la conducta y los sujetos dejan de lado la posibilidad de tomar consciencia y regular aquello que las genera. En esa medida, puede que el regulador norme algo por temor o por su propio placer y lo aplique como una descarga de su violencia, y que el regulado cumpla por temor a perder el amor del regulador y no por convicción, o que incumpla por un deseo de agredir o por temor a ser dejado de lado. Las razones no son comprendidas, pasan a ser parte de una realidad oculta.

En esa medida, podríamos asociar el carácter conductual del sistema regulatorio a una ética inconsciente, toda vez que no conoce de sus propias motivaciones.

Por otro lado, podríamos indicar que las vivencias antes descritas, dan cuenta de una ética autoritaria y no en una humanista, lo que supone cierto tipo de deseos y lazos entre los sujetos del sistema regulatorio, que marcan sus modos de pensar y actuar, en el marco de roles establecidos. Como advierte Fromm:

"Puede distinguirse a la Ética Autoritaria de la Ética Humanista en dos aspectos: uno formal y otro material. La Ética Autoritaria niega formalmente la capacidad del hombre para saber lo que es bueno o malo; quien da la norma es siempre una autoridad que trasciende al individuo. Tal sistema no se basa en la razón ni en la sabiduría, sino en el temor a la autoridad y en el sentimiento de debilidad y dependencia

del sujeto; la cesión de la capacidad de decidir del sujeto a la autoridad es el resultado del poder mágico de ésta, cuyas decisiones no pueden ni deben objetarse. Materialmente, o en relación con el contenido, la Ética Autoritaria resuelve la cuestión de lo que es bueno o malo considerando, en primer lugar, los intereses de la autoridad y no los del sujeto” (Fromm 2003, p. 22).

En similar línea, dice Susana Frisancho, que el “... discurso autoritario no puede ser alterado, tiene autoridad a priori, completa e indiscutible. Es, por así decirlo, la voz del pasado y de la tradición, la voz del padre, un discurso ya dado con el cual no es posible establecer un verdadero diálogo” (2004 p. 69).

El regulador autoritario, así, se concibe como quien determina el bien y el mal, por sus propios medios y sin concurso de quien está en la posición de regulado. En esa medida, se trata de un regulador narcisista, que entroniza su visión de la realidad y toma al otro como objeto para su propio placer, concibiéndose al mismo tiempo como un ser omnipotente que no tiene límites. Así, iguala lo bueno a lo que desea y le conviene. De hecho, no concibe nunca la posibilidad de una co-regulación, es decir, de una fijación de valores y pautas de conducta producto de la armonía entre puntos de vista e intereses, que fije límites en función a la convivencia. Frente a esta posibilidad, se afirma como quien tiene la verdad respecto a lo que se debe hacer y, más aún, respecto a lo que el otro debe hacer. En ese contexto, notemos que “si yo tengo algún conocimiento especial de usted o de su mundo y que usted no tiene, poseo cierto poder sobre usted” (May 2000, p. 149).

En el caso de la familia y la escuela, un ejemplo clave puede ser el uso del tiempo, que puede venir totalmente regulado por padre, madre y docentes, sin concurso ni opinión de los hijos y estudiantes, e incluso sin conciencia de sus propias necesidades e intereses. El rol de receptor de normas se internaliza entonces en este punto en un esquema donde existe otro que se concibe como quien está en capacidad de determinar cómo debemos actuar, utilizando la sanción como vía para lograrlo.

A nivel de comunicación, esta posición de superioridad se puede evidenciar en el uso del lenguaje directivo (Wild 2013, pp. 202-203), esto es, uno en que siempre se indica al otro qué hacer y qué no hacer, pero no se entabla un diálogo destinado a comprender el punto de vista del otro. Estamos lejos, entonces, del deseo genuino de comprender al otro antes de juzgarlo, del que habla Rogers.

Del lado del regulado, el narcisismo también toma un matiz importante con las vivencias antes vistas, puesto que, si bien se concibe limitado por una autoridad que ejerce poder, puede engañarla y esquivar sus sanciones. Puede también manipular a la autoridad, por ejemplo, notando que su llanto en lugares públicos lleva al papá o mamá a hacer lo que el niño desea. Por supuesto, la dimensión anímica de estos sucesos queda oculta: las razones reales de un “berrinche” no suelen ser aquellas que superficiales, que se exigen de modo explícito. Un niño puede decir que quiere todo o puede que todo le moleste, pero en realidad esa generalización podría responder a una imposibilidad de comunicar realmente aquello que le molesta o que realmente quiere. Un diálogo de pocas preguntas y muchas indicaciones frustra la posibilidad de conocer aquello que está detrás y de regular aquello que motiva las conductas.

En cualquier caso, al igual que en el caso del regulador, el regulado busca la satisfacción de su propio placer, su comodidad, su necesidad. Las normas se conciben como una barrera frente a estas metas, como algo que afecta nuestro deseo desde fuera y que genera malestar, no como algo a lo que le encontramos un sentido propio.

Ni el regulado ni el regulador se conciben, entonces, como sujetos limitados por un orden superior sostenido en valores, sino que entran a un juego de dominio en búsqueda del propio placer, sin diálogo sincero. Quien se ubica en una posición de regulado, sin embargo, tendrá también ocasión de ser regulador. Entonces, tendrá como ideal aquellos modelos que vio en sus vivencias de regulado y seguirá actuando en un esquema autoritario, solo que en la posición de autoridad.

Además de la idea de narcisismo, desde el psicoanálisis podríamos postular que este vínculo entre regulado y regulador, marcado por una lógica conductual y autoritaria, está movido también por lo pulsional. Para Freud, dos pulsiones centrales que mueven al ser humano son la pulsión de vida, que tiende a unir y a crear, y la pulsión de muerte, que tiende a separar y destruir (Freud 1933). Sin entrar en la complejidad y en los vínculos y la génesis de ambas, conforme al marco teórico de Freud, podemos plantear la hipótesis de que los aprendizajes y vivencias antes vistos, se sostienen y generan separación entre sus sujetos e impiden la creación de estructuras regulatorias más grandes. En efecto, las normas, al aplicarse a unos sí y a otros no, no son un vehículo de unión. Una lógica de valores, permitiría la con-

cepción de sujetos que deben actuar conforme a dichos valores, aun cuando su concreción en deberes concretos pueda tener diferencias, pero la lógica de sanción, en la que uno sanciona y el otro recibe o esquiva la sanción, impide concebir a la regulación como una tarea donde, sin perjuicio de los roles que cada quien asume, nos convoca y reúne con propósitos comunes.

Este tipo de vínculos, marcados le narcisismo y pulsional, tiende a repetirse por la "... tendencia general de un individuo a repetir en el presente sus relaciones del pasado" (Sandler 1993, p. 74). En otra oportunidad, he propuesto que mecanismos como la transferencia también marcan esta repetición, al hacer que el individuo llegue a "... vivenciar hacia una persona del presente sentimientos, pulsiones, actitudes, fantasías y defensas ..." (ídem) del pasado. Podemos entonces postular que el individuo transfiere la posición del regulado frente a reguladores en nuevos contextos, con las mismas actitudes de receptor de la regulación.

III. Tres caminos para dejar una buena huella ética en estudiantes de derecho

Podemos notar que nuestros y nuestras estudiantes llegan a nuestras facultades, muy probablemente, con vivencias en sistemas regulatorios pasados caracterizados por dinámicas y posiciones contradictorias con las pretensiones de un Estado Constitucional de Derecho y con la misión de la abogacía en la sociedad. Un estudiante de derecho y futuro profesional con esos aprendizajes podría, marcado por sus vivencias pasadas, verse impulsado a:

- i) Hacer lo que le ordene quien tiene una posición de poder, o lo que le convenga a sí mismo, y no actuar según lo que estima correcto en una lógica de valores.
- ii) Considerar que se debe hacer y recomendar lo necesario para evitar la sanción.
- iii) Actuar y decidir desde su propia mirada, sin abrirse a comprender el punto de vista del otro y sin capacidad para generar consenso.
- iv) Quitar valor al débil y darle la razón al poderoso.
- v) Tratar mejor a quien le brinda más beneficios y peor a quien estorba en su búsqueda de beneficios.
- vi) Temer hablar frente a lo incorrecto o decir "no" a quien tiene poder.
- vii) Buscar poder para estar más allá de cualquier límite.
- viii) No se consciente sobre qué lo lleva a pensar y actuar de determinado modo en la carrera y luego en la profesión.

Frente a esta huella del pasado, ¿pueden las facultades de derecho fomentar la maduración ética de sus estudiantes?

Pese a la clara influencia del pasado, sostenemos que el ser humano se desarrolla a lo largo de la vida y puede madurar en su ética, esto es, en aquello que motiva sus actos y pensamientos dentro de sistemas regulatorios. Esto más aún en un ámbito como el de la formación profesional, en el que uno tiene mayores capacidades de reflexión y autorreflexión. Asimismo, en esta etapa uno se abre a nuevos modos de razonar y pensar, a nuevos modos de comprender el mundo y la realidad, dentro de un escenario donde desarrolla una identidad profesional a través de la toma de decisiones respecto a su futuro. Este ambiente, en el que uno ingresa a una edad en la que puede dejar atrás criterios de dependencia, más asociados a la familia y la escuela, puede ser muy propicio para la toma de consciencia y la maduración de la propia ética.

- i. Esta maduración dependerá, por supuesto, de una serie de factores. En efecto, la ética no madura si el terreno no es fértil. Por el contrario, puede deteriorarse o estancarse. A continuación, veremos algunos caminos que podrían llevar a generar un terreno fértil para la maduración ética:

Desde una perspectiva psicoanalítica, podríamos pensar en la necesidad, y la posibilidad, de ampliar la consciencia respecto de nuestra propia ética, esto es, de advertir qué anima el modo en que actuamos dentro de los sistemas regulatorios. Esa toma de consciencia brinda la posibilidad de

transitar por otras rutas y de madurar en nuestra propia ética. Tomar consciencia de los aspectos sombríos es, sin duda, un reto muy grande. Psicoanalíticamente, reconocemos que existen resistencia para saber más de uno mismo, lo que lleva a la persona a "... ocultar la verdad sobre sí misma" (May et. al., pp. 149-151) cuando lo que no sabemos es algo que no queremos saber o reconocer. Sin perjuicio de ello, dicha parte sombría se manifiesta y se expresa en pensamientos y acciones. Es posible partir de estas manifestaciones para indagar de dónde vienen. Ello más aún cuando una persona se encuentra en un ámbito en el que debe tomar decisiones importantes, así como enfrentar situaciones de tensión y autocuestionamiento. Asimismo, en el ámbito universitario el pasado en la familia y la escuela es un poco más lejano, lo que permite mirar atrás con menos riesgo.

Sin perjuicio de lo dicho, la autoreflexión, sobre todo enfocada en reconocer lo sombrío, requiere de un encuadre adecuado a nivel psico-pedagógico y puede tener metas modestas, que no busquen una toma de consciencia de aspectos inconscientes profundos, sino una mayor consciencia respecto a modos de pensar y actuar que están asociados a ciertas vivencias y motivaciones. Esta consciencia incluye el reconocimiento de la carga emocional asociada a dichas vivencias.

En lo que toca a los sistemas regulatorios, las vivencias en la regulación presente, puede ser un espacio que sirva para reflejar el pasado y así ganar consciencia. Así, en el ámbito de los sistemas regulatorios, ampliar la consciencia se puede lograr interrogándonos respecto al por qué de nuestras acciones en roles de reguladores y regulados. Esta toma de consciencia nos permite, por lo demás, echar luz sobre la propia sombra, esto es, reconocer que tenemos retos en el plano ético. Por lo demás, esto se puede lograr con un trabajo colectivo, que no individualice el análisis, sino que plantee reflexiones sobre vivencias comunes dentro de sistemas regulatorios.

En la enseñanza del derecho, se puede buscar esto a través de medios pedagógicos enfocados en las vivencias mismas. Los estudiantes tienen diversas vivencias. Se puede ligar a experiencias pasadas, con reflexiones grupales, y dar mayor densidad emocional a las razones que se encuentran para hacer o no hacer. Por ejemplo, un estudiante puede no reclamar ante un acto de un docente que sea contrario a sus deberes, y puede justificarlo porque "no sé cómo va a reaccionar". Esa vivencia probablemente tenga una historia, es decir, haya sido vivida en diversas oportunidades en la vida, en las que no hemos sabido cómo iba a reaccionar una figura de autoridad. De ese modo, el estudiante se comprende con un ser con una historia que incluye en el presente y que actúa no solo por razones sino también por temores, deseos, entre otros, que están ligados a vivencias previas. Otro ejemplo podría ser el de no quejarse ante una autoridad, por incumplimientos de un docente, porque "igual nada va a cambiar". Al igual que en el ejemplo anterior, podemos interrogarnos por vivencias previas en las que uno siente que, pese a su acción, nada va a cambiar o, en general, situaciones en que su acción no genera el resultado esperado. Estas vivencias pueden estar asociada a la sensación de impotencia por no poder cambiar situaciones que nos dañan o afectan negativamente. Asimismo, puede estar asociado a experiencias, en nuestra historia, de reclamos justos no oídos o necesidades no reconocidas. Esta sensación y estas experiencias pueden hacer que, en el presente, se frustren demasiado pronto, y con mucha fuerza, posibles intentos de cambiar las cosas o de buscar que, al menos en algunas ocasiones, que se nos escuche y se resuelva con justicia.

La idea que se puede transmitir es que nuestro modo de ser en los sistemas regulatorios está marcado por esas vivencias previas, que nos pueden hacer ver la realidad de un modo, cuando quizá podríamos verlo y sentirlo de otro.

Ello se justifica con mayor razón en la enseñanza del derecho puesto que comprender los vínculos del ser humano con las normas y las figuras de autoridad ayuda a comprender el Derecho mismo. Así como Jung dijo que la mejor manera de aprender psicología es por la misma experiencia, uno puede comprender mucho del Derecho mediante la toma de consciencia respecto a las propias vivencias dentro de sistemas regulatorios.

- ii Desde una perspectiva de la psicología del sentido, el ser humano no es solo un ser de su pasado, sino que se encuentra orientado al futuro, al sentido de su vida. Como indica Frankl, "el sentido marca la pauta del ser" (Frankl 2011, p. 27), por ello, el ser se ve afectado por el sentido: aquello que buscamos con nuestra vida representa un deber ser, una meta que marca la pauta del sujeto en el presente y le exige movimiento. El "ser", así, madura en función al "deber ser" que persigue. En esa línea, el sentido impacta en la propia identidad, al marcarle el camino, que exige también

maduración personal. En esa línea, el ser humano "... no está condenado a "ser así", pues siempre se enfrenta a la posibilidad de "ser-de-modo-diferente" (Marques 2013, p. 137) La mirada de Frankl es muy sugerente al añadir a la mirada psicoanalítica, centrada en la continuidad del pasado, la dimensión del futuro y de su impacto, en tanto sentido, en la identidad presente.

Para que el ser humano avive su búsqueda de sentido, se debe "poner al sujeto en contacto genuino con el mundo" (Bruzzone 2011, p. 172) de modo que se pueda "abrir a la conciencia la experiencia del mundo" (et. al., p. 183). Con esto se quiere decir que el sentido se descubre en el mundo, en las interacciones y vivencias, siempre que éstas sean genuinas y conscientes.

En lo que toca a la ética dentro de los sistemas regulatorios, podemos pensar también en su ser y su deber ser. El "sentido" se puede encontrar en el contacto con "el mundo" regulado, en el contraste entre lo que se vive y lo que se anhela: en la injusticia advertir los retos de la justicia, en el conflicto advertir los retos de la armonía, en la arrogancia advertir los retos de la humildad, en la actitud autoritaria advertir los retos de la vida democrática.

El sentido, por lo demás, está asociado estrechamente a la ética, puesto que tiene que ver con lo que estimamos "valioso" y, en esa medida, a los valores. Desde la psicología del sentido, esto es así desde la infancia: "... el niño está mucho más cercano a los valores de lo que el adulto imagina o piensa conducirlo, porque su conciencia tiene la capacidad prelógica de captar sentido, o captar lo valioso presente en cada situación". Asimismo, "la capacidad de percibir y captar lo valioso se va delineando gradualmente, en cada fase de la vida" (Marques 2013, p. 121)

La formación profesional es una fase central porque nos orienta al futuro y nos pone frente la necesidad de orientarnos a un deber ser: a un profesional que deseamos ser. Entonces, es también una etapa donde podemos captar lo valioso de nuestra profesión, reconocer los retos y dirigirnos hacia ello.

En la enseñanza del derecho, la distancia que hay entre el "ser" y el "deber ser" de la abogacía en nuestro país presenta también una potente oportunidad. La misión de nuestra profesión es la justicia, pero lo que vemos en realidad es muchas veces lo contrario. Los casos mencionados en la introducción dan cuenta de ello. Frente a ese estado, que debemos mostrar con claridad, los y las estudiantes pueden imaginar su propio "deber ser": el sentido de su vida como profesionales del derecho. Esto tiene poder: al proyectar una vida profesional a favor de la justicia, el presente del sujeto exigirá un camino de maduración moral a partir de las propias experiencias. Estas exigencias no son lejanas. Para un estudiante de Derecho, la vivencia de una regulación autoritaria está presente, por ejemplo, en centros de prácticas pre-profesionales que les exigen incumplir la ley de prácticas en lo relativo al horario máximo. En ese presente vivido, en ese "ser" de las cosas, es posible plantear un futuro distinto y comenzar a madurar el propio "ser", por ejemplo, aprendiendo a decir lo que pensamos, aun cuando quien nos oiga tenga una posición de autoridad, a la que pueda no gustarle lo que tengamos que decir. Anhelando un futuro podemos, entonces, desarrollar el coraje de la verdad (Focault 2014).

- iii Desde una perspectiva del desarrollo moral, Kohlberg y sus seguidores mostraron que es posible mejorar en la capacidad para razonar moralmente cuando uno madura y está expuesto a modos de razonar de niveles superiores, como el posconvencional, centrado en valores. Esto ocurre con mayor efectividad cuando el razonamiento no se da sobre supuestos o dilemas morales hipotéticos, sino sobre situaciones concretas y vividas por los sujetos que razonan.

De ese modo, y en lo que toca a sistemas regulatorios, la maduración ética estará sujeta, en parte, a la existencia de oportunidades para razonar moralmente sobre asuntos que tocan a las propias experiencias regulatorias. Ello se puede lograr haciendo que el sistema regulatorio sea en esencia participativo y dialogante, esto es, evitando que existan sujetos en una posición pasiva. Los sujetos deben participar y dialogar sobre la creación de normas, su aplicación, la solución de problemáticas de la regulación y desde la regulación, entre otros.

En la enseñanza del derecho, podríamos tomar al "derecho interno" de las facultades como laboratorio en donde las vivencias activas sean ocasión de participación, diálogo y razonamiento moral.

Estos tres ejes, por supuesto, no son una fórmula. El ser humano es demasiado complejo, particularmente en lo relativo a sus motivaciones, como para pretender que existen recetas. Sin perjuicio de ello, se trata de tres ejes que apuntan a dimensiones centrales para promover la maduración ética en las facultades de derecho.

IV. ¿Cuán lejos estamos?

Si nos centramos en la enseñanza del derecho, a partir de diversas investigaciones, y mi experiencia en la materia, considero que estamos lejos de promover este tipo de maduración. De un lado, no existen este tipo de medidas, porque se concibe a la formación como centrada en el saber (conocimientos) y saber hacer (destrezas), pero no en el ser (actitudes, motivaciones), siendo este último plano el que toca aquello que anima el uso de esos conocimientos y destrezas. En suma, se trata de pensar como abogado, pero no de trabajar en aquello que anima ese pensar. En esa lógica:

- i. Se desaprovecha, toda una vivencia del “derecho interno”, como posible foco de aprendizaje significativo a nivel de desarrollo moral. La regulación dentro de las facultades es algo burocrático, sin valor pedagógico.
- ii. No se busca que los y las estudiante tomen consciencia de su propia ética, que les sirvan de espejos de sus actos y pensamientos, para indagar qué los motiva y reflexionar sobre nuestro pasado. Nuestra historia con las normas y las figuras de autoridad no es explorada y nuestros pensamientos y actos como regulados y reguladores, dentro de las facultades, no son tomados como manifestaciones de algo que los motiva y que podemos comprender mejor.
- iii. No existen espacios dedicados a hablar sobre el sentido y el estado de la profesión. De hecho, las mismas facultades no tienen un discurso claro e institucional al respecto. Frente a esto, pesan discursos de éxito y habilidades muchas veces contrarias a la ética, que refuerza un sentido ego-centrista y una concepción del derecho como instrumento propio.

La problemática, sin embargo, no es solo de ausencia de métodos y enfoques propicios. Está también en la existencia de un currículo oculto que reproduce las vivencias y aprendizajes negativos que hemos visto anteriormente:

- i. Reproduce una lógica conductual en su propia regulación interna. Emite normas, las comunica y busca su cumplimiento en función a la sanción, sin dar cuenta del sentido de las normas asociado a valores. La justificación que se brinda es que “está en el reglamento” o que siempre ha sido así o cualquier cosa que se dice simplemente para salir del paso ante la pregunta de un estudiante. En este sistema, la tradición tiene un gran peso, incluso cuando se trata de una contraria a las normas, como ocurre con la ley de prácticas pre-profesionales o cuando el docente con más trayectoria es quien más puede incumplir sin que algo ocurra.
- ii. Reproduce una lógica narcisista y autoritaria, donde quien tiene poder decide las cosas desde su mirada, sin abrirse de modo genuino a comprender la realidad y necesidades de quienes serán afectados por sus decisiones. Quien tiene poder puede además incumplir las normas que exige a quien no lo tiene, y nada le ocurre. De igual modo, muchas veces los modos de actuar, por ejemplo, al interpretar una norma, son guiados por lo que conviene a quien interpreta. El narcisismo se ve también en la costumbre de rendir pleitesía a la eminencia, al ilustrado doctor, lo que facilita las cosas y permite ir accediendo a cuotas de poder y a beneficios.
- iii. Reproduce el temor de hablar frente a lo incorrecto, sobre todo cuando quien actúa indebidamente tiene poder. Se forma mucho más en el “no quemarse” que en “hablar frente a lo incorrecto”, porque la lógica es centralmente egocentrista.
- iv. Reproduce vínculos de hostilidad entre estudiantes y docentes, de separación entre unos y otros, de falta de diálogo abierto, sincero y no directivo.

A esto podemos agregar aspectos propios de la enseñanza del derecho, que tocan más a sus métodos y contenidos:

- v. Forma en un derecho desligado a los valores constitucionales, con la lógica de que no existen respuestas correctas y de que el hábil sabe defender cualquier postura.
- vi. Forma en una lógica de competencia, donde importa ganar y conseguir una buena nota, para lo cual hay que decir lo que el docente quiere escuchar, y no lo que uno estima correcto. La pregunta por lo correcto casi no existe: no se forma en los y las estudiantes la costumbre de preguntarse qué es lo correcto.
- vii. Forma en un Derecho escrito, desligado de la realidad de la profesión y de su impacto, muchas veces negativo, en la sociedad. No se muestran tampoco las injusticias que tienen lugar en la realidad vivida del derecho.
- viii. No tiene mayor incidencia en lo que ocurre en los centros de prácticas pre-profesionales, como por ejemplo los estudios de abogados. En estos casos, existen estudios que incumplen abiertamente con el horario máximo establecido en la Ley de Prácticas, sin que nadie haga algo. Enseñan, así, el valor que le dan a la ley. Existen centros de prácticas que encargan cosas ilegales, que enseñan a obedecer y decir lo que a uno le ordenan y no lo que uno considera correcto, entre muchos otros aprendizajes perversos.
- ix. Forma en un ejercicio profesional sin consciencia de los límites y obligaciones de responsabilidad profesional, es decir, en un saber y saber hacer sin límites.

En este punto, vale preguntarnos, nuevamente, si las facultades de derecho pueden impactar en la ética de sus estudiantes. La meta es sin duda complicada. Al igual que el ser humano, las facultades de derecho, como instituciones, deben reconocer las distancias entre el “ser” de su “derecho interno” y su “deber ser”; deben explorar su propia sombra en aquello que motiva su sistema regulatorio interno, y deben promover la participación activa de sus estudiantes en el mismo, generando ocasiones para que dialoguen y razonen moralmente.

V. Breve descripción de dos experiencias para el inicio de la carrera

Si perjuicio de la complejidad de la tarea, considero que es posible generar espacios pedagógicos que contribuyan a la maduración ética y que permitan a la facultad, como institución, tomar consciencia de sus propios retos. Quisiera compartir brevemente, para finalizar el trabajo, dos experiencias que, desde mi punto de vista, han dado buenos frutos en la Facultad de Derecho de la PUCP, sin perjuicio de que aún tengan diversas oportunidades de mejora y un largo camino que recorrer.

5.1. Modelos de Abogados

Se trata de un curso obligatorio de primer semestre, inaugurado en el marco del Nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Derecho de la PUCP. Uno de sus objetivos centrales es que los y las estudiantes conozcan cuál es el estado, la importancia y el sentido de la profesión que comienzan a estudiar. Asimismo, se busca que conozcan cuáles son los caminos que se pueden seguir en el Derecho.

Ello se logra en diversas clases, que se estructuran en unidades. En la primera, se plantea a los y las estudiantes la pregunta “por qué derecho” y se trabaja también sobre el estado de la profesión y su importancia en nuestro país. Esto se refuerza luego en casos que se ubican en la unidad “para qué sirve el derecho”. Estos casos muestran asuntos de gran relevancia social en los que existen profesionales del derecho que actúan en diversos ámbitos de ejercicio y que actúan de diversos modos, contribuyendo o afectando negativamente a nuestra sociedad. Algunos de esos casos muestran cómo un buen ejercicio profesional puede tener un gran impacto positivo, al igual que un mal ejercicio un gran impacto negativo.

El trabajo en modelos de abogados está alineado con algunos de los modos de promover la maduración ética. Particularmente, presenta el estado de la profesión y el contraste con su sentido e importancia. Con ello, se pone en el registro de la consciencia la pregunta por el sentido de la propia vida como profesional del derecho, en conjunto con una reflexión crítica respecto a la realidad del mundo en que tendrán que desempeñarse. Asimismo, se sitúa al estudiante ante la pregunta: por qué Derecho. Ello

teniendo en cuenta su historia y cómo llegó a la carrera, lo que permite también poner en el registro de la consciencia la pregunta por el sentido, desde una lógica vocacional, en la propia historia.

5.2. Derecho y Psicología

Derecho & Psicología es un curso optativo de segundo semestre. En este curso se explora, entre otros, nuestro vínculo anímico con las normas y el modo en que pensamos y sentimos dentro de sistemas regulatorios. Una de las ideas que se trabaja, en el horario a mi cargo, es la de “continuidad en los sistemas regulatorios”, esto es, la idea de que nuestras vivencias de la regulación en la familia y en la escuela, dejan huellas que moldean el modo en que actuamos en el sistema regulatorio de la universidad y en las prácticas pre-profesionales. Asimismo, tienen un impacto en el modo de ejercer la profesión y, finalmente, en el funcionamiento del sistema jurídico.

Esta idea se trabaja sobre la base de un marco teórico de psicoanálisis, incluyendo también puntos del desarrollo moral constructivista, de la psicología humanista y del sentido. La idea se trabaja, en parte, invitando a los estudiantes a rememorar vivencia dentro de los sistemas regulatorios de la familia y la escuela, con miras a identificar continuidades con su vivencia dentro de la regulación en la facultad de derecho.

El tratar problemáticas en sus vivencias con las normas dentro de la facultad, ligándolas a experiencias previas y desde un marco teórico psicoanalítico, permite ganar consciencia respecto a cómo actúan dentro del sistema regulatorio en cuestión y por qué piensan y actúan de determinadas maneras.

Referencias

- Bettleheim, B. (2011). No hay padres perfectos. Barcelona: Crítica.
- Bruzzone, D. (2011). Afinar la conciencia. Educación y búsqueda de sentido a partir de Viktor E. Frankl. Buenos Aires: San Pablo.
- Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS). (2004). Plan de Reforma Integral. Recuperado el 20 de junio de: http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/Plan_Nacional_ceriajus.pdf
- Declaración de Facultades de derecho. Por un cambio en la abogacía desde las aulas. Suscrito en la PUCP, en diciembre de 2018.
- Del Mastro, F. (2018). La dimensión desconocida de la regulación. En: Más allá del análisis económico de la regulación. Lima: Regulación Racional, Themis & CIDE.
- Foucault, M. (2014). El coraje de la verdad. El gobierno de sí y de los otros II. Madrid: Akal.
- Fromm, E. (2003). Ética y psicoanálisis. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Frisancho, S. (2004). Entre el sí mismo y los otros. Carácter y comunidad en la pedagogía ignaciana. Lima: UARM.
- Frankl, V. (2011). Psicoterapia y existencialismo. Barcelona: Herder.
- Freud, S. ([1933] 1986). ¿Por qué la guerra? (Einstein y Freud) [1933 [1932]]. En: Obras completas, volumen 22 (pp. 179-198). Buenos Aires: Amorrortu.
- Foucault, M. (2014). El coraje de la verdad. El gobierno de sí y de los otros II. Madrid: Akal.
- Jung, Carl G. ([1946] 2001). La lucha con la sombra. En: Civilización en transición. Obra completa, volumen 10. Madrid: Trotta.
- Marques, E. (2013). Persona, logos y educación en la perspectiva antropológica de Viktor Frankl. Buenos Aires: San Pablo.

May, R. (2000). Amor y voluntad: contra la violencia y la apatía en la sociedad actual. Barcelona: Gedisa.

Miller, A. (1985). Por tu propio bien. Madrid: Tusquets Editores.

Nussbaum, M (2006). El ocultamiento de lo humano. Buenos Aires: Katz.

Presidencia de la República. Oficio de Observación del 20 de febrero de 2019. Puede encontrarse en: <http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2019/03/Oficio-de-observacion.pdf> Pronunciamento de facultades de derecho sobre la Ley de Probidad en la Abogacía, 2019. Recuperado el 20 de junio, de: <http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2019/03/Pronun.-Facultades-de-Derecho-2.pdf>

Reimer, J. (1997). De la discusión moral al gobierno democrático. En: La educación moral según Lawrence Kohlberg (Kohlberg, Power & Higgings, eds.) Bilbao: Desclée de Brouwer.

Schunk H (1997). Teorías del Aprendizaje, México, Pearson

Wild, R (2006). Calidad de vida. Barcelona: Herder.

PARTE II

REGULACIÓN

UNA PROPUESTA DE REFORMA DE LA ABOGACÍA FRENTE A LA CRISIS DEL SISTEMA DE JUSTICIA

EL PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO PARA INCENTIVAR LA PROBIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

Fernando Castañeda Portocarrero (*)

Viceministro de Justicia

CONTENIDO: Introducción. I. El Proyecto de Ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía (Proyecto de Ley N° 3164/2018-PE). II. Las modificaciones realizadas al proyecto de ley: la desnaturalización de la propuesta de reforma. III. Panorama de la práctica de la abogacía y la agenda pendiente. Reflexión final.

Introducción

En julio de 2018 se hizo de conocimiento público diversos audios obtenidos en el marco de una investigación fiscal que involucraba a jueces, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), empresarios y políticos, los cuales de acuerdo con la Sala Plena del Poder Judicial implicarían: «(...) una serie de hechos graves y censurables que lesionarían los deberes judiciales, la independencia de los jueces y la autonomía del Poder Judicial (...)» (Poder Judicial 2018a: 1).

Esta situación provocó la renuncia de los miembros del CNM y, posteriormente, la declaración de emergencia de la mencionada institución (Congreso de la República del Perú 2018a), estableciéndose un proceso de reevaluación y reestructuración. También afectó al Poder Judicial y, según la propia institución, fue «el momento de mayor crisis institucional de los últimos años, registrando una aprobación pública inferior al 5%» (Poder Judicial 2018b:17).

Debido a ello, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial declaró en emergencia el distrito judicial del Callao (Poder Judicial 2018c: p. 1), los órganos administrativos de la Corte Suprema, la Sala Penal Nacional, el Sistema especializado de Delitos de Corrupción de funcionarios, el Consejo Ejecutivo y la Gerencia General del Poder Judicial (Poder Judicial 2018d: 1).

Asimismo, la prensa internacional señaló que esta situación revelaba «los vicios que ahogan su sistema de justicia» (BBC 2019), calificándola como una corrupción sistémica insertada en el Poder Judicial (Washington Post 2018).

* Viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Secretario Técnico del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Abogado por la Universidad Católica del Perú y egresado de la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la misma casa de estudios. Se ha desempeñado como Secretario Técnico de la Comisión Consultiva de la Presidencia de la República denominada Comisión de Reforma del Sistema de Justicia y como Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.

Frente a esta situación, el Presidente de la República propuso la creación de la «Comisión de Reforma del Sistema de Justicia» (en adelante, la Comisión), cuyo objeto era «proponer medidas urgentes y concretas para transformar el Sistema de Justicia a fin de aportar a la construcción de una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e incorruptible» (PCM 2018).

A los doce días de su instalación, la Comisión debía entregar un primer informe con recomendaciones de medidas urgentes y concretas para la reforma del sistema de justicia. En cumplimiento de dicho mandato, el 25 de julio entregó el informe: «Hacia un Sistema de Justicia honesto y eficiente» (Comisión de Reforma del Sistema de Justicia 2018).

El 28 de julio de 2018, el Presidente de la República dirigió el Mensaje a la Nación, y anunció la presentación de proyectos de ley dirigidos a reformar el sistema de justicia, siendo los siguientes:

- Proyecto de Ley N° 3160/2018-PE, que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial.
- Proyecto de Ley N° 3161/2018-PE, que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Ministerio Público
- Proyecto de Ley N° 3162/2018-PE, Ley que modifica los artículos 16 y 28 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo.
- Proyecto de Ley N° 3163/2018-PE, Ley que incorpora el Título VI «Transparencia en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la magistratura, Tribunal Constitucional y Academia de la Magistratura» al T.U.O de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Proyecto de Ley N° 3164/2018-PE, Ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía.
- Proyecto de Ley N° 3165/2018-PE, Ley que crea el Sistema Fiscal Especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos y modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público.
- Proyecto de Ley N° 3159/2018-PE, Ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

En cumplimiento del anuncio presidencial, los citados proyectos de ley fueron presentados el 2 de agosto de 2018 al Congreso de la República. Debe destacarse que, por primera vez, en un Mensaje a la Nación se anunció un proyecto de ley sobre la probidad de la abogacía (en adelante, el proyecto de ley), siendo el objeto del presente artículo analizar el proceso de aprobación del mencionado proyecto normativo.

I. El Proyecto de Ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía (Proyecto de Ley N° 3164/2018-PE)

1.1. El contenido del Proyecto de Ley: las medidas propuestas

La probidad e integridad en la conducta del abogado resultan indispensables para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. En ese sentido, el artículo 1 del proyecto de ley, contempla como objeto de la propuesta normativa: «[...] adoptar un conjunto de medidas con el propósito de cumplir con el fin del ejercicio de la abogacía que comprende la defensa de los derechos de las personas, la consolidación del Estado constitucional de Derecho y la justicia [...]».

Dichas medidas consisten en: establecer el derecho a denunciar la inconducta del abogado (artículo 4), un contenido ético mínimo en los programas de Derecho de pregrado y posgrado (artículo 5), la promoción de la integridad en los programas académicos de la Academia de la Magistratura (artículo 6), la promoción de la integridad en los concursos de méritos y evaluación de jueces y fiscales (artículo 7), y un contenido ético mínimo para la admisión en los colegios de abogados (artículo 10).

Se incluía, principalmente, la función preventiva en materia de ética y responsabilidad profesional (artículo 11), la promoción de la investigación en materia de ética y responsabilidad del abogado (artículo 12), la obligatoriedad para la habilitación profesional para toda forma del ejercicio de la abogacía (artículo 15) y la inclusión de una circunstancia agravante en la parte general del Código Penal, cuando

el sujeto activo –bachiller en derecho o abogado– cometa o participe en la comisión de un delito en el ejercicio de su especialidad o profesión (Disposición Complementaria Única).

1.2. El procedimiento legislativo de aprobación del Proyecto de Ley: Un trámite poco célere

El proyecto de ley fue derivado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, ambas comisiones emitieron dictámenes favorables; sin embargo, incorporaron textos sustitutorios a la propuesta normativa presentada por el Poder Ejecutivo que la desnaturalizaron.

Así, el 29 de enero de 2019, el Texto Sustitutorio propuesto por la Comisión de Justicia fue aprobado por el Pleno del Congreso como «Ley que incentiva la probidad profesional en el Sistema de Justicia» (en adelante, Ley que incentiva la probidad profesional). Cabe señalar que, al ser la Comisión de Justicia la comisión dictaminadora, su dictamen constituyó el texto sobre el cual se discutió en el Pleno.

Es importante resaltar que, pese a que el artículo 105 de la Constitución Política señala que los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia tienen preferencia en el trámite legislativo, transcurrieron más de cinco meses para que el Congreso apruebe el mencionado proyecto de ley.

Días después de su aprobación, la representación nacional remitió la autógrafa al Presidente de la República y, el 20 de febrero de 2019, el Poder Ejecutivo observó la mencionada autógrafa, conforme al artículo 108 de la Constitución Política.¹

Las observaciones, que se abordan más adelante, recayeron sobre los artículos 1, 2, 7 y 8 que regulan el objeto y ámbito de aplicación, el alcance nacional de los códigos de ética de los colegios profesionales, el registro de sanciones por mala práctica profesional, y la circunstancia agravante por la condición del sujeto activo.

Aunado a las observaciones por parte del Poder Ejecutivo, las facultades de Derecho del país coincidieron en señalar que dicha autógrafa resultaba contraria a los esfuerzos por reformar el sistema de justicia. Por ello, manifestaron «extrañeza y firme desacuerdo» con la eliminación de toda referencia al rol ético de las facultades de Derecho, en base a tres razones (Facultad de Derecho de la PUCP 2018: 2)

1. El estado de la formación ética en las facultades de derecho es preocupante.
2. La obligatoriedad de la formación ética en facultades de derecho deriva de un mandato constitucional y no vulnera la autonomía universitaria.
3. La fórmula legal a aprobar debe generar un impacto positivo.

Por otra parte, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas (APMJ) también compartieron el mismo criterio expuesto por las facultades de Derecho, destacando que resulta indispensable «[...] reivindicar, vivir y defender la ética como fundamento central de los derechos humanos y de una sociedad democrática con un sistema de justicia independiente, prestigioso y eficiente» (JUSDEM y APMJ 2019).

De acuerdo con el procedimiento parlamentario, las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo fueron derivadas a la Comisión de Justicia. No obstante, estas fueron desestimadas, y la Comisión aprobó por unanimidad insistir en la Autógrafa aprobada previamente por el Pleno del Congreso (Congreso de la República del Perú 2019).

Cabe señalar que la aprobación del Dictamen en Insistencia por parte de la Comisión de Justicia no fue programada en la agenda del Pleno del Congreso de la República.

¹ Constitución Política del Perú

Artículo 108.- La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro del plazo de quince días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o de la Comisión Permanente, según corresponda.

Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada por el Congreso, las presente a éste en el mencionado término de quince días.

Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

II. Las modificaciones realizadas al proyecto de ley: la desnaturalización de la propuesta de reforma

Para enfrentar la crisis en el sistema de justicia, resulta insuficiente enfocarse, únicamente, en el Poder Judicial y el Ministerio Público, dado que en virtud de la previsión legal que establece la defensa cautiva, los abogados desempeñan un rol fundamental en dicho sistema y deben cumplir con los parámetros éticos y deontológicos que rigen su profesión (García y Ceballos 2019: 168).

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso «Ruano Torres y otros Vs. El Salvador», establece como parámetro que la actuación deficiente de la defensa técnica, a través de sus actuaciones u omisiones a ella imputables, puede generar la responsabilidad internacional del Estado (2015: párr. 168).

En esa misma línea, el Tribunal Constitucional peruano ha exhortado a que, en los diagnósticos sobre la reforma del sistema de justicia, se preste atención al protagonismo de la abogacía (2006: FJ 4). De igual forma, con motivo de la participación de los abogados en procesos previsionales, ha señalado lo siguiente:

«[...] los comportamientos irresponsables y contrarios a la ética profesional de la abogacía resultan doblemente perniciosos. Por un lado, generan frustración y desasosiego [...] y por otro, abarrotan los despachos judiciales, distrayendo la atención que merecen los casos que realmente requieren actuación inmediata y oportuna [...]» (2010a: FJ 27)

Asimismo, los distintos proyectos de reforma del sistema de justicia han puesto especial énfasis en el rol que desempeñan los abogados. Así, en el 2001, el Consejo Transitorio del Poder Judicial estimó que algunos abogados formarían parte de los círculos de corrupción que pueden crearse alrededor de las instituciones del sistema de justicia (2001: 73).

Por su parte, la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus), en el eje referido a los recursos humanos, señaló que era necesario mejorar la calidad profesional y moral de los operadores de justicia a través de la revisión de los planes de estudios de pregrado y posgrado. Sobre este último aspecto propuso incluir el curso de ética profesional con carácter obligatorio (2004: 38).

En esa misma línea, la propuesta planteada a través del proyecto de ley apuntó a realizar una reforma del ejercicio de la abogacía con un especial énfasis en la práctica ética de la profesión; sin embargo, dicho enfoque se vio desnaturalizado, debido a diversos cambios que este sufrió en el trámite legislativo. A continuación, se desarrollarán las principales modificaciones realizadas al proyecto de ley.

2.1. Primera modificación: el ámbito de aplicación del Proyecto de Ley

El proyecto de ley planteó como objeto «[...] adoptar un conjunto de medidas con el propósito de cumplir con el fin del ejercicio de la abogacía [...]» (Poder Ejecutivo 2018:3). Sin embargo, la Comisión de Justicia amplió dicho ámbito de aplicación, extendiéndolo a otros profesionales que intervienen en el sistema de justicia, sin realizar algún tipo de referencia específica a la abogacía en la formula normativa.

Entre los argumentos esgrimidos en el Dictamen de la Comisión de Justicia para realizar dicha ampliación, se señala que en el ámbito judicial siempre se requiere la intervención de terceros, por ejemplo los peritos, los cuales pueden ser psicólogos, médicos, arquitectos, economistas, contadores, ingenieros, entre otros profesionales; asimismo para reforzar esta conclusión en el Dictamen se indica que «el rol ético y social debe ser inherente a la formación profesional de todas las profesiones y no exclusivamente a la del abogado» (Congreso de la República del Perú 2019:10).

En una posición similar, recogida por el mencionado dictamen, los representantes del Colegio de Abogados de Lima señalaron lo siguiente:

«[El Proyecto de Ley N° 3164/2018] [...] no promueve la probidad y no contiene medidas concretas que puedan servir para eliminar las malas prácticas en el ejercicio de la profesión; por lo que estigmatiza a la profesión de la abogacía como sinónimo de corrupción» [El énfasis es nuestro]. (2019:11)

Al respecto, es importante indicar que la reforma planteada en el proyecto de ley, no fue propuesta para «estigmatizar» a los abogados, sino para responder al menoscabo del ejercicio de la abogacía realizado por algunos de sus miembros y reevaluar las funciones ejercidas por los gremios profesionales para devolver la confianza a la ciudadanía en el ejercicio profesional de la abogacía.

Asimismo, corresponde señalar que la más reciente crisis de los denominados «CNM audios» tuvo como actores principales a abogados que, con ocasión del ejercicio de sus funciones como jueces y fiscales, habrían incurrido en gravísimas irregularidades.

Al observar esta realidad surge la necesidad de incidir de forma específica sobre la abogacía, puesto que los abogados adquieren un papel protagónico en el funcionamiento del sistema de justicia peruano en la medida que representan a los justiciables y ejercen la defensa cautiva.

Afirmar la necesidad de una intervención especialmente diseñada para abogados en su desempeño en el sistema de justicia no supone desconocer que profesionales de otras carreras pueden incurrir en irregularidades que ameriten la imposición de sanciones administrativas, disciplinarias o penales, sino que conlleva reconocer la urgencia de una reforma de la abogacía como profesión profundamente vinculada a la administración de justicia y el Estado de derecho.

Por tanto, extender el objeto del proyecto de ley a otras profesiones desatiende las particularidades propias del ejercicio de la abogacía en el contexto de la actual crisis del sistema de justicia, afectando con ello la efectividad de una reforma integral y especializada.

2.2. Segunda modificación: exclusión de contenidos mínimos de ética en los programas de pregrado y posgrado de Derecho en universidades y en los programas de la Academia de la Magistratura

El Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo propuso que los planes de estudios de los programas de derecho de pregrado y posgrado incluyan, de manera específica y transversal, contenidos referidos a la ética y responsabilidad profesional del abogado.

También estableció que las facultades y escuelas de posgrado que dicten programas de Derecho deben contar con un comité, oficina o responsable encargado de promover y difundir al interior de estas los valores, principios, normas y buenas prácticas del ejercicio responsable de la profesión.

Debe tenerse en cuenta que la propuesta no sólo exigía la incorporación de estos temas en la enseñanza; sino que además establecía que las universidades cuenten con un comité, oficina o responsable encargado de promover y difundir al interior de estas los valores, principios, normas y buenas prácticas del ejercicio responsable de la profesión.

Es decir, se busca dotar a las universidades de un espacio en el cual puedan identificar mejoras en sus procesos de enseñanza de ética, tomando en cuenta su experiencia propia.

Además, en cuanto a la formación de magistrados, el proyecto de ley propuso que la Academia de la Magistratura (en adelante, AMAG) incluya, en todos sus programas académicos, contenidos referidos al ejercicio de la potestad sancionadora de los jueces para desincentivar la inconducta profesional y promover la integridad.

Pese a que las medidas propuestas se encuentran encaminadas a mejorar el aspecto ético en el ejercicio de la abogacía; estas no fueron acogidas por las Comisiones del Congreso. En efecto, en los dictámenes de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Educación se observa que el argumento central para omitir la inclusión de contenidos éticos y de responsabilidad profesional en los programas de derecho de las universidades es que se atentaría contra la autonomía universitaria regulada en el artículo 18 de la Constitución.

De acuerdo con lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el ámbito de las ciencias, la formación ética es un aspecto transversal a todo el proceso educativo e incluso en la práctica misma de la profesión. Asimismo, dicho organismo internacional ha recomendado que las universidades establezcan la enseñanza de cursos de ética elemental para todos los estudiantes y cursos de ética especializados para estudiantes de doctorado (2003: 15).

Es decir, no solo basta el desempeño del abogado en el ámbito de su formación ética individual, adicionalmente se requiere la capacidad de enfrentar los dilemas éticos que se presentan en el ejercicio de su profesión. Así, conforme lo señala Cortina «la ética individual hoy nos parece insuficiente para resolver los problemas de nuestra convivencia, y que también el derecho ha mostrado sus límites: las éticas aplicadas a los distintos campos devienen una necesidad social» (1996: 120).

En el caso específico de la enseñanza a nivel superior en Derecho, se debe tomar en consideración las diferentes áreas en las que se ejerce la profesión y la especificidad en cada una de ellas. De este modo, resulta indispensable que las universidades enseñen, por ejemplo, qué es el secreto profesional, cuál es su contenido, si existen o no excepciones y cómo estas deben ser aplicadas.

Además de ello, la enseñanza de la ética también implica un análisis de las propias prácticas en la enseñanza y ejercicio de la abogacía. El profesor Del Mastro ha desarrollado la idea del «currículo oculto», el cual estaría conformado por «mensajes no reconocidos e inadvertidos dentro de la enseñanza del derecho» (Del Mastro 2018: 446).

Esta idea claramente puede ser identificada en la literatura existente respecto a la práctica de la abogacía. Por ejemplo, Pásara identifica este aspecto cuando en el desarrollo de una investigación sobre la materia, asiste a presenciar las clases en distintas escuelas y facultades de Derecho. Así, señala: «Un aspecto de particular interés en la observación de clases fue el referido a asuntos de ética profesional. Hubo varios casos en los cuales el profesor enseñaba a sus alumnos cómo circunvalar la ley» (2004: 42).

El mencionado autor señala que presenció casos en los cuales el profesor enseñaba a los estudiantes a cómo evitar un embargo, apelar una resolución señalando que la otra parte se había coludido, sin contar con ninguna prueba; o recibir primero los honorarios para «poder pensar mejor», entre otros.

Un argumento adicional, que se encuentra en los dictámenes del Proyecto de Ley, consideró que la obligatoriedad de la inclusión de los contenidos éticos era innecesaria debido a que muchas de las universidades licenciadas cuentan con cursos referidos a ética y/o responsabilidad profesional (Congreso de la República 2018b: 10). En el mismo sentido, se menciona que los programas que ofrece la AMAG también incluyen cursos de ética.

Sin embargo, no se reparó en que el licenciamiento que se viene otorgando a las universidades tiene naturaleza institucional, no supone el licenciamiento del programa de estudio de manera específica. Asimismo, los cursos de ética que imparten, no necesariamente se encuentran referidos a su aplicación en el ejercicio de la abogacía.

Del mismo modo, y conforme a la regulación vigente, no hay seguridad sobre si las universidades que actualmente incluyen cursos de ética en sus planes de estudio podrían retirarlos de su malla curricular. Tampoco existe ningún tipo de incentivo para que las universidades que actualmente no han incluido dichos cursos, los incluyan.

En el caso particular de la AMAG y la enseñanza de ética, el proyecto de ley buscaba que sus programas, tanto para aspirantes como para magistrados, cuenten de manera específica con contenidos sobre cómo se ejerce la potestad sancionadora de los jueces respecto a la conducta de los abogados en el desarrollo del proceso. Ello con el objetivo de que los jueces puedan ejercer eficiente y eficazmente dicha facultad, garantizando la correcta conducción del proceso.

Es relevante manifestar que consideramos beneficioso que los Programas de Formación de Aspirantes y el Programa de Capacitación para el Ascenso cuenten con cursos de ética especializados para jueces y fiscales; sin embargo, ello aún no se incorpora en el Programa de Actualización y Perfeccionamiento. Por lo que la propuesta normativa presentada al Congreso de la República hubiera resultado favorable para la mejora en la formación continua de jueces y fiscales (Academia de la Magistratura: 2019).

En cuanto a la presunta vulneración a la autonomía universitaria al exigir la enseñanza de contenidos éticos en los programas de pregrado y posgrado de derecho, de acuerdo con el numeral 8.3) del artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, implica la potestad autodeterminativa de cada universidad para fijar el marco del proceso de enseñanza. Ello supone, entre otras cosas, el señalamiento de planes de estudio y de programas de investigación.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que la autonomía universitaria no puede ser entendida como autarquía, de este modo «[...] ninguna universidad se encuentra exenta de un proceso de evaluación riguroso [...], ni tampoco de [...] adoptar las medidas que le sean impuestas por los órga-

nos del Estado competentes para elevar su nivel educativo.» (2010b: FJ 180).

Por ello, la propuesta normativa no atenta contra la autonomía universitaria; sino que guarda relación con el marco constitucional y legal vigente. Asimismo, responde a la necesidad de asegurar que los principales actores del sistema de justicia sean formados de manera integral y sin perder de vista la relevancia de su labor en la consolidación de nuestra democracia.

2.3. Circunstancia agravante para los sujetos activos que sean bachilleres en derecho o abogados y cometan o participen en la comisión de delitos en el ejercicio de su especialidad o profesión

El Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo propuso el siguiente texto modificatorio en el quinto párrafo del artículo 46-A del Código Penal:

«Artículo 46-A:

(...)

Constituye circunstancia agravante que el sujeto activo sea bachiller en derecho o abogado y cometa o participe en la comisión del delito en el ejercicio de su especialidad o profesión.

(...)»

Conforme se establece en el derecho penal, las circunstancias agravantes son valoradas por el juez al momento de determinar un incremento de la pena. En ese sentido, el artículo 46-A del Código Penal contempla como circunstancias agravantes que el inculcado sea autoridad, funcionario o servidor público, o se trate de un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.

Como se puede identificar, se trata de agentes que, por su especial condición, tienen un deber reforzado de respetar y garantizar las normas. Bajo el mismo criterio, la inclusión de los abogados en este grupo resulta relevante, dado el deber especial de lealtad hacia el ordenamiento jurídico. Sin embargo, el texto aprobado por la Comisión de Justicia amplió el ámbito de aplicación a todos los profesionales que participan directa o indirectamente en el Sistema de Justicia, modificando la propuesta en el siguiente sentido:

«Artículo 46-A.- Circunstancia agravante por condición del sujeto activo

(...)

Constituye circunstancia agravante cuando el sujeto activo cometa o participe en la comisión del delito en el ejercicio de su especialidad o profesión, de manera directa o indirecta en el sistema nacional de justicia.»

Como se puede advertir de la lectura del texto aprobado, no se precisa cuál sería la especialidad o profesión del inculcado. Asimismo, tampoco resulta claro cuándo un profesional podría encontrarse en relación directa o indirecta con el Sistema de Justicia. Por ello, al no ser posible establecer los fundamentos que sustentan la circunstancia agravante, el texto aprobado afecta el principio de legalidad².

2.4. La promoción de la integridad en los concursos de méritos y evaluación de jueces y fiscales

El proyecto de ley también contemplaba establecer incentivos para que los jueces y fiscales promuevan la integridad y las buenas prácticas en el ejercicio profesional del abogado. Cabe señalar que uno de los estudios más importantes sobre el ejercicio de la abogacía señalaba que «la indisciplina de algunos abogados en juicio lamentablemente no ha sido un evento infrecuente» (Súmar 1997: 109).

Así, se indica que el empleo de conductas injuriosas en los escritos o actuaciones judiciales es un recurso que se emplea para la justificación del honorario, la intimidación del adversario, el ocultamiento de la falta de preparación técnica, o la confusión entre aptitud técnica y vociferio (Súmar 1997: 109).

² Código Penal. Título Preliminar. Artículo II.- Principio de Legalidad: Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella.

De acuerdo con el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ), los jueces tienen como función sancionar a los abogados que formulen pedidos maliciosos o manifiestamente ilegales o falseen a sabiendas la verdad de los hechos.

Incluso, el Tribunal Constitucional, en un caso relativo a la protección de los derechos de los pensionistas, exhortó a los jueces del Poder Judicial a que «ejerczan sus potestades disciplinarias, reprimiendo la mala fe y la temeridad procesal en el marco de sus atribuciones conforme a las normas procesales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial» (2010a: F.J. 37).

Asimismo, la Defensoría del Pueblo en el estudio respecto al empleo del proceso de amparo en el Distrito Judicial de Lima (2015: 95) enumeró un conjunto de estrategias dilatorias empleadas por abogados:

- i. La deducción de excepciones procesales evidentemente infundadas
- ii. La presentación de recursos de apelación con la sola intención de prolongar el proceso
- iii. La solicitud reiterada de aplazamiento en la ejecución de sentencias firmes y la presentación de escritos de aclaración de sentencias cuando ello no es necesario
- iv. La presentación de escritos solicitando que la sentencia ya notificada sea dirigida al titular de la entidad, entre otros.

Por su parte, el Consejo Nacional de la Competitividad, elaboró un informe respecto a las prácticas dilatorias en procesos comerciales en juzgados de paz letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima, concluyendo que, de un total de 112 expedientes analizados, 45 expedientes contienen actos dilatorios por parte de los abogados (prácticas dilatorias y mala praxis) (Ascendant Group 2016:12).

Sin embargo, la Comisión de Justicia señaló lo siguiente:

«Sobre la disposición que establece que el Consejo Nacional de la Magistratura deberá considerar en la evaluación del postulante que este haya contribuido con la promoción de la integridad y las buenas prácticas en el ejercicio profesional del abogado, consideramos que este aspecto forma parte de la evaluación personal en el concurso de méritos o en la revisión de antecedentes que se efectúa en los procesos de nombramiento o ratificación de jueces y fiscales» .(Congreso de la República del Perú 2018b: 11).

Así, pese a la evidencia mostrada y a advertir que a la fecha no se evalúa este aspecto al momento de determinar la ratificación de jueces, se decidió retirar este componente de los dictámenes de las Comisiones del Congreso.

2.5. Promoción de la investigación en materia de ética y responsabilidad del abogado

El Proyecto de Ley estableció como obligación de los colegios de abogados facilitar el acceso público a información sobre los distintos aspectos referidos al ejercicio de la abogacía, ello con el objetivo de fomentar la investigación por parte de universidades, centros de investigación u otras entidades o personas interesadas. Pese a los argumentos descritos, la Comisión de Justicia eliminó el artículo 13 de la propuesta normativa remitida sin brindar ninguna justificación sobre el particular.

Al respecto, la información que los colegios de abogados cuentan sobre sus afiliados se limita a los datos personales o su condición de hábil o no para ejercer la abogacía. Así, conforme lo señala una investigación sobre este asunto: «[...] Ningún ciudadano u otro abogado puede pedir el legajo de un colega, por lo que se asume un costo excesivo al elegir un abogado sin la suficiente información» (Súmar 1997: 108).

Sobre la naturaleza del Colegio de Abogados es pertinente mencionar que, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución, los Colegios Profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público, siendo, además, que se encuentran obligados al cumplimiento de las leyes, sin que ello limite su autonomía.

Asimismo, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional (2009: FJ 4) y del Poder Judicial (012: 36), los colegios profesionales ejercen función administrativa en todas sus actividades, y no únicamente en el ámbito disciplinario, por lo que se encuentran vinculados a las disposiciones del TUO de la Ley 27444 y sus normas modificatorias, así como el TUO de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De este modo, en tanto el Colegio de Abogados es un sujeto obligado a brindar información pública; la propuesta realizada en el Proyecto de Ley no afecta su autonomía; sino que guarda concordancia con el marco constitucional y legal vigente.

Así, incentivar la investigación sobre cómo se ejerce la abogacía en nuestro país es fundamental para conocer a profundidad las dificultades y los retos que enfrenta la profesión en el contexto actual. Sin lugar a duda, uno de estos retos es el cumplimiento de normas éticas en el ejercicio de la abogacía, por ello, es necesario conocer de forma cualitativa y cuantitativa sus implicancias.

Finalmente, los resultados de investigaciones sobre el ejercicio de la abogacía resultarían de suma utilidad para la implementación de políticas públicas y para que los actores involucrados, como los Colegios de Abogados puedan realizar una autocrítica sobre cómo vienen ejerciendo y promoviendo el control ético de la profesión, así como para tomar las medidas correctivas correspondientes.

2.6. El Registro de sanciones por mala práctica profesional

Actualmente, se encuentra vigente el Decreto Legislativo 1265, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 002-2017-JUS, ambos instrumentos normativos regulan el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional, en el cual se inscriben a los abogados que, en el ejercicio de su profesión o cargo público, son objeto de sanciones por malas prácticas profesionales.

Entre las sanciones que se inscriben se contempla la multa, la suspensión temporal en el ejercicio de la profesión y/o función o cargo, la separación temporal del Colegio al que pertenece el abogado, destitución de un puesto o cargo, expulsión definitiva del Colegio Profesional e inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

Sin embargo, en el Dictamen de la Comisión de Justicia se propone la creación de un nuevo registro: el «Registro de sanciones por mala práctica profesional», al cual se deberá comunicar las exhortaciones o llamadas de atención de manera reiterada sobre el incumplimiento del principio de probidad impuestas a abogados.

Conforme se advierte, con un nuevo registro con una competencia similar, se generaría duplicidad, creándose incentivos para imponer únicamente exhortaciones o llamadas de atención reiteradas, excluyéndose otras sanciones tales como multa, suspensión, inhabilitación y destitución.

III. Panorama de la práctica de la abogacía y la agenda pendiente

El Código de Ética del Abogado aprobado por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, establece en su artículo 3 que el ejercicio de la abogacía tiene como objetivo defender los derechos de las personas y consolidar el Estado de Derecho. Asimismo, señala que para lograr el adecuado funcionamiento del sistema de justicia es necesario que los abogados desarrollen su ejercicio profesional con probidad e integridad, cualquiera fuere el ámbito en el que se desempeñen.

Hay que resaltar que los abogados son quienes ejercen los roles con mayor impacto en el sistema de administración de justicia. Son los abogados privados, defensores públicos y procuradores públicos quienes accionan y defienden los derechos de sus representados en el sistema de justicia. Asimismo, conviene recordar que los jueces y fiscales, quienes impulsan y deciden la administración de justicia, también son abogados.

El protagonismo y la trascendencia de la labor del profesional del Derecho en la administración de justicia es innegable. De ahí que, si estos no son íntegros ni probos en su ejercicio profesional y se desvinculan de lo constitucionalmente establecido, podrían dar lugar a que se genere un espacio para la corrupción, la impunidad y la injusticia.

La experiencia comparada demuestra que estas medidas no se realizan para «estigmatizar» a los abogados, como señalamos anteriormente, sino para devolver la confianza a la ciudadanía en el sistema jurídico a través de medidas que eviten que los hechos provocados por un grupo reducido de sus miembros vuelvan a ocurrir. En esta tarea, los colegios de abogados tienen un importante rol y las medidas de reforma deben de ser planteadas conforme lo han hecho otras entidades, tales como el Poder Judicial, el entonces CNM (actualmente Junta Nacional de Justicia) y el Ministerio Público.

En el marco de la reforma del sistema de justicia se han dado pasos importantes al establecer un nuevo sistema de control disciplinario en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, resultando clave que los colegios de abogados reflexionen sobre cómo mejorar sus funciones a fin de que los casos que mellan la confianza en el ejercicio de la abogacía puedan evitarse o, en caso de producirse, sean sancionados como corresponde.

Reflexión final

La responsabilidad profesional de los abogados y su desempeño ético resultan ser un aspecto medular en la reforma del sistema de justicia. Sin embargo, sobre la base de las consideraciones expuestas, se advierte que los dictámenes recaídos en el Proyecto de Ley 3164/2018-PE, Ley para incentivar la probidad en la abogacía, desnaturalizaron la propuesta del Poder Ejecutivo.

Los hechos que han sido públicamente conocidos por la ciudadanía evidencian la necesidad de regular y de generar las condiciones adecuadas en las que se ejerce la abogacía, tanto para el sector privado como en el sector público, este es un presupuesto imprescindible para que nuestro sistema de justicia sea eficaz, transparente, eficiente e incorruptible.

La propuesta presentada por el Ejecutivo no fue aceptada por el Congreso de la República, no obstante, las escuelas y facultades de Derecho, así como todas las entidades que forman parte del sistema de justicia, tienen el reto de adoptar las medidas necesarias para promover el ejercicio ético de la abogacía. Porque solo teniendo abogados éticos tendremos una mejor justicia.

Referencias

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (2019) "Plan Académico. Consulta: 26 de agosto de 2019".
<https://sistemas.amag.edu.pe/TransparenciaNueva/Resoluciones/2019/RCD/RCD0012019.pdf>

ASCENDANT GROUP (2016). Estudio de Prácticas Dilatorias en Procesos comerciales en juzgados de paz letrados. Consultoría solicitada por el Consejo Nacional de la Competitividad. Lima: [s/e]. 2016.

ASOCIACIÓN DE JUECES PARA LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA (JUSDEM) Y LA ASOCIACIÓN PERUANA DE MUJERES JUEZAS (APMJ) (2019). "El Presidente de la República debe observar el Proyecto de Ley de Probidad en la Abogacía aprobada por el congreso: JUSDEM y la APMJ saludan, respaldan y se adhieren al pronunciamiento de las Facultades de Derecho". Fecha: 2 de enero de 2019. <http://www.jusdem.org.pe/pronunciamentos/PRONUNCIAMIENTO%20N172019.pdf>

BBC MUNDO (2018). Perú: las conversaciones privadas de unos jueces que causaron la caída del presidente del Poder Judicial, Duhalde Rodríguez. Fecha: 19 de julio de 2018.
<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44830508>

COMISIÓN DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA (2018). "Informe Hacia un Sistema de Justicia honesto y eficiente".
https://www.presidencia.gob.pe/docs/informes/INFORME_COMISION_CONSULTIVA.pdf

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (CERIAJUS) (2004). Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de justicia. Fecha: 23 de abril de 2004. http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/Plan_Nacional_ceriajus.pdf

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (2018a). Ley N° 30833. Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su ley orgánica. Lima, 28 de julio. <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-declara-en-situacion-de-emergencia-el-consejo-nacion-ley-n-30833-1674960-1/>

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (2018b). Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República del Perú. Dictamen aprobado por mayoría, recaído en el Proyecto de Ley 3164/2018-PE, que propone mediante texto sustitutorio la Ley que incentiva la probidad profesional en el sistema de justicia.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2019). Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Dictamen en insistencia aprobado por unanimidad recaído en las observaciones formuladas por el Presidente de la República a la Autógrafa de Ley que incentiva la probidad profesional en el Sistema de Justicia. Fecha: 21 en mayo de 2019.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de octubre de 2015. Serie C Número 303.

CORTINA, Adela (1996). "El estatuto de la ética aplicada. Hermenéutica crítica de las actividades humanas". En: Isegoría N° 13.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2015). Estudio del proceso de amparo en el Distrito Judicial de Lima: fortaleciendo la justicia constitucional. Lima: Defensoría del Pueblo. 2015.

DEL MASTRO, Fernando (2018). "Venga a nosotros tu reino: la justicia como fuerza anímica ausente en la enseñanza del derecho". Revista Derecho PUCP, N° 81, 2018. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/20444/20359>

FACULTAD DE DERECHO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ y otras (2019). "Pronunciamiento de Facultades de Derecho: El Presidente de la República debe observar la Ley de Probidad en la Abogacía aprobada por el Congreso". <http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/wpcontent/uploads/2019/01/facultadespdf1.pdf>

GARCÍA VILLEGAS, Mauricio y CEBALLOS BEDOYA, María (2019). "Abogados sin reglas. Los profesionales del Derecho en Colombia: mucho mercado y poco Estado". Bogotá: Ariel Colombia. 2019.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) (2003). Informe del Grupo de Trabajo sobre la Enseñanza de la Ética de la Comisión Mundial sobre la Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST), París, 26 de enero de 2003.

PÁSARA, Luis (2004). La enseñanza del derecho en el Perú: su impacto sobre la administración de justicia. Lima: [s/e]. año 2004.

PODER JUDICIAL DEL PERÚ (2001). Consejo Transitorio del Poder Judicial. Informe Final: Planificación de Políticas de Moralización, Eficacia y Anticorrupción. Lima: Poder Judicial. Año 2001.

PODER JUDICIAL DEL PERÚ (2012). Resolución N° 6 del 26 de setiembre de 2012. Quinto Juzgado Transitorio Contenciosos Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Fundamentos 7, 8, 9, 10, 13. Fecha: 14 de mayo de 2013. Citado en: Resolución N° 0116-2018/SEL-INDECOPI del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas.

PODER JUDICIAL DEL PERÚ (2018a). "Comunicado Oficial de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República". Fecha: 9 de julio de 2018. https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2018/cs_n-comunicado-sala-plena-10072018

PODER JUDICIAL DEL PERÚ (2018b). Memoria Institucional del Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga. Gestión: 25 de julio – 31 de diciembre 2018. Lima, Fondo Editorial del Poder Judicial. <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/63218800498af733ac-b0eea6217c40f1/Memoria%2Binstitucional%2BDr.%2BPrado%2BSaldarriaga%2B%28julio%2B-%2Bdiciembre%2B2018%29.pdf?MOD=AJPERES>

PODER JUDICIAL DEL PERÚ (2018c). Resolución Administrativa N° 199-2018-CE-PJ. Lima, 10 de julio.

PODER JUDICIAL DEL PERÚ (2018d). Resolución Administrativa N° 203-2018-CE-PJ. Lima 16 de julio.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (2018). Resolución Suprema N° 142-2018-PCM que crea la Comisión Consultiva denominada "Comisión de Reforma del Sistema de Justicia", dependiente de la Presidencia de la República. Fecha: 12 de julio de 2018.

SÚMAR, Paul (1997). "El Cuerpo de la Toga. Datos y Apuntes para el estudio de abogados y abogacía". Lima: Asesores Empresariales. Año 1997.

THE WASHINGTON POST (2018). Leaked calls reveal systemic corruption in Peru's judiciary, sparking flurry of resignations. Fecha: 20 de julio de 2018. <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/07/20/leaked-calls-reveal-systemic-corruption-in-perus-judiciary-sparking-flurry-of-resignations/?noredirect=on>

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ (2005). Expediente N° 8094-2005-PA/TC. Sentencia: 28 de octubre de 2006.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ (2010a). Expediente N° 05561-2007-PA/TC. Sentencia: 24 de marzo de 2010.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ (2009). Expediente N° 05691-2008-PA/TC. Resolución: 5 de junio de 2009.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ (2010). Expediente N° 00017-2008-AI. Sentencia: 15 de junio de 2010.

EL FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA JURÍDICA EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Alex Rueda Borrero(*)

Director General de Justicia y Libertad Religiosa(**)

CONTENIDO: Introducción. I. Etapa preventiva: el énfasis de la ética en el Programa SECIGRA DERECHO. II. Etapa de seguimiento del ejercicio profesional: el fortalecimiento de la práctica jurídica a través del Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional (RNAS). Reflexión final.

Introducción

Hoy en día podemos apreciar las consecuencias de desentender los fundamentos teóricos de la ética con la práctica jurídica. Estudiarlos como fenómenos separados y asumirlos con distanciamiento ha normalizado situaciones reñidas con la probidad, generando un manto de desconfianza sobre la carrera de Derecho. Siendo que es un fenómeno global, corresponde asumir su solución en conjunto, de forma tal que el Estado, a través de sus instituciones, se encuentre en la capacidad de promover acciones concretas para prevenir este tipo de conductas y realizar el seguimiento del ejercicio profesional.

Para ello, resulta necesario comprender de qué forma se pervierte el ejercicio de la profesión. Vaz Ferreira, por ejemplo, señalaba que la inmoralidad de la profesión puede apreciarse a través de diversas situaciones que comienzan desde la enseñanza (Atienza, p. 5). Esto empieza, a su criterio, una vez que se permite al abogado salirse de la moral absoluta y defender a su cliente como mejor pueda. Otra circunstancia podría darse frente al excesivo formalismo jurídico, esa tendencia exagerada a dar importancia a las cuestiones de la palabra, al contentarse completamente con la razón legal, al no tener en cuenta el propósito valioso de las normas (Atienza, p. 7).

Por estar expuestos a situaciones como estas, Manuel Atienza precisa que, en la actualidad, la ética aplicada ha adquirido una gran importancia. Hay diversas razones que explican esta orientación: (i) una es el pragmatismo: importa que las cosas funcionen, que sirvan para algo, que resuelvan los problemas y la ética no se libra de esa exigencia; (ii) otra es la complejidad creciente de las profesiones, que afecta no solamente a cuestiones técnicas sino también éticas, y es que el ejercicio de una profesión implica el manejo de conocimientos de tipo instrumental pero también de criterios sobre la justificación o no de los fines y de los medios para alcanzarla: la técnica no se basta a sí misma; y (iii) la última tiene que ver con el poco conocimiento de la complejidad de la sociedad contemporánea y el cambio acelerado que estamos viviendo: parecería que hemos olvidado qué significa ser un buen médico, un buen profesor o un buen juez (Atienza 2003, p. 43-46).

Ante este fenómeno, lo que corresponde es reeducar en la práctica jurídica y fortalecer los valores y principios que la emergieron, como la justicia, la paz social, la equidad. Y para ello se requiere de un trabajo conjunto entre la academia y las instituciones públicas y privadas. Sobre lo último, la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa, a través de su Dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica, busca promover y fortalecer la buena práctica, desde su etapa formativa con los secigristas, hasta el ejercicio profesional mediante la transparencia de sanciones impuestas, a través del Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional. En dichos ámbitos y a la luz de las competencias conferidas, se realiza un seguimiento de la aplicación práctica del Derecho y se coordina con las instituciones intervinientes en estos procesos, para sumar esfuerzos en la ética y la probidad de la profesión.

A continuación, se presentará un repaso de las acciones tomadas en la presente gestión con la finalidad de repotenciar la ética desde la etapa preventiva y formativa, hasta la de seguimiento al ejercicio profesional.

* Director General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Abogado por la Universidad Nacional de Piura. Master en Derecho, con mención en Derecho Penal y Procesal Penal, por la Universidad de Piura; y Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá.

** El presente artículo fue elaborado con la colaboración de Sandra Miranda De Paz, Ana Lucía Puente Rugel y Pamelhy Valle Chacaltana. Fue actualizado hasta el 15 de noviembre de 2019.

I. Etapa preventiva: el énfasis de la ética en el Programa SECIGRA DERECHO

Los últimos años de la carrera de Derecho están destinados a las prácticas preprofesionales y a la sustentación correspondiente para la obtención del título profesional. En la mayoría de casos, nos encontramos frente a estudiantes que tienen definida su especialización, sea en el derecho público o en el derecho privado. En ese escenario, se publica el Decreto Ley N° 26113, que crea el Servicio Civil de Graduandos (Programa SECIGRA DERECHO)¹, el cual se encuentra diseñado para que las y los estudiantes con mejor rendimiento académico puedan desarrollar su actividad preprofesional en la administración pública y se inclinen en realizar una carrera en el Estado como servidores y funcionarios públicos.

El objetivo principal es que cuenten con herramientas para complementar su proceso formativo, consolidando los aprendizajes y mejorando sus capacidades y competencias. Además, al tener contacto con los diversos temas vinculados al Derecho Público, las y los estudiantes llegan a sensibilizarse sobre el rol instrumental de la carrera en la sociedad y de la contribución de ésta en la garantía de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.

Cerca de cumplir 27 años de creación del Programa SECIGRA DERECHO, se ha podido constatar el gran aporte académico que brindan nuestros secigristas a las diferentes instituciones del Estado, pues no solo llegan con grandes expectativas sino también con conocimientos actualizados sobre jurisprudencia y doctrina, lo cual redundará en beneficio de la labor diaria de las unidades receptoras en las que prestan el servicio. En ese sentido, se han ido incorporando una serie de beneficios a quienes cursan el Programa; por ejemplo, se convalida el Secigra con un año de prácticas preprofesionales para la obtención de la licenciatura en Derecho, así también, se brinda un bono de reconocimiento por prestar servicios en el Estado, capacitaciones permanentes y facilidades en su periodo de exámenes.

La Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa, y su Dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica, se encargan del desarrollo del Programa. En efecto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) es el órgano rector en la materia, pues no solo ejerce la representación del programa, sino que organiza su acceso y ejecución, formula y propone políticas y supervisa la ejecución del Plan de Capacitación y Aprendizaje Jurídico. No obstante, somos conscientes que el perfil del abogado o abogada que requiere el Estado (y la sociedad) no es solo aquel o aquella que tiene un buen conocimiento sobre las normas y su interpretación. En realidad, se requiere de profesionales –por encima de todo– éticos, que puedan contrarrestar con sus actos, ese imaginario colectivo de que esta profesión es intrínsecamente inmoral.

En este proceso de identificación de conductas antiéticas estamos inmersos todos los profesionales del Derecho, más allá del vínculo generacional. Sin duda, tenemos que desaprender en conjunto, pues, lamentablemente, ha sido la propia práctica jurídica y varios malos ejemplos, los que nos han hecho normalizar situaciones irregulares y disimular su ejercicio. Del mismo modo ha contribuido la falsa narrativa del éxito profesional, un éxito que no conoce de límites respecto a los métodos para lograrlo, por ejemplo, el utilizar estrategias de todo tipo para ganar un juicio, o impulsar normas que favorecen a cierto grupo poblacional en función a intereses ocultos, entre otros.

En la medida que estas prácticas se aprenden desde la universidad y se consolidan en la vida profesional, como Poder Ejecutivo no podemos distanciarnos de esta problemática, sino que, por el contrario, es nuestro deber sumergirnos en ella y realizar las acciones correctivas que sean necesarias para prevenir que sigan siendo parte del ejercicio «regular» de la profesión. Resulta trascendente, entonces, profundizar en la forma de aproximación y los contenidos en ética e integridad que se brindan a las y los secigristas. Además, se debe aprovechar que se encuentran en el proceso de transición de las aulas

¹ Normas legales relacionadas al Programa SECIGRA DERECHO:

Ley N° 27687, Ley que otorga el carácter facultativo al SECIGRA DERECHO y modifica los artículos del Decreto Ley N° 26113

Decreto Supremo N° 009-2014-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley de SECIGRA DERECHO

Decreto Supremo N° 001-2018-JUS, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley de SECIGRA DERECHO.

universitarias a las instituciones públicas; siendo justamente en este espacio en que las lecciones teóricas deben pulirse con una correcta aplicación práctica.

Esta tarea viene perfeccionándose cada año, sea mediante la identificación de estas conductas o en la capacitación de secigristas y/o unidades receptoras. Pero es innegable que los casos de corrupción de los últimos tiempos han reactivado el debate sobre la ética, que además de necesario, es urgente. Entonces, surge el reto de desmarcarse de las conductas delictivas, pero también el de identificar que, así como existen este tipo de actos, abiertamente ilegales, puede haber otros más nocivos por su nivel de normalización. Por ello, las acciones realizadas este último año han estado orientadas a enfrentar tres supuestos problemáticos: (i) presenciar actividades fuera de la ley, indebidas o actos de corrupción; (ii) realizar actividades no jurídicas como parte de su trabajo diario; y (iii) sufrir hostigamiento sexual.

Frente al primer supuesto, las acciones que se han emprendido tienen el objetivo de estimular la cultura de la denuncia como una estrategia para combatir la impunidad. Una de ellas se viene materializando con la difusión de una cartilla denominada «ABC SECIGRA», que tiene como finalidad afianzar el compromiso de las y los secigristas en la lucha anticorrupción. Así, se les informa que cuando sean testigos de una situación irregular, sea porque les soliciten realizar alguna actividad fuera de la ley o indebida, o presencien actos de corrupción, deberán ponerla en conocimiento de la Dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica, a fin de darle el trámite respectivo o brindarle la orientación necesaria.

Imagen N° 1:
Denuncia de actos de corrupción



Fuente: ABC Secigra
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Las acciones encaminadas a hacer frente al segundo supuesto problemático también buscan contribuir a que el Programa SECIGRA DERECHO cumpla con su principal finalidad, esto es, fomentar que las y los estudiantes de Derecho cuenten con herramientas para complementar su proceso formativo. Para ello, es importante que las actividades que realicen durante la prestación del servicio sean de naturaleza jurídica. En ese sentido, las universidades participantes, así como las o los responsables del Programa SECIGRA DERECHO de las unidades receptoras, en coordinación con la Dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica, serán los responsables de supervisar que las y los secigristas estén realizando efectivamente tareas jurídicas.

Imagen N° 2:
Actividades jurídicas realizadas por los secigristas



Fuente: ABC Secigra
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Así, por ejemplo, este año se realizó una visita a la Corte Superior de Justicia del Callao a fin de supervisar la labor que venían realizando los 55 estudiantes de Derecho del Programa Secigra en dicha entidad. La visita tuvo como objetivo verificar si los estudiantes estaban realizando actividades de carácter jurídico (en una Sala o un Juzgado), si contaban con las condiciones logísticas para realizar su trabajo y si el pago de sus estipendios se venía realizando oportunamente. También se realizaron visitas de supervisión a otras unidades receptoras en el marco del Programa SECIGRA DERECHO 2019, a fin de conocer el trabajo que vienen desempeñando las y los estudiantes a nivel nacional, además de conocer sus expectativas y sugerencias².

El tercer y último supuesto problemático está referido a situaciones de hostigamiento sexual que pudieran ejercerse o se ejercen durante la prestación del Programa. Cabe recordar que el hostigamiento sexual es una manifestación de discriminación por razón de género y una forma específica de violencia hacia las mujeres que, lamentablemente, refleja las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres [OEA 1996].

Según un estudio exploratorio sobre hostigamiento sexual en mujeres y varones universitarios, elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2012 (MIMP 2012: 45-72), se puede apreciar la prevalencia del hostigamiento sexual, así como las distintas percepciones que tienen las y los universitarios sobre esta. A continuación, se destacan los datos más relevantes relacionados al ámbito laboral:

² El 26 de febrero de 2019, se realizó una supervisión y capacitación a 54 secigristas de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. El 28 de marzo 2019, se realizó una supervisión y capacitación a 33 secigristas del departamento de Ucayali. El 9 de abril de 2019, se capacitó a 16 estudiantes secigristas del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior. El 29 de abril de 2019, se realizó una supervisión y capacitación a 43 secigristas del Ministerio de Salud. El 30 de abril de 2019, se realizó una supervisión y capacitación a 23 secigristas del Ministerio Público de Lima Norte. El 30 de mayo de 2019, se realizó una supervisión y capacitación a 28 secigristas del departamento de Huancavelica. El 27 de junio de 2019, se realizó una supervisión y capacitación a 50 estudiantes secigristas de la ciudad de Ica. El día 11 de julio de 2019, se realizó una supervisión y capacitación a 94 secigristas del departamento de Trujillo. El 8 de agosto de 2019, se realizó una supervisión y capacitación a 26 secigristas del departamento de Madre de Dios. El 15 de agosto de 2019, se realizó una supervisión y capacitación a 82 secigristas de la Corte Superior de Justicia de Lima y Ministerio del interior. El 27 de setiembre de 2019, se realizó una supervisión y capacitación a 94 secigristas del departamento de Arequipa. El 10 de octubre de 2019 se realizó una supervisión y capacitación a 42 secigristas del departamento de Chimbote.

Cuadro N° 1
Situaciones de hostigamiento sexual en mujeres y varones universitarios

De 189 universitarios encuestados residentes en Lima Metropolitana, el 54.5% eran mujeres y el 45.5% eran hombres. Las edades fluctuaban entre los 20 y 24 años de edad (con un 61.9% del total). El rango de 15 a 19 años representaba el 12.2%, y el de 25 a 39 años, el 20.1%.
Respecto a la percepción de los encuestados de la problemática del hostigamiento, el 46.8% considera que el hostigamiento sexual se da porque uno lo permite.
El 6.9% de los encuestados indicó que su centro laboral fue el lugar donde ocurrió la última situación de hostigamiento sexual.
El 8.6% señaló que fue el jefe, coordinador y/o superior quienes ejercieron actos de hostigamiento sexual y el 1.7% señaló que fueron sus compañeros de trabajo.
Frente a la pregunta de si se presentó una denuncia formal o una queja a Recursos Humanos del centro de trabajo o de la escuela o de la universidad, solo el 8% respondió afirmativamente. Cabe señalar que dichas quejas no se presentaron al centro de trabajo, sino a la escuela/ instituto y a la comisaría.
Se tiene que el 59% de los encuestados no recibió información relacionada al hostigamiento sexual antes de dicho estudio exploratorio, y quienes sí recibieron información, la recibieron - sobre todo - por parte de los profesores, padres, amigos.

Fuente: MIMP

Elaboración: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

En igual sentido, el Informe de Adjuntía N° 007-2018-DP/ADM de la Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo 2018), da cuenta de los obstáculos que existen para la sanción de los casos de hostigamiento sexual. Así, señala que “[s]i bien a nivel normativo el hostigamiento sexual laboral es una problemática reconocida, la baja cantidad de denuncias de estos casos da cuenta de que socialmente aún no reconocemos esta manifestación de violencia como un problema real” (Defensoría del Pueblo 2018: 46). Según la Defensoría, esto respondería a:

- La falta o la poca información que se tiene sobre la existencia de un procedimiento administrativo disciplinario para la determinación de la sanción de quienes incurran en actos de hostigamiento sexual, y las medidas de protección a favor de las presuntas víctimas.
- La persistencia de la sexualidad como tabú.
- La poca relevancia que se otorga al tema de violencia sexual contra la mujer.
- La falta de información sobre las manifestaciones del hostigamiento sexual que se dan o se pueden dar en el trabajo.

Si bien no existe un estudio específico sobre la situación de hostigamiento sexual ejercido contra las y los estudiantes universitarios en sus centros de prácticas –que permita identificar el estado situacional actual– difícilmente se puede sostener que esta problemática sea ajena al marco de prestación del Programa.

Para el Minjusdh, la promoción de una administración pública proba, a través de la formación ética de futuras y futuros profesionales de la carrera de Derecho, va de la mano con la erradicación de actos de violencia de género. En esa línea, y en atención al estudio e informe mencionados anteriormente, desde la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa se viene emprendiendo una serie de acciones para prevenir la comisión de actos de hostigamiento sexual en el marco del Programa, así como para promover su efectiva sanción que destierre la impunidad en este tipo de casos.

A través de la difusión de la cartilla «ABC SECIGRA» se pone en conocimiento de las y los secigristas, las universidades y unidades receptoras participantes, el marco normativo que establece el procedimiento administrativo para la sanción de los casos de hostigamiento sexual y la obligación de brindar las medidas de protección correspondientes a favor de las víctimas.

Imagen N° 3:
Procedimiento si son víctimas de hostigamiento sexual



Fuente: ABC Secigra
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Actualmente, se están elaborando los lineamientos para la prevención del hostigamiento sexual en el Programa SECIGRA DERECHO, así como una encuesta especializada en materia de hostigamiento sexual dirigida a las y los secigristas participantes, con la finalidad de tener una aproximación al estado situacional de esta problemática.


Experiencia del examen piloto SECIGRA DERECHO 2019 en la provincia de Huaura

El 26 de enero de 2018, se aprobó el nuevo reglamento de la Ley SECIGRA DERECHO (Decreto Supremo N° 001-2018-JUS), el cual prevé una implementación progresiva, habiéndose implementado en el 2019 en la provincia de Huaura como caso piloto. Este nuevo reglamento dispone que el acceso al programa se da a través de dos modalidades: (i) rendimiento destacado y (ii) examen nacional. A través de la primera modalidad, los primeros y segundos puestos de las universidades participantes tienen la posibilidad de ingresar directamente al programa. La segunda modalidad, en cambio, consiste en la rendición de un examen de conocimientos.

Para esta segunda modalidad, la mencionada norma dispone la conformación de una Comisión Especial para la elaboración de dicha evaluación, la cual debe estar integrada por miembros de reconocida trayectoria y con experiencia en docencia universitaria. Dicha Comisión está encargada de validar la propuesta final del examen piloto, a cargo de la Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así, para la elaboración del examen Piloto Huaura 2019, se dispuso que la comisión especial estuviera integrada por los siguientes tres docentes universitarios: Betzabé Xenia Marciani Burgos, Juan Manuel Sosa Sacio y Fernando del Mastro Puccio.

Asimismo, se publicó el balotario del examen piloto en la página web, el mismo que contenía las siguientes materias: (i) Introducción a las Ciencias Jurídicas, (ii) Derecho Constitucional, (iii) Derecho Procesal Constitucional, (iv) Derecho Penal, Derecho Administrativo, (v) Derecho Internacional Público y (vi) Ética. Como se puede observar, el examen también incluyó temas relacionados a la ética del abogado/a; ello, debido a que es un eje de priorización, tanto para la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa como para el Viceministerio de Justicia.

Imagen N° 4:
Balotario de preguntas Examen Piloto Huaura 2019

 **PERÚ** **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** **Defensoría del Pueblo** **Defensoría General de Justicia y Libertad Religiosa** **Defensoría de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

PROGRAMA PILOTO HUAURA 2019

BALOTARIO DEL EXAMEN SECIGRA DERECHO

1. **Introducción a las Ciencias Jurídicas**
1.1. Aplicación de la norma en el tiempo.
1.2. Métodos de interpretación e integración.
1.3. Rango normativo (jerarquía de normas).


2. **Derecho Constitucional**
2.1. Constitución Política del Perú.
2.2. Teoría del Estado.
2.3. Test de proporcionalidad.

3. **Derecho Procesal Constitucional**
3.1. Procesos constitucionales.

4. **Derecho Administrativo**
4.1. El acto administrativo.
4.2. Procedimiento administrativo general.

5. **Derecho Internacional Público**
5.1. Derecho Internacional de los Derechos Humanos
5.1.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
5.1.2. Órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
5.2. Derecho Internacional Humanitario
5.2.1. Convenios de Ginebra.
5.2.2. Protocolos Adicionales.

6. **Ética del Abogado/a**
6.1. Normas del Código de Ética del Abogado.


A. RUEDA B.

Scipión Llona 350, Miraflores
Central Telefónica: (511) 204-8020
www.minjus.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Para el Programa Piloto Huara 2019 se abrieron 45 plazas en cinco entidades públicas: Corte Superior de Justicia de Huaura, Ministerio Público de Huaura, Dirección Distrital de Defensa Pública de Huaura, Procuraduría Pública Anticorrupción de Huaura, Zona Registral N° IX de la Oficina Registral de Huacho y la Zona Registral N° IX de la Oficina Registral de Barranca.

De esta cifra, los primeros y segundos puestos obtuvieron plazas de manera directa (un total de 8 plazas). Las 37 plazas restantes se definieron por orden de mérito, conforme a los resultados obtenidos por las y los postulantes luego de rendir el examen piloto tramo I y el examen piloto tramo II. Así, un total de 216 estudiantes (86 varones y 130 mujeres) rindieron examen. Estos estudiantes pertenecían a: la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, la Universidad Nacional de Barranca, la Universidad San Pedro y Universidad Alas Peruanas.



Foto: Examen Piloto SECIGRA DERECHO - Tramo II

Si bien estos exámenes pilotos están sujetos a ajustes normativos en el tiempo, para la gestión resulta prioritario que todas las modificaciones realizadas en el marco del Programa SECIGRA DERECHO respondan al perfil del abogado o abogada que requiere el Estado y la sociedad; es decir, uno que además de conocimientos técnicos, acceda al Estado por mecanismos meritocráticos y su formación responda a una verdadera vocación de servicio público.

II. Etapa de seguimiento del ejercicio profesional: el fortalecimiento de la práctica jurídica a través del Registro Nacional de Abogados Sancionados (RNAS)

Como se ha desarrollado en el acápite anterior, la formación ética en la carrera de Derecho resulta fundamental, toda vez que, de impartirse adecuadamente, se reducen los incentivos perversos de infringir la ley o realizar conductas antiéticas.

Luego de culminada la carrera, las y los abogados se encargan de labores tan trascendentes como dirimir o mediar en conflictos, contribuir técnicamente con la defensa de los justiciables, asesoramiento empresarial, colaboración con las administraciones en infinidad de gestiones y procedimientos, y qué duda cabe, como funcionario público, en el propio funcionamiento de la justicia (Santana 2018: 4). Por esta razón, se encuentra acreditado que la ética es transversal a todas las etapas de la profesión, de forma tal que no puede limitarse a la formación académica, siendo necesario que el ejercicio de estas tareas vaya también acompañado de un control ético posterior, que imponga las sanciones correspondientes frente a la comisión de faltas en la materia.

Como parte del compromiso del Minjusdh, en el desarrollo de la gestión de la calidad del servicio de justicia y la coordinación de lineamientos éticos relacionados con el ejercicio de la abogacía, en el 2016 se le asignó la obligación legal de crear y administrar el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica (RNAS) a través del Decreto Legislativo N° 1265,³ el mismo que fue reglamentado mediante Decreto Supremo N° 002-2017-JUS (2017)⁴.

³ El Decreto Legislativo N° 1265 fue publicado en El Peruano el 16 de diciembre de 2016.

⁴ El Decreto Supremo N° 002-2017-JUS fue publicado en El Peruano el 27 de enero de 2017.

El RNAS es una plataforma digital en la que se inscriben las sanciones definitivas o firmes que se imponen a las y los abogados que, en el ejercicio privado de su profesión o en el ejercicio de un cargo público o función pública, incurrieron en mala práctica profesional. De esta manera, su importancia reside en que permite a la ciudadanía y a las entidades privadas, consultar si la o el abogado que desean contratar, ha sido sancionado en alguna oportunidad y conocer la conducta que conllevó a dicha sanción. De igual manera, en el caso de las entidades públicas, les permite conocer si éste o ésta se encuentra habilitado para el ejercicio de la profesión, en la medida que, es nula la contratación de un profesional suspendido o inhabilitado, pudiendo incluso determinarse responsabilidad ante dicho supuesto.

Visibilizar las sanciones a través del RNAS constituye una herramienta útil de transparencia que no solo incide en el control de la profesión y el desincentivo de conductas contrarias a la ética y malas prácticas; sino que también contribuye a la toma de decisiones por parte de la ciudadanía y de entidades públicas, quienes podrán ejercer una contratación responsable e informada que les permita analizar las consecuencias y alcances en relación a un determinado profesional del derecho.

Este «poder» de fiscalización puesto en manos de la ciudadanía, materializado en el posible desistimiento en la contratación de abogados y abogadas con sanciones inscritas en el RNAS, supone también satisfacer las expectativas de la población respecto al adecuado ejercicio de la profesión. De este modo, se espera que el profesional del derecho realice todo aquello que se encuentre a su alcance para tutelar los derechos e intereses de su representado, haciéndolo siempre por medios conformes a la ley y guardando respeto de los principios éticos y constitucionales.

En ese sentido, es posible afirmar que, las y los abogados, al igual que todo profesional, tienen la libertad de desempeñarse en el cargo, tarea o función que elijan; sin embargo, es innegable que la abogacía tiene como uno de sus pilares la vocación de servicio y sus visibles resultados en la sociedad. La virtud del abogado se constituye en su voluntad de servir a los demás, lo cual debe tener como eje principal la búsqueda de justicia materializada en su compromiso con la sociedad, la misma que se manifiesta en voluntad puesta al servicio de la comunidad (Sañudo 2014, p. 258).

Con esta finalidad, el Minjusdh ha venido recogiendo información respecto a sanciones impuestas a los profesionales del derecho, a fin de cumplir con sus compromisos legales y funcionales. En este ejercicio, se ha construido estadística respecto al recuento de sanciones por malas prácticas; la cual ha arrojado un total de 1031 sanciones registradas entre los años 2017 a noviembre de 2019; siendo las sanciones más reiteradas aquellas que corresponden a las multas, suspensiones y destituciones, tal y como se ve a continuación:

Cuadro N° 2
Sanciones del RNAS en el periodo 2017 a noviembre de 2019

Total de sanciones reportadas por año		
2017	2018	2019
331	282	418
Total: 1031		

Tipos de sanciones inscritas	
Multa	669
Suspensión	129
Separación	10
Destitución	221
Expulsión	0
Inhabilitación	2
Total	1031

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

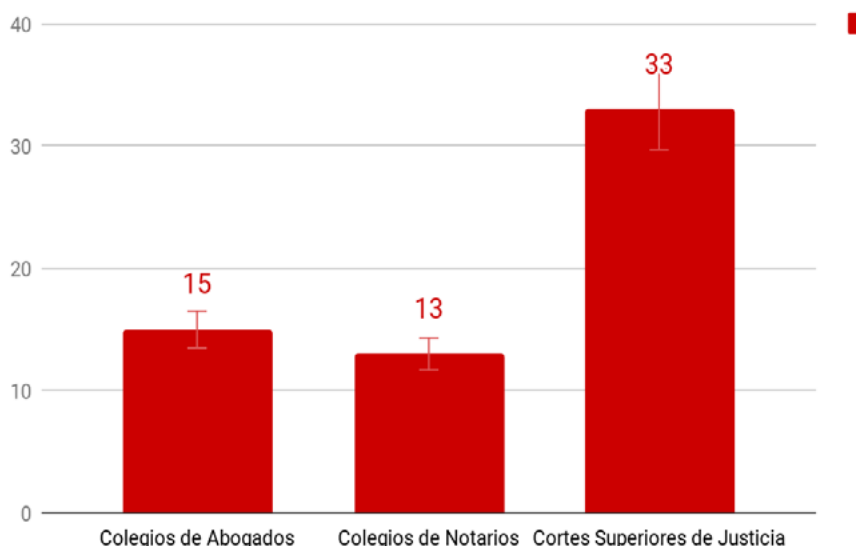
Por otro lado, con base a la relevancia del ejercicio ético del derecho, las sanciones en la materia y su influencia en la toma de decisiones, el Decreto Legislativo que crea el RNAS advirtió la necesidad de que las entidades del sistema de administración de justicia y de la administración pública sean responsables de comunicar al Minjushd la imposición de sanciones a abogados y abogadas dentro de sus respectivas competencias.

En ese sentido, la ley señala que las entidades obligadas a remitir información a este Registro son: el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia (ex Consejo Nacional de la Magistratura), los Colegios de Abogados, los Colegios de Notarios, los Tribunales Administrativos y demás entidades a las que se refiere el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444²⁶, Ley del Procedimiento Administrativo General, lo cual se canaliza a través de la designación de un funcionario/a responsable de remitir esta información.

A la fecha, no todas las entidades contempladas en el párrafo anterior han designado funcionarios responsables de reportar al RNAS. En ese sentido, de acuerdo con los datos con los que cuenta el Minjushd a noviembre de 2019, se tiene un total de 106 responsables designados a nivel nacional, entre Cortes Superiores de Justicia, Colegio de Notarios y Colegios de Abogados.⁵

Imagen N° 5
Entidades que han designado funcionarios responsables de reportar al RNAS

Número de representantes designados según entidades responsables



Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Esta información da cuenta de la necesidad de contar con un compromiso interinstitucional para lograr una transparencia real y confiable de las sanciones por mala práctica profesional. Sobre el particular, se viene sosteniendo una serie de reuniones de coordinación con las entidades obligadas, con la finalidad de facilitar los canales de coordinación y el flujo de información.

Retos y desafíos en torno al fortalecimiento de la práctica jurídica

Se tiene que el RNAS constituye una herramienta de fácil acceso al público que contribuye en la toma de decisiones informada para la contratación de los servicios de las y los abogados, información que,

⁵ El TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General fue aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en El Peruano el 25 de enero de 2019.

además, es de obligatorio seguimiento para las entidades del Estado⁶.

No obstante, aún existen múltiples desafíos en torno al seguimiento de sanciones impuestas a abogados y abogadas. Por ejemplo, si bien el reglamento indica que el registro se aplica de manera progresiva a nivel nacional, a casi tres años de su implementación, aún existe un gran número de entidades responsables que no reportan sanciones.

Al respecto, consideramos que ello puede deberse, de algún modo, a la falta de publicidad del RNAS, principalmente entre las entidades de la administración pública. Sin embargo, respecto a las entidades de la administración de justicia, la falta de reporte responde a otras consideraciones; se observa así que, por ejemplo, en el caso de Cortes Superiores de Justicia, solo 23 de las 34 han reportado alguna vez una sanción, las cuales corresponden a multas (que son infracciones leves), no contándose aún con información respecto a las sanciones de inhabilitación del ejercicio profesional impuestas en el marco de una investigación penal.

O en el caso de los Colegios de Abogados, cuyas competencias los convierten en los mayores responsables de fortalecer la práctica jurídica y sancionar la mala práctica profesional, se tiene que, a la fecha, no todos cuentan con los órganos de control debidamente implementados (Consejo de Ética y Tribunal de Honor); y que únicamente 8, de los 31 Colegios, han reportado alguna vez una sanción al RNAS.

Por otro lado, existe un gran déficit en la coordinación entre entidades para promover una correcta aplicación de sanciones de conductas graves. Por ejemplo, se ha observado que las sanciones impuestas por los Colegios de Notarios, que pudieron conllevar a una suspensión o destitución de un notario, no son reportadas al Colegio de Abogado de donde es agremiado como abogado dicho notario, teniendo así que una conducta, por más grave que haya sido, únicamente tendrá incidencia en la colegiatura como notario, lo cual vulnera lo establecido en el artículo 1 del Código de Ética del Abogado⁷.

También, debe tenerse presente que la falta de formación ética en los abogados y abogadas no solo repercute en las y los profesionales sancionados; sino que ello tendrá incidencia en los abogados/as que imponen sanciones a sus pares, pues es en esta situación en la que la probidad ocupa un rol central. Por una cuestión de asimetría, resulta mucho más sencillo sancionar a tus subordinados que a las y los abogados que se encuentren ocupando un cargo similar a la autoridad que sanciona. Por esta razón, la ética debe ser un elemento transversal a la profesión, que irradie en todos los espacios y en todas las formas de ejercerla.

Reflexión final

Impulsar cursos y capacitaciones de ética en el Programa SECIGRA DERECHO constituye un desafío que debe trascender a las gestiones particulares para constituirse como una política de Estado a nivel nacional. La experiencia da cuenta que las y los secigristas son estudiantes que aportan enormemente en sus respectivas unidades receptoras. Ese aporte teórico debe profundizarse con capacitaciones y actividades de incidencia en la ética del ejercicio profesional, con la finalidad de incentivar que, en el Estado, solo exista espacio para quienes sean –sobre todo– personas íntegras. Asimismo, desde las plataformas de información de sanciones como el RNAS, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos busca desincentivar conductas ajenas a la probidad y el correcto desempeño de la abogacía, por lo que asume el reto de mantenerlo actualizado y con información certera. Mirándose de forma aislada, pueden significar acciones pequeñas, pero si se trabajan y potencian interinstitucionalmente con un apoyo sostenido de la academia, podremos encontrarnos, dentro de pocos años, frente a una Administración Pública mucho más eficiente y proba.

⁶ La Dirección General de Justicia, a través de la Dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica, ha impulsado la implementación del RNAS en los Portales de Transparencia del Estado (Ley N° 30934). En ese sentido, se han establecido reuniones de coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de que las entidades de la administración de justicia establezcan enlaces al RNAS dentro de sus portales de transparencia. Si bien, la Autoridad Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, es la responsable de hacer cumplir estas disposiciones, el Minjusdh interviene en este procedimiento de acuerdo a ley.

⁷ CÓDIGO DE ÉTICA DEL ABOGADO. Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este Código, son obligatorias para los abogados inscritos en los Colegios de Abogados de la República, miembros de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, cualquiera sea el ámbito o función que desempeñen. Todos los abogados sin distinción alguna, deben observar el presente Código, sea que el acto violatorio de las normas éticas se haya cometido en el ejercicio de la profesión, en la actividad pública o privada o cual fuere el cargo que desempeñe, así este provenga de elección popular o por designación. En consecuencia, el ejercicio del patrocinio judicial y/o administrativo, la consultoría o asesoría, la función jurisdiccional o notarial y cualquier otra para la cual se exija el título de abogado, queda comprendido en los alcances del presente Código. (Énfasis agregado).

Referencias

ATIENZA, Manuel. (s/f). Vaz Ferreira citado en: "Sobre la ética de los abogados". Universidad de Alicante, (pp. 6). Fecha de consulta: 15 de setiembre de 2019. <https://dfddip.ua.es/es/documentos/sobre-la-etica-de-los-abogados.pdf?noCache=1422624251985>

ATIENZA, Manuel. (2003). Ética Judicial: ¿Por qué no un código deontológico para jueces?. Revista Jueces para la Democracia. ISSN 1133-0627, N° 46, 2003, págs. 43-46. (pp. 43). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=409552>

DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2018). "Aproximación a la problemática del hostigamiento sexual laboral contra mujeres: Supervisión a Ministerios, Gobiernos Regionales y Poder Judicial". Informe N° 007-2018-DP/ADM. Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Fecha: 15 de junio de 2018. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Informe-de-Adjuntia-007-2018-DP-ADM-II.pdf>

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (2012). "Hostigamiento sexual en mujeres y varones universitarios. Estudio exploratorio". Páginas 45 – 72. <http://redin.pncvfs.gob.pe/images/publicacion2/hostigamiento-sexual-en-mujeres-y-varones-universitarios9.pdf>

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2018) Resolución Directoral N° 225-2018-JUS/DGJLR. Lima, 9 de noviembre de 2018. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/228760/RD225-2018-JUS_DGJLR.pdf

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (1996). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Para". Ratificada por el Perú el 6 de abril de 1996. Preámbulo.

SANTANA RAMOS, Emilia (2018) "El rol del abogado ante la ética y el ejercicio profesional". Revista de la Facultad de Derecho, No. 44, ene.-jun. 2018. Montevideo, (Página 4). <http://www.scielo.edu.uy/pdf/rfd/n44/2301-0665-rfd-44-143.pdf>

SAÑUDO OSPINA, José Luis. (2014). "Cuestiones ético-profesionales en el ejercicio del derecho". Revista CES DERECHO. Volumen 5, N° 2. Julio-Diciembre 2014. (Página 258). <http://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/view/3041/2220>

EL PERÚ PRIMERO



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa
Calle Scipión Llona 350 - Miraflores